



UNIVERSIDAD DE CUENCA

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE GÉNERO Y DESARROLLO

**“INCORPORACIÓN DEL TIPO PENAL FEMICIDIO EN EL CÓDIGO
ORGÁNICO INTEGRAL PENAL: DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
¿SOLUCIÓN O CONFLICTO?”**

Monografía previa a la obtención del

Título de Licenciado en Género y Desarrollo

Autor: José Luis Pizarro Atariguana

Directora: Dra. Nancy Susana Cárdenas Yáñez

CUENCA – ECUADOR

SEPTIEMBRE 2016



RESUMEN

La presente monografía analiza desde un enfoque de género el femicidio como fenómeno social, sus orígenes, sus características fundamentales y las críticas que giran en torno al mismo. Así también se analiza el femicidio como tipo penal autónomo incorporado dentro de nuestra legislación a partir de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal.

Si bien es cierto, esta monografía está principalmente enfocada en analizar cada una de las críticas que existen en torno a este nuevo tipo penal, empero, se ha creído conveniente referirse también a los avances que desde nuestra opinión se ha podido alcanzar a través de su tipificación.

En el Capítulo II se analiza la violencia de género como construcción social, su origen, clasificación y los agentes socializadores que intervienen en la naturalización de este tipo de violencia. Así también se analiza las diferentes críticas existentes en contra del derecho, emitidas sobre todo por movimientos feministas.

En la segunda parte del capítulo II se analiza las diferentes críticas que existen respecto de la tipificación de este nuevo delito, los objetivos que se pretendieron alcanzar a través de del mismo, los problemas de constitucionalidad que presentan y si su tipificación puede ser considerado un triunfo de las mujeres.

En el capítulo III se analiza la regulación del femicidio en los diferentes países de Latinoamérica; la fuerte influencia que ejerce los medios de comunicación dentro de este fenómeno social, las estadísticas actuales sobre el fenómeno y finalmente se analiza la única sentencia que sobre el femicidio ha sido dictada en la ciudad de Cuenca

PALABRAS CLAVE

Enfoque de género, femicidio, estereotipos, mujer, violencia, COIP, debido proceso.



ABSTRACT

This monograph analyzes from a gender perspective the femicide as a social phenomenon, its origins, its fundamental characteristics and criticisms revolve around it. The femicide is also analyzed as an autonomous offense incorporated into our legislation from the effective date of the Código Orgánico Integral Penal.

While it is true, this monograph is mainly focused on analyzing each of the criticisms that exist around this new offense, however, has seen fit to refer also to advances that from our opinion has been obtained through its typing.

In Chapter II, the violence of gender is analyzed as a social construct, its origin, classification and socializing agents involved in the naturalization of this kind of violence. Thus the various criticisms against the existing law, issued primarily by feminist movements is also discussed.

In the second part of chapter II the various criticisms that exist regarding the typification of this new offense is analyzed, the objectives sought to be achieved through it, the constitutional problems that arise and if your typing can be considered a triumph of the women.

In Chapter III is analyzed the femicide regulations in the different countries of Latin America; the strong influence of the mass media in this social phenomenon, existing statistics and finally the only sentence on femicide has been issued in the city of Cuenca is analyzed

KEYWORDS

Gender perspective, femicide, stereotypes, women, violence, COIP, due process



ÍNDICE

RESUMEN	1
ABSTRACT	2
ÍNDICE	3
CLÁUSULA DE DERECHOS DE AUTOR	6
CLÁUSULA DE PROPIEDAD INTELECTUAL	7
DEDICATORIA	8
AGRADECIMIENTO	9
INTRODUCCIÓN	10
CAPITULO I	12
FEMICIDIO/FEMINICIDIO EN EL ECUADOR	12
1.1. Antecedentes históricos del Femicidio/Feminicidio	12
1.2 Concepción teórica del Femicidio/Feminicidio	16
1.3. Femicidio y feminicidio: Diferencia conceptual	19
1.4) Tipificación del Femicidio como delito autónomo en el Código Orgánico Integral Penal	22
1.5) Sujeto Activo y Sujeto Pasivo en el tipo penal Femicidio. Críticas ...	25
1.6) Avances alcanzados a través de la tipificación del Femicidio/feminicidio	27
CAPITULO II	36
VIOLENCIA DE GÉNERO Y FEMICIDIO	36
2.1 Violencia de género como construcción social	36
2.1.1 Violencia	36
2.1.2 Violencia de Género. - Concepto	40



2.2 Críticas del movimiento feminista al derecho	63
2.3 Críticas a la tipificación del femicidio	69
2.3.1. Fundamentos de la tipificación del femicidio	69
2.3.2 Derecho penal como solución a un problema social de violencia de género.....	72
2.3.3 Femicidio: ¿Un triunfo de las mujeres violentadas?	77
2.3.4 Teorías de la pena y el Femicidio.....	83
2.3.5 La ejecución de la pena desde un enfoque de derecho penal mínimo.....	90
2.3.6 La sexualización de la respuesta punitiva	94
2.3.7. El femicidio y su constitucionalidad	97
2.4 Síndrome de Adaptación paradójica, síndrome de Estocolmo y su relación con el Femicidio.....	101
CAPITULO III.....	105
EL FEMICIDIO EN EL MUNDO	105
3.1 Femicidio como delito propio regulado en algunos países de Sudamérica	105
3.1.1 Modelos restrictivos de tipificación	105
3.1.1.1 Costa Rica.....	105
3.1.1.2 Chile	106
3.1.1.3 Perú.....	107
3.1.2 Modelos amplios de tipificación	109
3.1.2.1 Guatemala.....	109
3.1.2.2 El Salvador	110
3.1.2.3 Nicaragua y Bolivia.....	111



3.1.2.3 México	112
3.2 Los medios de comunicación y su influencia en la violencia de género	114
3.3. Estadísticas nacionales respecto del tema de violencia de género y femicidio. Análisis.....	120
3.4 Análisis de un proceso judicial vinculado con el tema de Femicidio	129
3.4.1. Individualización del proceso	129
3.4.2. Narración de los hechos.....	129
3.4.3 Pruebas evacuadas.....	130
3.4.4 Alegatos	130
3.4.5 Razonamiento del tribunal.....	132
3.5. Opiniones de catedráticos sobre la tipificación del femicidio	134
3.5.1. Dr. Christian Masapanta Gallegos.....	134
3.5.2. Dr. Álvaro Román.....	135
3.5.3 Dr. Jorge Vicente Paladines	136
3.5.4. Dra. María Paula Romo.....	137
CONCLUSIONES	138
RECOMENDACIONES.....	142
ANEXOS.....	145
Anexo N° 1	145
Anexo N° 2	146
Anexo N° 3	148
BIBLOGRAFIA.....	149



CLÁUSULA DE DERECHOS DE AUTOR

Yo, José Luis Pizarro Atariguana, autor de la monografía “Incorporación del tipo penal femicidio en el Código Orgánico Integral Penal: Desde la perspectiva de género ¿solución o conflicto?”, reconozco y acepto el derecho de la Universidad de Cuenca, en base al Art. 5 literal c) de su Reglamento de Propiedad Intelectual, de publicar este trabajo por cualquier medio conocido o por conocer, al ser este requisito para la obtención de mi título de Licenciado en Género y Desarrollo. El uso que la Universidad de Cuenca hiciere de este trabajo, no implicará afección alguna de mis derechos morales o patrimoniales como autor/a

Cuenca, octubre 2016.

Jose Luis Pizarro Atariguana
C.I: 0104757547



CLÁUSULA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Yo, José Luis Pizarro Atariguana, autor de la monografía "Incorporación del tipo penal femicidio en el Código Orgánico Integral Penal: Desde la perspectiva de género ¿solución o conflicto?", certifico que todas las ideas, opiniones y contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva responsabilidad de su autor/a.

Cuenca, octubre 2016.

Jose Luis Pizarro Atariguana

C.I: 0104757547



DEDICATORIA

*Este trabajo monográfico lo dedico a mi familia,
en especial a mi madre Rosa Elena, quien
siempre me ha apoyado en cada una de
mis decisiones y retos asumidos; a mis hermanos
quienes han sido un pilar fundamental
que han permitido que cada día
vaya creciendo como profesional.*



AGRADECIMIENTO

*Agradezco en primer lugar a Dios que me ha
dado la fortaleza y sabiduría en
aquellas largas noches de estudio.
Así también un sincero agradecimiento a mi directora,
Dra. Susana Cárdenas, por su gran apoyo y
dedicación que me ha dado.
A mis amigas CECY, ANDREA, JESSICA que me han permitido
ser parte de sus vidas, y que siempre he podido
contar con su apoyo.
Agradezco a aquella persona especial en mi vida,
por su apoyo y comprensión.
Finalmente agradezco a cada uno de mis docentes
quienes han compartido sus conocimientos,
construyendo profesionales que posibiliten
deconstruir las desigualdades sociales.*



INTRODUCCIÓN

El asesinato de una mujer por razones de género no es un fenómeno social de los actuales tiempos, sin embargo, recién en las últimas décadas se le ha dado mayor importancia. Frente a esto, el Estado ha venido asumiendo una actitud pasiva y que solamente a consecuencia de las continuas demandas sociales sobre todo encabezadas por movimientos feministas, han comenzado asumir sus responsabilidades, aunque de forma limitada.

La respuesta más común y a veces única que los Estados han adoptado frente a esta problemática ha sido la creación de tipos penales que sancionen este fenómeno social, siendo nuestro país uno de ellos. Cabe hacernos la siguiente pregunta ¿la estrategia es correcta?

Detrás del asesinato de una mujer por razones de género, están factores socioculturales, estereotipos, relaciones de poder que deben ser analizados, a fin de poder dar una respuesta eficaz frente a este fenómeno social. Para ello el enfoque de género es una herramienta fundamental que nos permite visibilizar aquella estructura social en la que vivimos, caracterizada por ser inequitativa, discriminatoria y que debe ser utilizada en el diseño de una estrategia que busca erradicar el asesinato de las mujeres por cuestiones de género.

El artículo 70 de la Constitución de la República del Ecuador establece la obligación de formular y ejecutar políticas que posibiliten alcanzar una igualdad entre hombres y mujeres, para lo cual establece la necesidad de incorporar el enfoque de género en toda política del sector público.

Lamentablemente en los actuales momentos, en nuestro país existe un discurso de excesiva intervención punitivista, pues lo que importa es la sanción del femicida a través del encarcelamiento; dejando a un lado el interés por la prevención, la reparación integral de las víctimas, y las más fundamental no se busca deconstruir aquella sociedad patriarcal en la que vivimos.

No estamos en contra de la sanción de este tipo de violencia, sin embargo, la estrategia utilizada es cuestionable, por cuanto consideramos que no permitirá erradicar de forma eficaz este fenómeno social, cuyos orígenes son las estructuras



sociales androcéntricas y patriarcales; es por ello que dentro del presente trabajo se pretende visibilizar desde un enfoque de género las críticas que existe alrededor de este nuevo tipo penal, a fin de que puedan ser superadas en aras de alcanzar una auténtica protección de las mujeres.



CAPITULO I

FEMICIDIO/FEMINICIDIO EN EL ECUADOR

1.1. Antecedentes históricos del Femicidio/Feminicidio

El femicidio por su naturaleza está íntimamente vinculado con la violencia en sus diversos tipos ejercida en contra de las mujeres, en virtud de ello es menester partir haciendo referencia a las primeras manifestaciones violentas que se encuentran registradas en la historia de la humanidad y los movimientos sociales que han intervenido en su lucha; pues es fundamental tener en cuenta el contexto histórico y político para un mejor análisis.

Como referencia podemos mencionar que en Europa Occidental entre los años 1500 y 1560 fueron acusadas de brujería y ejecutadas aproximadamente 500.000 personas, la mayoría de ellas mujeres (85%), puesto que éstas eran consideradas seres peligrosos, peligro que era entendido desde un punto de vista sexual, así lo establece el tratado de brujería *Malleus Melleficarum* en la que establecía “las hechiceras contaminan el acto sexual, impiden la procreación, transforman a los hombres en bestias [...]”¹. En virtud de ello en el siglo XV y XVI las mujeres jóvenes, solas o viudas eran asesinadas por ser consideradas peligrosas.

El problema no es reciente, lo nuevo es el mayor interés que la sociedad ha dado a éste fenómeno, sobre todo por aquellos movimientos de defensa de los derechos de las mujeres y que, a consecuencia de aquella lucha y reclamo, se pudo posicionar a la violencia de género como un problema que debía ser analizado a nivel global.

La primera “ola feminista” tiene su origen en Inglaterra y Norteamérica a finales del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, cuya lucha estaba enfocada en alcanzar una igualdad legal entre hombres y mujeres en el ámbito educativo,

¹ Nachman Ben-Yehuda, *Deviance and moral boundaries: witchcraft, the occult, science fiction, deviant sciences and scientists* (Chicago: University of Chicago Press, 1985). Citado por Sylvie Frigon en Mujeres, herejías y control social, en *Femmes et Droit*, Vol 7, (Canadá: s.e. 1994).



económico y político; sin que exista hasta entonces discurso en torno al tema de la violencia de género peor aún sobre el femicidio.

En la década de los sesenta surge la “segunda ola feminista” en donde priman diversos movimientos activistas como por ejemplo el Movimiento de Liberación de la Mujer, Movimiento de liberación Gay, Black Power entre otros; cuya lucha estaba enfocada sobre todo al ámbito académico, en donde la investigación tuvo como premisa la necesidad de entender las causas de la opresión de las mujeres, con el objeto de volcar o subvertir el orden social de la dominación masculina.² Debemos destacar que la segunda ola feminista (en sus inicios) tampoco presta mayor interés a la violencia ejercida sobre las mujeres.

La violencia ejecutada sobre las mujeres no fue objeto específico de estudio de los movimientos feministas de la primera ola, así como tampoco en los inicios de la segunda, quizá una de las razones era que hasta entonces no existía información respecto de aquella violencia, siendo éste, uno de los aportes que la tipificación del femicidio realiza conforme se analizará más adelante.

Dentro de la segunda ola feminista surgieron múltiples corrientes (liberales, radicales, socialistas, culturales, entre otras.), dentro de las cuales el tema de violencia no ha tenido igual importancia ni trato, circunstancia que ha terminado complicando la lucha contra la violencia de género, así como diversificando las estrategias y la correspondiente tipificación.

El discurso de la violencia ejercida en contra de las mujeres comienza a visibilizarse en el año 1971 cuando se abre en Londres un refugio para mujeres maltratadas³ y, en América Latina concretamente en Puerto Rico en 1979 se abre el refugio denominado “Casa Protegida Julio Burgos”.⁴ Al respecto Carcedo y Molina refieren:

² Patsilí Toledo Vásquez y Patricia Laurenzo Copello, *Femicidio*, 1. ed (Buenos Aires: Didot, 2014), 39.

³ Chiswick Women’s Aid, fundado –entre otras- por la activista Erin Pizzey.

⁴ Elizabeth Guerrero, *Informe sobre violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe*, (Santiago de Chile: 2002). Disponible en: http://192.64.74.193/~genera/newsite/images/cdr-documents/publicaciones/doc_178_DOCUMENTO-20ISIS.pdf. Consulta: 19 de Diciembre de 2015.



Los albergues representaron un hito histórico. Se puede decir que con ellos se inició el movimiento contra la violencia hacia las mujeres. No solo visibilizaron este problema frente a toda la sociedad, además mostraron la voluntad colectiva de las mujeres de enfrentarlo a través de su organización permanente y de propuestas definidas que llevaron a la práctica. Gracias a los albergues millones de mujeres en todo el mundo supimos que la agresión en las relaciones de pareja es un problema universal que afecta a todos los grupos sociales. Supimos también que no estábamos solas en nuestro deseo de erradicarlo, que otras mujeres habían tomado ya la iniciativa.⁵

Respecto al femicidio, se dice que la primera autora que utilizó este término fue Diana Russell, quien es una de las primeras activistas y escritoras feministas, aunque ella aclara que éste término “ha estado en uso desde hace más de dos siglos y apareció por primera vez en la literatura, en *A Satirical View of London* (Inglaterra, 1801) para denominar ‘el asesinato de una mujer’”.⁶ Sin embargo de aquello, formalmente se considera que la primera vez que se utilizó el término femicidio, fue la autora antes mencionada en el pleno del Primer Tribunal Internacional de Crímenes contra las mujeres en 1976 convocado por Simone de Beauvoir, dentro del cual se refirió en términos generales aunque no se dio una definición explícita al respecto sino hasta la década de los noventa.

El término femicidio fue definido por Diana Russell y Jill Radford como “el asesinato de mujeres realizado por hombres motivado por odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad de las mujeres”.⁷ Resulta menester destacar que esta definición surge en aquellas épocas en las que se suscitaba un importante debate en los Estados Unidos de Norteamérica respecto del reconocimiento de los *Hates Crimes* impulsado sobre todo por movimientos de derechos civiles y diversos

⁵ Ana Carcedo y Giselle Molina, *Mujeres contra la violencia: Una rebelión radical*, (San José de Costa Rica: Diseño Editorial S.A., 2001), 102.

⁶ Russell, Diana E.H., “Definición de feminicidio y conceptos relacionados”, *Feminicidio, justicia y derecho*, México, Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada, 2005.

⁷ Diana E. H Russell et al., *Feminicidio: una perspectiva global* (México: UNAM, Centro de Investigaciones Interdisciplinaria en Ciencias y Humanidades, 2006).



colectivos discriminados, a través del cual se buscaba visibilizar la violencia que afectaba de manera específica a diversos grupos socialmente discriminados. Las organizaciones de mujeres lucharon por la incorporación de los crímenes basados en prejuicios de género dentro de los *hates crimes*, lucha que no prosperó.

En efecto, en 1990 se aprobó el *Hate Crimes Statistics Act* dentro del cual se estableció los crímenes motivados por la orientación sexual, raza, religión, origen nacional o étnico de la víctima, dejando a un lado el crimen por cuestiones de género.

A su vez en México, en el mismo año se dio un preocupante aumento de homicidios y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua; que abrió el debate en torno a los asesinatos de las mujeres por razones de género. Dentro de este contexto, en el año de 1993 en la ciudad antes referida se encontró el cuerpo de una mujer, abandonado con indicios de violencia sexual y es ahí cuando se comienza a llevar un registro de los casos de este tipo de asesinatos por parte de los colectivos de mujeres activistas.

Al respecto Snaidas afirma:

[...] la reacción de las autoridades locales fue adjudicar las muertes al accionar de asesinos seriales, motivados por el hecho de que las víctimas utilizaban minifaldas, salían de baile, eran fáciles o prostitutas. Hay informes acerca de que la respuesta de las autoridades pertinentes frente a los familiares de las víctimas osciló entre indiferencia y hostilidad. De hecho, sólo el 20 % de los homicidios han sido esclarecidos.⁸

La falta de interés, relacionado con los prejuicios existentes, impidieron que las autoridades mexicanas adopten medidas concretas frente a éste fenómeno; se tuvo que esperar hasta el año 2001 para que se le dé mayor importancia.

En efecto, en el año 2001 en la Ciudad Juárez, se suscitó un hecho que llamaría la atención de todo el Estado mexicano y de organizaciones de defensa

⁸ Javier Snaidas, *El feminicidio en América Latina. Historia y perspectivas*. V Jornadas de Jóvenes Investigadores. Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. 2009



de los derechos de las mujeres tanto nacionales como internacionales. Pues, en fecha 06 y 07 de noviembre de 2001 se encontró en un lote baldío los cuerpos de Esmeralda Herrera Monreal, Claudia Ivette Gonzáles Banda y Laura Berenice Ramos junto con los restos óseos de cinco mujeres más con señales de tortura y violencia sexual; lo cual conmocionó a toda la región, suceso conocido también como el caso del “Campo Algodonero”.

Éste hecho se convirtió en un referente de lucha contra los femicidios, a tal punto que fue puesto a conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2002, la misma que a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH), en el año 2009 juzgó y sancionó al Estado Mexicano declarándole culpable de haber violado los derechos humanos de las víctimas así como de sus familiares, imponiéndole entre otras medidas la obligación de investigar, identificar y juzgar este tipo de violaciones de derechos humanos así como ejecutar medidas de satisfacción y garantías de no repetición.⁹

Todos estos acontecimientos marcaron el inicio de una lucha en contra de este tipo de muertes violentas, siendo el derecho penal el principal instrumento utilizado; a tal punto que en la actualidad la mayoría de países sobre todo latinoamericanos han creado tipos penales que sancionan este fenómeno social.

1.2 Concepción teórica del Femicidio/Feminicidio.

Es menester partir mencionando que existen autores/as que asumen al femicidio y feminicidio como sinónimos, así también existen otros que le otorgan conceptos diferentes; en virtud de ello, se buscará adoptar una posición sobre estos dos términos, pero para ello se partirá mencionando algunas definiciones indistintamente respecto del femicidio y feminicidio.

La jurista y escritora feminista Isabel Agatón al feminicidio lo define como:

El resultado de un continuum de violencias que se ejerce contra las mujeres, en el ámbito público o privado, como una manifestación de poder y control que

⁹ CIDH, Caso Gonzales y otras vs. México, sentencia emitida el 16 de noviembre de 2009.



ejercen los hombres sobre la libertad, la intimidad, el cuerpo, el pensamiento y la vida de las mujeres, avalado culturalmente, consentido hace un tiempo por el derecho explícitamente y actualmente ignorado en las decisiones judiciales.¹⁰

Esta definición evidencia que la muerte de la mujer por razones de género es consecuencia de un suceso que no fue atendido oportunamente por los organismos llamados a su protección, mediando la complicidad de la sociedad patriarcal, debiéndose tener en cuenta que todo feminicidio es evitable.

La Organización de las Naciones Unidas define al feminicidio como:

El asesinato de mujeres como resultado extremo de violencia de género que ocurre tanto en el ámbito privado como en el público. Comprende muertes de mujeres a manos de sus parejas, ex parejas o familiares, mujeres asesinadas por acosadores, agresores sexuales y/o [sic] violadores, así como aquellas que trataron de evitar la muerte de otra mujer.¹¹

La ONU agrega una característica que vale la pena destacar, me refiero al hecho de que el sujeto pasivo del femicidio puede ser también aquella que trató de evitar que se concrete el femicidio sobre otra persona.

El femicidio está íntimamente vinculado con el tema de la violencia de género, razón por la cual se considera importante determinar lo que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida también como la Convención de Belem do Pará entiende por violencia de género. Esta convención en su artículo 1 establece:

Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte,

¹⁰ Isabel Agatón Santander, *Justicia de género: un asunto necesario* (Bogotá: Ed. Temis, 2013).

¹¹ PNUD, "El femicidio en Chile", Boletín Informativo del Sistema de Naciones Unidas para el Desarrollo, sede Chile, núm 5 septiembre-octubre de 2004, en www.pnud.cl (consultada el 20 de febrero de 2012), citado por Isabel Agatón, "Justicia de Género un asunto necesario", (Bogotá: Ed. Temis, 2013), 120



daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.¹²

Por su parte Jacquelyn Campbell y Carol Runyan definen al feminicidio como “todos los asesinatos de mujeres, sin importar el motivo o la situación del perpetrador”,¹³ noción que considero no responde a la naturaleza del femicidio, puesto que en éste tipo penal el asesinato se suscita por razones de género, pues de lo contrario debería entenderse como el asesinato.

En México, la ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de Violencia define a la violencia feminicida como:

ARTÍCULO 21.- Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.¹⁴

México es uno de los países pioneros frente a la lucha contra los asesinatos de las mujeres por cuestiones de género, en la ley antes descrita podemos advertir la relación que establece entre la violencia feminicida y los derechos humanos; pues tal como lo establece María Zambrano, la violencia de género es percibida como un atentado a los derechos humanos de las mujeres, así también considera este tipo de violencia como uno de los más graves problemas sociales y que requieren de urgente atención.¹⁵

¹² CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER “CONVENCION DE BELEM DO PARA”. «<http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html>». Consulta: 28 de octubre de 2015.

¹³ Jacquelyn Campbell y Carol W. Runyan, (1998, noviembre). “Femicide: Guest editor’s introduction”, *Homicide Studies*, 2(4), 347-352, citado por Diana E. H Russell et al., *Feminicidio: una perspectiva global* (México: UNAM, Centro de Investigaciones Interdisciplinaria en Ciencias y Humanidades, 2006).

¹⁴ México, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, art 21, en Diario Oficial de la Federación (México, 15 de Enero de 2013)

¹⁵ María Zambrano, “Por la vida y la libertad de las mujeres. Fin al feminicidio”, en Russell et al., *Feminicidio*, 2006.



Por su parte la Declaración sobre el Femicidio del Comité de Expertas en Violencia del Mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención de Belém do Pará (CEVI), define al feminicidio como:

La muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal; en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión.¹⁶

La normativa de nuestro país a su vez define al femicidio como aquella en la que “[...] como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género [...]”.¹⁷

Para nosotros el feminicidio es aquel acto violatorio de derechos humanos, a través del cual se da muerte a una persona por razones de género, suscitadas tanto en el ámbito privado como en el público, con la aquiescencia tácita o expresa del Estado.

Como se puede evidenciar los diferentes autores, así como las normativas nacionales e internacionales, para referirse a éste fenómeno social utilizan el término femicidio y otros feminicidio; en virtud de ello es preciso analizar cuál su diferencia.

1.3. Femicidio y feminicidio: Diferencia conceptual

El punto anterior evidencia las diferentes definiciones que existen en torno al asesinato de las mujeres por razones de género, en la que unos autores identifican como femicidio, mientras otros lo hacen como feminicidio, circunstancia que ha generado divergencias entre los movimientos feministas. En razón de ello,

¹⁶ Comité De Expertas Del Mecanismo De Seguimiento De La Implementación De La Convención De Belém Do Pará (Cevi) (2008).

¹⁷ Código Orgánico Integral Penal, art. 141



considero menester analizar cada una de las nociones a fin de poder asumir una posición frente al mismo.

Conforme ya se mencionó, Diana E. Russell afirma que el término feminicidio ha estado en uso desde hace casi dos siglos, pues fue utilizado por primera vez en el año de 1801, y era entendido como el “asesinato de una mujer”.¹⁸ Se debe tener en cuenta que el término original utilizado por Russell era *femicide*, el cual ha sido traducido al español pero de distintas maneras, provocando que dicho término sea utilizado de una u otra manera según el interés, sentido o interpretación que el autor quiera darle.

Autoras como Julia Monárrez considera que la traducción directa de *femicide* es *femicidio*, puesto como cualquier palabra formada a partir de una raíz latina, debe tomar de forma completa la raíz, en este caso *fémina* o *femine*, circunstancia que no sucede con el término *feminicidio*; menciona además que al utilizar el término *homicidio* se refiere a dar muerte a un hombre dentro de lo que no encasilla la muerte de una mujer, además de ser etimológicamente *androcéntrica*.¹⁹

Por su parte la autora Marcela Lagarde considera que la correcta interpretación es *feminicidio*, puesto que para ella *femicidio* es tan sólo una voz homóloga al término *homicidio*, por lo que indica sólo el *homicidio* de una mujer. Al respecto manifiesta:

Transité de *femicidio* a *feminicidio* porque en castellano *femicidio* es una voz homóloga a *homicidio* y solo significa asesinato de mujeres. Nuestras autoras definen al *femicidio* como crimen de odio contra las mujeres, como el conjunto de formas de violencia que, en ocasiones concluyen en asesinatos en incluso en suicidios de las mujeres

Identifico algo más para que crímenes de este tipo se extiendan en el tiempo: Es la inexistencia del Estado de derecho, bajo la cual se reproducen la

¹⁸ Russell et al., *Feminicidio*, 2006, 75.

¹⁹ Julia Estela Monárrez Fragoso, *Trama de una injusticia: feminicidio sexual sistémico en Ciudad Juárez*, 1. ed, Estudios de género serie (México, D.F: Colegio de la Frontera Norte : M.A. Porrúa, 2009).



violencia sin límites y los asesinatos sin castigo, la impunidad. Por eso para diferenciar los términos preferí la voz feminicidio para denominar así el conjunto de delitos de lesa humanidad que contienen los crímenes, los secuestros y las desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de colapso institucional.²⁰

Un aspecto importante que agrega la autora Lagarde es la responsabilidad estatal que existe dentro de estos delitos, pues considera que la falta de intervención y prevención institucional, favorece la impunidad y por lo tanto el femicidio debe ser considerado como un crimen de Estado.²¹

El papel que ejerce el Estado dentro de estos delitos resulta fundamental, como instrumento de prevención, pues hay que partir de que todo feminicidio es prevenible, circunstancia que será posteriormente analizada como una de las medidas que se debe trabajar en aras de combatir este problema social que cada día cobra la vida de muchas mujeres.

Frente a estas discusiones doctrinarias, Russell en el año 2005 autoriza la traducción de femicide con el término feminicidio, empero en el año 2011 reconsidera dicha posición toda vez que a criterio de dicha autora con la nueva definición del feminicidio se estaba agregando el término impunidad (ver definición de Marcela Lagarde), frente a lo que está en desacuerdo, pues de aceptar dicha noción se estaría excluyendo aquellos casos de femicidio en los que si se logra sancionar al culpable del delito.²²

Esta clasificación ha causado variados problemas a la hora de adoptar una posición para diseñar un plan de lucha en contra de este tipo de violencia. En el caso de nuestro país, teniendo en cuenta que el más alto deber del Estado es respetar y hacer respetar los derechos, principios y garantías que rezan en

²⁰ Marcela Lagarde, "El feminicidio, delito contra la humanidad", en H. Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, LIX Legislatura, *Feminicidio, justicia y derecho*, (Mexico: editorlas, 2005)

²¹ Ibid., 155

²² Diana Russell, "Femicide: Power of a Name". http://www.dianarussell.com/femicide_the_power_of_a_name.html. Consulta 5 de noviembre de 2015



nuestra Constitución,²³ siendo entre otros los principios de tutela judicial efectiva, debido proceso, libertad, integridad física entre; en virtud de ello consideramos que el término de feminicidio representa de mejor manera este problema social. Así también opinamos que si se suscita una muerte violenta por cuestiones de género es porque entre otras razones el Estado no actuó diligentemente para prevenirlo, por lo tanto, sería inapropiado liberarlo de dicha responsabilidad.

Por lo antes mencionado, pese a que nuestra legislación se refiere a femicidio, en el presente trabajo nos referiremos a feminicidio por las implicaciones y aportes que se da a través de este término.

1.4) Tipificación del Femicidio como delito autónomo en el Código Orgánico Integral Penal

El tema de la violencia de género ha venido siendo protegida mediante normativa nacional e internacional sobre todo en países de Latinoamérica. Los tratados y convenios internacionales imponen a los diferentes países legislar en aras de alcanzar una realización efectiva de los derechos fundamentales de las personas, el art 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece:

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.²⁴

Pese a estas regulaciones, la última reforma de la norma penal se lo hizo en el año de 1971, por lo que obviamente no respondía al contexto actual y era imperativo su revisión. En aras de garantizar aquel derecho consagrado en

²³ Constitución de la República del Ecuador de 2008, art 10.9, en adelante se cita como CRE

²⁴ Convención Americana sobre Derechos Humanos-Pacto San José de Costa Rica, 1969



instrumentos internacionales y que por el principio de bloque de constitucionalidad nuestro Estado está llamado a observar; como respuesta a aquello el 10 de febrero de 2014 se publicó en el Suplemento del Registro Oficial el Código Orgánico Integral Penal (en adelante COIP), con un total de 730 artículos.

Esta nueva normativa penal trajo consigo variados cambios en comparación con el anterior Código Penal, a manera de ejemplo: Unificó el código sustantivo, el adjetivo, de ejecución, y en general agrupó las diferentes normas penales que se encontraban hasta entonces reguladas en diferentes códigos; así también diseñó una nueva política criminal (punto que será desarrollado más adelante), derogó tipos penales como por ejemplo el parricidio y creó otros, siendo uno de estos el femicidio. En efecto, el artículo 141 del COIP establece:

Art. 141.- Femicidio.- La persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.²⁵

Así también el art 142 del mismo cuerpo legal establece circunstancias que permiten agravar la pena:

Art. 142.- Circunstancias agravantes del femicidio.- Cuando concurren una o más de las siguientes circunstancias se impondrá el máximo de la pena prevista en el artículo anterior:

1. Haber pretendido establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima.
2. Exista o haya existido entre el sujeto activo y la víctima relaciones familiares, conyugales, convivencia, intimidad, noviazgo, amistad, compañerismo, laborales, escolares o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad.

²⁵ Código Orgánico Integral Penal, art 141



3. Si el delito se comete en presencia de hijas, hijos o cualquier otro familiar de la víctima.
4. El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público.²⁶

Es importante destacar que, si bien en el anterior Código Penal no se encontraba regulado el femicidio, empero, de alguna manera existía un tipo penal que regulaba el asesinato por cuestiones de género, aunque casi nunca era aplicado. En efecto, el art 450 en su numeral 10 establecía que el asesinato cometido con odio o desprecio en razón de su orientación sexual o identidad sexual entre otras, y que era sancionado con una pena de privación de la libertad de 16 a 25 años.

Un principio fundamental del sistema procesal es la seguridad jurídica, característica que se vulnera cuando se regula tipos penales en blanco, abiertos o paratipos. Lamentablemente el COIP regula variados tipos penales que gozan de estas características, provocando con ello un “efecto represivo y por lo mismo difuso en el control social formal, terminando por abrir una grave tentación de corrupción judicial.”²⁷ Característica que para ciertos autores rodea al femicidio.

Según Arturo Donoso el art 141 regula un tipo en blanco puesto que no existe clarificación respecto de ¿Quién y cómo determina el que el acto de matar a una mujer sea inequívocamente por su condición de mujer o de género para efectuar tal homicidio? El art 142 – continúa el autor- en la misma línea establece como agravante el compañerismo o cualquier otra condición de confianza, pero el problema es ¿Quién determina tal condición?²⁸

Respecto de las agravantes del tipo penal femicidio consideramos que, de la forma como están regulados, hacen imposible que se suscite un femicidio simple; pues prácticamente todos serán femicidio agravados y por lo tanto todos serán sancionados con el máximo de la pena. Esto en virtud de la multiplicidad de

²⁶ Ibíd., art 142

²⁷ Arturo J. Donoso, “Los tipos en blanco y abiertos en el Código Orgánico Integral Penal”, en Ramiro Ávila Santamaría, comp., Código Orgánico Integral penal: Hacia su mejor aplicación y comprensión, (Quito: Corporación Editora Nacional, 2015), 65.

²⁸ Ibíd., 67.



relaciones y situaciones que configuran los agravantes, muy difícilmente se dará un femicidio que no se encasille en una de las agravantes; por lo que a mi criterio existe una equivocación por parte del legislador, más aún si el COIP ya regula circunstancias agravantes de toda infracción penal.²⁹

1.5) Sujeto Activo y Sujeto Pasivo en el tipo penal Femicidio. Críticas

Para poder adecuar una conducta a un determinado tipo penal, es menester identificar los elementos objetivos esenciales del tipo, dentro de los cuales están el sujeto activo y el pasivo. Entendiéndose por sujeto activo aquel que comete el acto sujeto a sanción penal, en este caso la persona femicida; mientras que el sujeto pasivo es el que sufre las consecuencias de esa violación de la norma, en el caso del femicidio será la mujer víctima.

El tratadista Ernesto Albán Gómez a su vez realiza una clasificación a estos sujetos encasillándoles en calificados y no calificados, los primeros son aquellos que para ser sujetos pasivos o activos necesitan una calidad especial, mientras los segundos pueden ser cualquier persona.³⁰ A continuación analizaremos estos elementos de la tipicidad dentro del tipo penal Femicidio en la legislación ecuatoriana:

- **Sujeto Activo:** La norma es clara al establecer que quien puede cometer femicidio es cualquier persona sin que importe su sexo, por lo tanto, podríamos decir que es un sujeto activo no calificado.
- **Sujeto Pasivo:** En cuanto al sujeto que sufre el menoscabo al bien jurídico tutelado, el art 141 del COIP establece que será la mujer, siendo por lo tanto un sujeto pasivo calificado, toda vez que para ser víctima de femicidio requiere una calidad especial, esto es el ser mujer.

Referente al sujeto activo la norma es clara y no puede prestarse para malas o abusivas interpretaciones; pues al referir “la persona que” elimina

²⁹ Ver COIP, art 47.

³⁰ Ernesto Albán Gómez, *Régimen penal ecuatoriano* (Quito, Ecuador: Ediciones Legales, 1989), 103.



cualquier limitación que se pudiere hacer respecto del sujeto que puede cometer el ilícito penal.

Si bien es cierto, históricamente por la construcción patriarcal y androcéntrica, las mujeres son las que han sufrido mayores violaciones a sus derechos, empero, no por ello debemos prescindir la idea de que ellas puedan también cometer ilícitos cuya conducta puede adecuarse al tipo penal femicidio, he ahí la importancia de regular estos tipos penales cuyo sujeto activo pueda ser hombre o mujer. Siendo por lo tanto acertado la forma en la que se encuentra regulado el sujeto activo en el COIP.

Pese a lo antes mencionado, existen legislaciones que consideran a los hombres como los únicos sujetos activos dentro del femicidio y que respondería más a aspectos políticos, inobservando aspectos culturales, sociales, y jurídicos que podrían rayar en la inconstitucionalidad e ineficacia de los mismos. A manera de ejemplo podemos mencionar la Ley integral contra la violencia hacia las mujeres de Nicaragua que establece:

Art. 9 Femicidio

Comete el delito de femicidio el hombre que, en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, diere muerte a una ya sea en el ámbito público o privado, en cualquiera de las siguientes circunstancias: [...] ³¹

La limitación al hombre como único sujeto activo del delito de femicidio podría desencadenar problemas como los antes referidos, pero nuestra legislación lo regula correctamente, circunstancia que no sucede con el sujeto pasivo, esto en virtud de que el COIP establece como único sujeto pasivo a la mujer, lo cual ha generado varias críticas las mismas que desarrollaremos a continuación.

En primer lugar se cuestiona que la consideración de la mujer como único sujeto pasivo del femicidio las convierte en víctimas por definición, lo cual implica reforzar su condición de víctimas y que terminaría limitando en el imaginario social

³¹ Guatemala, *Ley N° 779*, en Diario Oficial La Gaceta, (Guatemala: 26 de Enero de 2012), art 7



el empoderamiento de las mujeres.³² Otra crítica que se realiza es que los tipos penales así configurados podrían desencadenar riesgos de exclusión y discriminación respecto de otras formas de violencia en donde las víctimas no necesariamente son mujeres,³³ por ejemplo las agresiones por cuestiones de género ejercidas en contra de personas transgénero, quienes a consecuencia de la actual configuración normativa deberán ser juzgados por el delito común de asesinato y no por femicidio.

Se considera también que al limitar el sujeto pasivo podría menoscabar el principio constitucional de igualdad,³⁴ sin embargo, se considera que es una discriminación justificada y por ende no constitutiva de discriminación. Se deber tener en cuenta que el Estado puede adoptar medidas de acción afirmativa tendientes a alcanzar una igualdad real en favor de aquellos grupos en situación de desigualdad,³⁵ en este caso las mujeres; en virtud de que las víctimas no son neutras en cuanto al género por lo tanto las leyes tampoco deben serlo. Esta crítica merece un análisis más profundo, por lo que será tratada en el Capítulo II.

1.6) Avances alcanzados a través de la tipificación del Femicidio/feminicidio.

Partiremos mencionando que, si bien el objetivo de la presente monografía está enfocado en evidenciar los diferentes cuestionamientos respecto de la tipificación del Femicidio, empero, no por ello se debe dejar de mencionar aquellos aspectos positivos que desde la doctrina consideran respecto de este nuevo tipo penal. Esto es importante porque nos permitirá ampliar nuestra visión sobre un tipo penal recientemente incorporado en nuestra legislación interna y por lo tanto que ha sido discutido de forma limitada.

³² Patsilí Toledo Vásquez, “Leyes sobre femicidio y violencia contra las mujeres. Análisis comparado y problemáticas pendientes”, en Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual, ed., *Tipificación del femicidio en Chile: un debate abierto* (Santiago, Chile: Red, 2009), 47.

³³ *Ibíd.*

³⁴ CRE, 66-4

³⁵ *Ibíd.*, 11-2



El primer aspecto positivo que se da a consecuencia de la tipificación del Femicidio es la visibilización de la problemática social; como lo afirma Patricia Lorenzo, la tipificación del femicidio ha permitido “hacer visible una de las formas más brutales de violencia contra las mujeres”.³⁶ El asesinato de las mujeres por cuestiones de género no es un acontecimiento nuevo, pero ha permanecido invisibilizado, frente a ello, el incorporar en un cuerpo normativo este fenómeno social, permite publicitarlo y de la mano de los medios de comunicación posibilita atacar aquel desconocimiento muchas veces intencionado y que constituye en un obstáculo en la lucha contra este tipo de violencia.

La tipificación a su vez responde a los postulados feministas, quienes consideran que mientras un fenómeno social permanece sin denominación específica, resulta invisibles o más bien invisibilizados para la sociedad.³⁷

Otra de las ventajas a criterio de los que están a favor de la tipificación del femicidio es su carácter político criminal.³⁸ Se considera que la tipificación del femicidio implica un poder simbólico frente a los miembros de la sociedad, que por un lado permitirán concientizar sobre la gravedad de este delito, y por otro se evitará que se cometan bajo la amenaza de la pena.

Consideramos que este punto desencadena fuertes debates, puesto que la política criminal desde la Constitución es de un derecho penal mínimo, subsidiario y de última ratio y además que la pena por mandato constitucional debe propender a la rehabilitación y la reeducación del que cometió el delito,³⁹ mas no la coacción psicológica de la sociedad; así también lo establece el COIP.⁴⁰ Siendo esto así, utilizar un tipo penal de forma simbólica podría desencadenar violaciones de normativa legal, constitucional e inclusive de instrumentos internacionales suscritos por nuestro país. Este punto consideramos de gran trascendencia por las implicaciones jurídico penales, por lo que desarrollaremos con mayor profundidad en el siguiente capítulo.

³⁶ Toledo Vásquez y Lorenzo Copello, *Femicidio*, 21.

³⁷ *Ibid.*, 84.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ CRE, art 201.

⁴⁰ COIP, art 1 y 672 numeral 3.



Otra ventaja de la tipificación del femicidio está vinculada con la posibilidad de poder generar estadísticas respecto de este fenómeno social, y que a su vez permitirá diseñar políticas públicas tendientes a erradicar este fenómeno social.

Desde los comienzos de la lucha feministas por la reivindicación de los derechos de las mujeres y la erradicación de la violencia de género, un factor primordial para alcanzar aquello ha sido la posibilidad de la cuantificación de este fenómeno, lo cual más allá de ser útil para el diseño de políticas públicas es una obligación impuesta a cada Estado.

Al respecto, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer establece como obligación de los Estados:

Promover la investigación, recoger datos y compilar estadísticas, especialmente en lo concerniente a la violencia en el hogar, relacionadas con la frecuencia de las distintas formas de violencia contra la mujer, y fomentar las investigaciones sobre las causas, la naturaleza, la gravedad y las consecuencias de esta violencia, así como sobre la eficacia de las medidas aplicadas para impedirla y reparar sus efectos; se deberán publicar esas estadísticas, así como las conclusiones de las investigaciones.⁴¹

De forma similar establece la Convención de Belém do Pará:

Artículo 8

Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para:

h. garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y

⁴¹ Comisión DHNU, *Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer*, art 4-k. <http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx>. Consulta: 31 de diciembre de 2015.



eliminar la violencia contra la mujer y de formular y aplicar los cambios que sean necesarios.⁴²

Es importante destacar que la generación de estadísticas respecto las muertes provocadas por cuestiones de género influye no solamente en la generación de políticas públicas, sino también cumple una función de visibilización. Esto en virtud de que muchas veces este tipo de muertes violentas pasa inadvertido, confundiéndose con los homicidios comunes; lo cual es una equivocación puesto que este tipo de muertes poseen características propias que merecen ser tenidas en cuenta al momento de combatir su erradicación, pero que a nuestro criterio no necesariamente se alcanza a través de la creación de tipos penales.

La generación de estadísticas está a su vez relacionado con la utilidad criminológica⁴³ que se produce a consecuencia de la tipificación del femicidio, esto en virtud de que permite contar con datos concretos sobre el número y características de los homicidios cometidos en contra de las mujeres por cuestiones de género, lo que permite evidenciar una realidad que hasta la actualidad se venía intuyendo pero sin que se haya podido cuantificarlo de forma técnica y especializada. Estos datos, a criterio de Patricia Laurenzo permitirían “reducir la alarmante impunidad [...], deberían contribuir a organizar de forma más eficaz la prevención y control de estas brutales agresiones”.⁴⁴

Esta obligación estatal respecto de la recopilación estadística, en virtud de los acuerdos y convenios internacionales suscritos por nuestro país, está vinculado con la responsabilidad frente a las violaciones de derechos humanos. Nuestro país ha suscrito variados instrumentos internacionales dentro de los cuales se reconoce que la violencia por razones de género constituye una violación grave de los derechos humanos de las mujeres, en virtud del principio Pacta Sunt

⁴² Convención Belem do Pará (1995), art 8 literal h

⁴³ Toledo Vásquez y Laurenzo Copello, *Femicidio*, 22.

⁴⁴ *Ibíd.*



Servanda⁴⁵ y por la responsabilidad estatal internacional que implicaría, el Estado ecuatoriano está en obligación de actuar para combatir y erradicar este fenómeno social.

Pero es necesario hacernos una pregunta ¿Qué debemos hacer para combatir la violencia de género? Podríamos decir que los propios instrumentos dan una respuesta a dicho interrogante, puesto que regulan diversas obligaciones estatales respecto de este fenómeno social violatorio de derechos fundamentales. Una de las obligaciones que imponen los instrumentos internacionales es crear tipos penales que sancionen el femicidio y que por estar relacionado con el tema del presente trabajo investigativo nos referiremos:

Artículo 7

Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:

c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso.⁴⁶

Frente a esto cabe hacernos dos interrogantes ¿Debería el Estado limitarse a crear tipos penales para combatir este fenómeno social? ¿Podría haber desencadenado responsabilidad internacional del Estado si no se tipificaba el femicidio en el COIP? Respecto a la primera interrogante consideramos que es un hecho que está sucediendo en la actualidad, el Estado frente a las diversas demandas de grupos sociales sobre todo feministas para que adopte medidas en aras de combatir los diversos tipos de violencia de género, se ha limitado a

⁴⁵ Sobre este principio la “Convención de Viena sobre el derecho de los tratados” establece que “Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”.

⁴⁶ Convención Belem do Pará, art 7 literal c



incorporar en el COIP el femicidio, sin que haya diseñado auténticas políticas enfocadas en combatir este fenómeno de orden estructural, frente a lo cual la amenaza de la cárcel no lo solucionará, por las razones que posteriormente trataremos.

En cuanto a la segunda interrogante consideramos que, si el Estado ecuatoriano no hubiese tipificado el femicidio, no existiera responsabilidad internacional por dos razones. La primera porque la obligación del Estado es adoptar medidas efectivas tendientes a erradicar el problema de la violencia de género, que, si bien puede ser la tipificación, pero que también puede asumirse otras medidas que quizá sean más efectivas que la creación de tipos penales, pues lo fundamental es el actuar eficazmente antes que simbólicamente, quizá optando por una Justicia más restaurativa en donde la víctima juegue un papel más participativo. La segunda razón es que nuestra Constitución regula la jerarquía normativa, dentro de la cual si bien los instrumentos internacionales están por sobre la Constitución pero siempre que éstos reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la carta magna,⁴⁷ y que bien puede las acciones internas actuar eficazmente y de forma más favorable a los derechos de las mujeres sin que sea necesario la creación de tipos penales autónomos. Responsabilidad que por el contrario no se evitará por la aquiescencia, beneplácito o mera pasividad del Estado, he ahí la obligación del Estado de actuar pero de forma efectiva.⁴⁸

La posibilidad de crear tipos normativos que no sean neutrales, para ciertos autores constituye otra ventaja de la tipificación del femicidio. Teóricamente se considera que una norma entre otras características debe abstracta y neutral, puesto que si va dirigida contra un sujeto determinado se estaría vulnerando el principio de igualdad y no discriminación, empero que por tratarse de delitos gravemente violatorios de derechos fundamentales debía este tipo penal abandonar aquella neutralidad. Al respecto Patsilí Toledo menciona:

⁴⁷ CRE, art 424

⁴⁸ Al respecto, ver: OEA - Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 68. 20 enero 2007.



La categoría teórica de femicidio ha surgido para evidenciar un *elemento adicional, invisible* hasta entonces, y común a un gran número de crímenes de mujeres: que son cometidos por razones de género, por sexismo, por el hecho de que esas mujeres *son mujeres* en sociedades que las discriminan estructuralmente[...]entonces es dable exigir al sistema penal, y al Derecho penal sustantivo, que reconozca este elemento adicional en la tipificación de estas figuras: más allá de la denominación del delito, se trata de reconocer la *mayor gravedad* dada por la concurrencia de elementos que importan la lesión a bienes o intereses jurídicos adicionales a la sola vida de las mujeres.⁴⁹

Es menester mencionar que la recomendación número 5 del Informe Hemisférico aprobado en la Conferencia de Estados Partes sobre el Seguimiento de la Convención sobre Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, defienden aquel abandono de la neutralidad normativa porque permitiría enfrentar con éxito los hechos violentos que afectan a las mujeres, específicamente recomiendan: Eliminar toda norma sobre el problema de violencia contra las mujeres que sea genéricamente neutra. En este sentido, es necesario que las normas referentes a violencia doméstica sean específicas para prevenir, sancionar y/o erradicar las agresiones infligidas contra las mujeres.⁵⁰ Evidentemente el femicidio así como está regulado en el COIP, procede a abandonar la neutralidad de una norma, lo cual es considerado como una aporte positivo a la lucha feminista frente a la violencia de género, pero que conlleva implicaciones conforme se evidenciará más adelante.

Finalmente otra ventaja de la tipificación del femicidio, a criterio de Sandra Maribel Bringas Flores es que la tipificación del feminicidio ha sido necesaria no como una huida simplista al derecho penal ni como mero simbolismo, sino que se

⁴⁹ Patsilí Toledo Vásquez, "La tipificación del femicidio-feminicidio. Otra vía hacia el abandono de la neutralidad". <<http://www.feminicidio.net/sites/default/files/La%20tipificaci%C3%B3n%20del%20femicidio-feminicidio.%20Otra%20v%C3%ADa%20hacia%20el%20abandono%20de%20la%20neutralidad.pdf>> Consulta: 4 de enero de 2016.

⁵⁰ *Ibíd.*



utiliza por la necesidad de diferenciarle del homicidio simple y agravado, el hecho conlleva el mensaje social de subordinación femenina, donde el agresor mata a una mujer por considerar que su vida no tiene valor, imponiendo un poder factico sobre la mujer y por ende subordinación sobre ella.⁵¹

La Diputada mexicana Victoria Chavira elaboró una propuesta de modificación del Código Penal de ese país, a través del cual se buscaba incorporar el delito de femicidio. Dentro de sus motivos se expone que la violencia ejercida en contra de las mujeres esta institucionalizada y legitimada, y por lo tanto en aras de acabar con aquello era menester tipificar el femicidio, siendo para la Diputada ésta uno de los aspectos positivos. Al respecto menciona:

Partiendo del principio del derecho universal a la justicia y, *eliminar la legitimidad de la injusticia social e institucional hacia las mujeres*. La igualdad y la verdadera procuración de justicia ante cualquier tipo de violencia y discriminación, debe eliminar los mecanismos y los principios de la diferencia sexual convertida en justificación del trato discriminatorio y hostil hacia las mujeres.⁵²

Es evidente que las diferentes formas de violencia se encuentran legitimadas expresa o tácitamente, pero es necesario hacernos una pregunta ¿La tipificación normativa permitirá acabar con la legitimación de violencias? Consideramos que no. Para explicarlo, debemos referirnos a las diferentes formas de legitimación de aquella violencia, aspecto que será desarrollado en el siguiente punto, pero debemos dejar sentando que el derecho penal no puede cumplir con dicho fin toda vez que su esencia es reprimir, y peor aún lo hará si es un instrumento de legitimación de otro tipo de violencias.

⁵¹ Sandra Maribel Bringas Flores, "FEMINICIDIO ¿Necesidad de sexualizar el derecho penal? A propósito de la Ley n o 29819". <<http://www.derechoycambiosocial.com/revista028/Feminicidio.pdf>>. Consulta: 05 de enero de 2015

⁵² Victoria Chavira Rodríguez, "Iniciativa modificación del Código Penal para el delito de feminicidio y desaparición forzada". <http://www.iccnw.org/documents/DiputadaVictoriaChaviraPresentaIniciativa08Mar07_sp.pdf>. Consulta: 05 de Enero de 2015. (El énfasis nos pertenece)



Debemos dejar claro que no estamos en contra de la tipificación del femicidio en el COIP, puesto que, si bien conforme ya lo hemos mencionado, el derecho penal al ser de última ratio debe utilizarse sólo para la protección de derechos fundamentales que obviamente son la vida y la integridad de las mujeres. Pero si somos escépticos respecto de los fines que se pretende alcanzar con este nuevo tipo penal pues, creemos que encarcelar a los y las femicidas no va a solucionar el asesinato de mujeres por razones de género, así como también creemos que existen otras medidas que quizá puedan ser más eficaces que la misma sanción o la amenaza a través del derecho penal.

Es momento de dejar atrás aquella concepción de que todo aquel que esté en contra del aumento de penas y la sanción en general, está en contra de los derechos e intereses de las mujeres.

Pero para ello es importante realizar un análisis crítico de este nuevo tipo penal, lo cual permitirá eliminar aquella creencia en la que una vez creada la norma, el problema se resuelve y no caer la falsa ilusión de que en nuestro país hoy ya no se puede maltratar a las mujeres.⁵³ A continuación intentaremos desarrollar nuestra posición respecto de la tipificación del femicidio, para lo cual partiremos identificando el origen de esta violencia como construcción social, puesto que sólo identificando su génesis podremos diseñar políticas multidisciplinarias que permitan adoptar medidas más eficaces frente a éste fenómeno social.

⁵³ Afirmación que realizó la Presidenta de la Asamblea Nacional Gabriela Rivadeneira en su discurso dentro del marco de la rendición de cuentas del Presidente de la República en fecha 24 de mayo de 2015, aunque posteriormente se ratificó respecto de esta afirmación.



CAPITULO II

VIOLENCIA DE GÉNERO Y FEMICIDIO

2.1 Violencia de género como construcción social

En el primer capítulo se desarrolló los aspectos generales que giran en torno al feminicidio, tipo penal que puede ser asimilado desde varias nociones pero que todas ellas tienen un punto en común, el femicidio es violencia de género. Pero, la violencia de género no es sino uno de los diferentes tipos de violencia que se dan dentro de la sociedad.

El feminicidio “debe ser visto como ‘la punta del iceber’ de un problema oculto de violencia contra las mujeres, mucho más profundo y frecuente de lo que se cree”.⁵⁴ En virtud de ello, si bien nos enfocaremos en este tipo de violencia, empero, para mejor entendimiento consideramos importante partir definiendo lo que debemos entender por violencia, así como su clasificación en sentido general.

2.1.1 Violencia

¿Qué es violencia? Es una interrogante aparentemente fácil de responder, sin embargo, esta afirmación dista mucho de la realidad. No es posible definir de forma única ni consensuada a la violencia, toda vez que aquella definición dependerá de los valores y normas sociales que rigen en determinado lugar. Por lo tanto, no existe una sola forma de entender a la violencia, ya que dependerá de quien, donde y con qué objetivo busca definirlo; circunstancia que a su vez termina complicando su estudio.

Lo antes mencionado, si bien es determinante al momento de adoptar una definición de violencia, no por ello debemos dejar de asumir una posición frente a la misma y en virtud de ello daremos algunas definiciones.

La Organización Mundial de la Salud (en adelante OMS) define a la violencia como:

⁵⁴ Diana E. H Russell et al., *Feminicidio: una perspectiva global* (México: UNAM, Centro de Investigaciones Interdisciplinaria en Ciencias y Humanidades, 2006), 243.



La violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte.⁵⁵

Etimológicamente proviene del latín *violentia*, cualidad de *violentus*. Este término a su vez viene de *vis* que significa fuerza y *lentus* que como sufijo tiene valor continuo. En otras palabras se debe entender como el uso continuo de la fuerza, calidad de violento.⁵⁶

De estos conceptos se puede evidenciar que la violencia es asimilada como la fuerza física ejercida sobre otra persona. Es importante destacar que, si bien la violencia física es la comúnmente denunciada y por lo tanto conocida, empero, no es la única forma de violencia; aspecto que se debe tener en cuenta sobre todo en temas de violencia de género.

Sin ánimos de desviarnos del tema principal, definiremos desde un punto de vista general la clasificación y los factores que influyen en la violencia, esto en virtud de que nos permitirá entender de mejor manera la violencia de género. Para esto tomaremos como guía el Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud de la OMS.⁵⁷

2.1.1.1 Clasificación de la violencia

Para clasificar la violencia, la OMS se basa en la víctima de la violencia, quien cometió el acto y a qué tipo de violencia ha sido sometida la víctima. En

⁵⁵ Etienne G Krug, Pan American Health Organization, y World Health Organization, *Informe mundial sobre la violencia y la salud* (Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud, 2003), <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=113735>. Consulta 12 de Febrero de 2016

⁵⁶ Real Academia Española, *Diccionario de la lengua española* (Madrid: Editorial Espasa Calpe, 2001), 1565.

⁵⁷ Krug, Pan American Health Organization, y World Health Organization, *Informe mundial sobre la violencia y la salud*.



base a estas tres características diseña tres categorías generales respecto de la violencia, esto es la violencia interpersonal, la auto infligida y la colectiva.

La violencia interpersonal se refiere a aquellos actos violentos cometidos por un individuo o un pequeño grupo de individuos, y que puede manifestarse mediante variados comportamientos como la violencia física, sexual y psíquica hasta las privaciones y el abandono. En cuanto a la violencia autoinfligida, como su nombre lo indica es aquella violencia en donde el papel de agresor y de víctima es ejecutada por la misma persona, y que muchas veces es asumida como un tabú por lo tanto sancionado por razones religiosas e inclusive en muchos países constituye un delito castigado por la ley penal. Un ejemplo de aquello es nuestro país, pues el art 147 del COIP sanciona con pena privativa de libertad de siete a diez años a la mujer que consienta el aborto.

Respecto de la violencia colectiva, es aquella utilizada como instrumento que permite alcanzar objetivos políticos, económicos y sociales. Puede manifestarse de múltiples formas como los conflictos armados, genocidio, terrorismo, crimen organizado entre otros. Dentro de este tipo de violencia los grupos más vulnerables son los niños, las personas de la tercera edad y los refugiados.

En base a esta clasificación, cabe preguntarnos ¿Dónde se ubica la violencia de género? Consideramos que la violencia de género se encuentra dentro de las tres clases, por las siguientes razones.

En primer lugar, consideramos que la violencia de género es interpersonal toda vez que en la mayoría de los casos se suscita dentro del núcleo familiar, manifestada mediante agresiones físicas, psicológicas, y en muchos casos sexuales, siendo esta quizá la forma más común de violencia de género.

Así también consideramos que la violencia de género es colectiva, puesto que la violencia está vinculada con el sistema político, económico, cultural de un país. Pues estos sistemas por largo tiempo y de manera generalizada se han caracterizado por ser androcéntricos y patriarcales. Prácticamente ha sido ejecutada por las distintas agencias socializadoras conforme se verá más adelante.



Finalmente consideramos que la violencia de género puede ser auto infligida, aunque de por medio no esté la voluntad de la víctima; pues está relacionado con los roles que debe desempeñar la mujer. Para explicar aquello debemos en primer lugar hacernos una interrogante ¿Qué son los roles?

Son aquel conjunto de pautas de conducta destinadas a ser observadas de forma diferenciada por hombres y mujeres. Simone de Beauvoir en su libro *El Segundo Sexo* afirma “No se nace mujer sino se hace mujer”⁵⁸, con lo que refiere que el papel que asume una mujer no es innato a ella sino es producto de una construcción social, papel que es definido por los roles llamados desempeñar. Estos roles fomentan y son cómplices con la violencia de género ejercida sobre la mujer.

Aquel papel de sumisa y débil que, a consecuencia de los roles debe ser practicada por las mujeres, muchas veces permite la aceptación de la violencia ejercida por su pareja y consecuentemente no ejerce ninguna acción, lo que a la final terminaría constituyéndose en una violencia autoinfligida. En ciertos casos, pese a que se denuncia al agresor, se decide volver con la pareja, es lo que en la doctrina se lo conoce como síndrome de adaptación paradójica, lo cual provoca que se vuelva a vivir un ciclo de violencia.

Otro ejemplo es cuando por los estereotipos sociales o por la presión de la pareja decide provocarse un aborto, que vendría a constituir una violencia provocada por la misma víctima, aunque como dijimos ut supra, no exista la voluntad de la víctima, sino más bien es consecuencia del sistema patriarcal.

Finalmente debemos mencionar que la violencia en sus diversos tipos no es únicamente sufrida por las mujeres, pues los hombres también pueden ser víctimas de este tipo de violencia; la diferencia es que, por el tema de los roles, al ser considerados hombres fuertes, fríos, sin sentimientos; impide que sean visibilizados como víctimas sin que ello signifique que no lo sean, dentro de lo cual las masculinidades juegan un papel fundamental.

⁵⁸ Simone de Beauvoir, Teresa López Pardina, y Alicia Martorell, *El segundo sexo* (Madrid: Cátedra, 2005).



En virtud de ello consideramos importante tener en cuenta que aunque mayoritariamente las mujeres son las que sufren violencia de género, no sólo a estas pueden ser consideradas víctimas, pues esta manera evitaremos caer en un victimismo feminista,⁵⁹ lo cual es perjudicial a la hora de encontrar soluciones frente a este problema social.

Si bien estas tres categorías de violencia son fundamentales para entender el tema de la violencia de género, empero, existe otra clasificación que también resulta fundamental; clasificación defendida sobre todo por los doctrinarios. Estas son: violencia física, sexual, psicológica y económica.

2.1.2 Violencia de Género. - Concepto

La violencia de género es un tipo de violencia que puede ser física, sexual, psicológica o económica; existen diferentes pronunciamientos sobre la violencia de género desde la doctrina, la jurisprudencia, normativa interna e instrumentos internacionales. Pero, previo a realizar un análisis sobre las distintas posiciones, es menester destacar una diferencia que en muchos casos es inobservada sobre todo desde la doctrina. La violencia contra la mujer no debe ser asimilada como sinónimo de la violencia de género, puesto que son conceptualmente diferentes.

Se podría decir que la violencia contra la mujer es la especie dentro del género, y por lo tanto debe ser diferenciada, esto en virtud de que si se lo considera sinónimos podría acarrear ciertos problemas, siendo uno de ellos la distorsión que existe respecto de uno de los grandes aportes del feminismo, el género.⁶⁰ Pues considerada de aquella forma, el género quedaría limitado a la dialéctica hombres versus mujeres.

Además, entender a la violencia de género como violencia contra la mujer, daría lugar a una corporativización de intereses y demandas de las mujeres, dejando a un lado los intereses de otros grupos con identidad de género diferente.

⁵⁹ Jorge Vicente Paladines, "Feminismo Punitivo cuando el género se redujo al castigo", Revista Institucional de la Defensoría Pública del Ecuador, N° 5, (Septiembre de 2013).

⁶⁰ Ibíd.



Decimos que, esta falta de diferenciación ya ha provocado efectos en la práctica, pues basta observar las diferentes normativas que se refieren en unos casos a violencia contra la mujer y en otros a violencia de género, pero con nociones similares, pese a que no lo son.

La IV Conferencia Mundial sobre el avance de las Mujeres, celebrada en Pekín en el año de 1995 definió a la violencia contra la mujer como:

Todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada.

Por su parte la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer, conocida como "Convención De Belém Do Pará" establece:

Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.⁶¹

El derecho comparado desarrolla de mejor manera el concepto de violencia de género, pues evita referirse a un género en específico, así tenemos por ejemplo la Ley 1/2004 de España:

La violencia de género a que se refiere la presente Ley comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluida las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad.⁶²

⁶¹ Convención Belém do Pará, (1994), art 1.

⁶² Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral, España, (28 de Diciembre de 2004), art. 1:3



Dentro de la normativa interna de nuestro país, a nivel constitucional no existe referencia respecto de que debemos entender por violencia de género, dentro del COIP tampoco establece definición alguna; si lo hace la Ley Contra La Violencia a la Mujer y a la Familia, más conocida como ley 103 que en parte continúa vigente, y define a la violencia intrafamiliar como:

Se considera violencia intrafamiliar toda acción u omisión que consista en maltrato físico psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar.⁶³

La ley 103 se refiere a éste fenómeno social de forma más completa puesto que no cae en la relación hombre versus mujer, dando lugar así a que todos puedan ser violentados así como violentadores. Por otro lado, utiliza el término violencia intrafamiliar lo cual es un avance pues al considerar a la violencia como intrafamiliar, va más allá del sexo y se refiere a indistintamente a los miembros de la familia. Empero, un aspecto que se debe tener en cuenta es que la violencia de género no se suscita únicamente en el contexto intrafamiliar.

Para nosotros la violencia de género es toda conducta violatoria de los derechos humanos que puede ser por acción u omisión, consistente en el maltrato físico, psicológico, económico, sexual, laboral; provocado por la desigualdad, jerarquía y relaciones de poder existentes entre los miembros de la sociedad y cuyos efectos son la sumisión, daño, sufrimiento, imposición de la voluntad, dominación y sometimiento y que muchas veces termina con la muerte de la mujer.

Consideramos que la violencia de género puede ser ejercida en contra de las mujeres y de los hombres, que puede darse dentro y fuera del ámbito familiar, que su origen está en la estructura social patriarcal y que debe ser entendida desde un enfoque de género y derechos humanos.

Finalmente decimos que la violencia de género es violatoria de derechos humanos en virtud de que constituye una violación a la vida, la libertad, la

⁶³ Ley Contra La Violencia a la Mujer y a la Familia, art 1



seguridad, integridad, a no ser sometido a torturas ni a tratos crueles o degradantes, a circular libremente; todos estos prescritos en la Declaración Universal de Derechos Humanos.⁶⁴

2.1.1.2 Clases de violencia de género

La mayoría de los doctrinarios, así como en las diferentes normativas internas e instrumentos internacionales se refiere a la violencia de género como física, sexual y psicológica. Siendo esta la primera clasificación a la que nos referiremos.

La ley contra la Violencia a la Mujer y a la Familia define a la violencia física como “Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las personas agredidas cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias, sin considerarse el tiempo que se requiere para su recuperación”.⁶⁵

Margot Pujal por su parte la define como “cualquier acción intencional que provoca daño físico o que coloca a la persona en grave riesgo de sufrirlo; se incluyen todo tipo de agresiones corporales”.⁶⁶

Según nuestra opinión la violencia de género física es todo acto tendiente al detrimento de la otra persona, provocándole daño, dolor o sufrimiento físico, en definitiva, cualquier comportamiento que afecte la integridad física de la otra persona motivadas por razones de género a consecuencia de la relaciones de poder.

En cuanto a la violencia sexual “comprende cualquier aspecto de la actividad sexual no consentido ni compartido, omisión forzada de métodos de prevención de enfermedades de transmisión sexual, etc.”⁶⁷

Nuestra legislación la define como:

⁶⁴ Declaración Universal de Derechos Humanos, (1948), art: 3, 5 y 13

⁶⁵ Ley 103, art 4

⁶⁶ Eva Patricia Gil Rodríguez, Imma Lloret Ayter, y Margot Pujal i Llombart, *La violencia de género* (Barcelona: Editorial UOC, 2007), 50, <http://public.eblib.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=3208783>.

⁶⁷ *Ibíd.*



Todo maltrato que constituya imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona y que la obligue a tener relaciones u otras prácticas sexuales con el agresor o con terceros, mediante el uso de fuerza física, intimidación amenazas o cualquier otro medio coercitivo.⁶⁸

A su vez, la violencia psicológica consiste en una agresión verbal o no verbal reiterada, y que termina perjudicando la estabilidad emocional de la víctima de forma directa o indirecta. Este tipo de violencia se ejecuta comúnmente mediante amenazas, intimidación, desprecio, chistes, comentarios y en definitiva cualquier comportamiento que influya emocionalmente en la víctima y que generalmente su contenido es estereotipado.

La ley 103 la define de la siguiente manera:

Constituye toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o disminución del auto estima de la mujer o el familiar agredido. Es también la intimidación o amenaza mediante la utilización de apremio moral sobre otro miembro de familia infundiendo miedo o temor a sufrir un mal grave e inminente en su persona o en la de sus ascendientes, descendientes o afines hasta el segundo grado.⁶⁹

Es menester destacar que este artículo evita caer en aquel victimismo antes referido, pues considera a la mujer como víctima de la violencia de género, en este caso psicológica, empero, hace extensivo a todo miembro del grupo familiar como posible víctima de este tipo de maltrato.

Por supuesto dentro en este tipo de violencia y de los otros ya mencionados, la mujer es la principal víctima por la misma estructura social androcéntrica, sin embargo, no por ello se debería limitar a aquella como única víctima potencial de la violencia de género.

Además de estos tres tipos de violencia que normativa y doctrinariamente son las comúnmente aceptadas, hay otra que no es siempre referida pero que no

⁶⁸ Ley 103, art 4

⁶⁹ Ley 103, art 4



por ello significa que no exista o que no sea importante. Esta es la violencia patrimonial o económica.

Debemos entender por violencia económica aquella que busca privar de forma intencionada y legalmente no justificada de recursos para la subsistencia de los demás miembros de la familia, caracterizada por controlar la economía familiar. Consideramos que en este tipo de violencia, a diferencia de las antes mencionadas, la víctima en la mayoría de los casos es la mujer.

Esto en virtud de que este tipo de violencia se origina de aquella división público-privado consecuencia de la ideología patriarcal, pues se dice que la mujer debe pertenecer al ámbito privado desempeñando labores domésticas, que no son remuneradas. Por su parte la actividad de los varones radica en el ámbito público, pues según el sistema patriarcal, son estos los que deben trabajar y sostener económicamente a la familia. Por lo tanto, quien tiene ingresos económicos utilizará aquello para violentar a la económicamente subordinada.

Consideramos que en este tipo de violencia el discurso se contradice, pues por un lado se acusa a la pareja de que no colabora con el ingreso familiar y por otro lado se le priva de que ejerza cualquier actividad de índole remuneratorio, por lo tanto si socialmente se designa que es el hombre el que debe proveer, la víctima necesaria e imperiosamente va a ser la mujer, sin que ello signifique que no haya casos en donde los papeles se intercambien e inclusive víctima y victimario pueden ser del mismo sexo.

En relación a estos tipos de violencia de género, cabe hacernos una interrogante ¿Qué relación existe entre estos y el Femicidio? Para responden aquello debemos referirnos a uno de los conceptos de feminicidio mencionados en el capítulo anterior. Se dice que el femicidio es dar muerte a una mujer por razones de género y que es producto de un continuum de violencia, es lo que para Rita Laura Segato y otras feministas, desde la antropología o desde la doctrina en general la denominaron feminicidio en la línea de fuego.

Si esto es así, para llegar a la muerte de la pareja, necesaria y previamente va a tener que suscitarse una serie de acontecimientos o comportamientos



violentos, los cuales se caracterizarán por ser físicos, psicológicos, sexuales y/o patrimoniales. En otras palabras, el feminicidio es un acontecimiento final dentro una serie de comportamientos que reflejaran estos diferentes tipos de violencias. En virtud de ello, es importante identificar los tipos de violencia que se dan dentro de la pareja y adoptar medidas que permitan evitar que se culmine con la muerte a la víctima, pues más importante es prevenir que sancionar cuando ya se cometió el hecho punible.

En base a todo lo antes mencionado, haciendo un análisis inductivo podríamos suponer que quizá haya una forma de evitar el femicidio: Se dice que la estructura que conforma el patriarcado influye directamente en las diferentes clases de violencia, por lo tanto, si identificamos el origen de esta construcción social no igualitaria y la combatimos, podríamos encontrar entonces la forma adecuada para evitar cualquier tipo de violencia de género y por ende si no existe violencia, no puede existir tampoco feminicidios.

Podría ser demasiado prematuro dar esta conclusión, y quizá raye en lo utópico, empero, lo anteriormente mencionado nos permite evidenciar una característica fundamental de la violencia de género y por lo tanto del feminicidio. Si bien la desigualdad de género influye directa y mayoritariamente en la violencia de género, sin embargo, un problema tan complejo como éste, no puede ser explicado tan solo desde esta variable conforme nos referiremos más adelante. Pues, la violencia de género es un problema de orden estructural y que por lo tanto no debe ser analizado desde una sola perspectiva, así como tampoco se debería confiar en la norma penal como solución a este fenómeno.

Si el problema de la violencia de género es estructural, debe ser abordado desde un enfoque multidisciplinario, para lo cual es imperativo identificar el origen de los diferentes tipos de violencia de género y cuáles son las instituciones o agentes socializadores de los diferentes tipos de violencia.



2.1.2.3 Origen de la violencia de género

La violencia de género es un problema ocasionado por la desigualdad de géneros, siendo esto así, cabe entonces preguntarnos ¿cuál es el origen de la desigualdad de géneros? El tema de la desigualdad de género data desde el origen mismo de la humanidad, no así su visibilización y cuestionamiento, por ejemplo en Roma existía diferente trato del el hombre en relación con la mujer, pues dividía a las personas en *alieni juris* y *sui juris*, los primeros eran aquellos que tienen enajenado su derecho y por lo tanto están sometidos a otras personas, en este caso las mujeres, los niños y los esclavos y los segundos eran los que estaban libres de toda autoridad y que dependían de ellos mismo, el hombre. Circunstancia similar sucedía entre la tradición judeo cristiana o en la cultura de los árabes.

Esta desigualdad ha sido mantenida y protegida de forma institucionalizada a través del patriarcado, el que conforme lo define Alda Facio, debe ser entendido como:

La manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y los/las niños/as de la familia, dominio que se extiende a la sociedad en general. Implica que los varones tienen poder en todas las instituciones importantes de la sociedad y que se priva a las mujeres del acceso de las mismas pero no implica que las mujeres no tengan ningún tipo de poder, ni de derechos, influencias o recursos.⁷⁰

El patriarcado es aquel sistema de dominación masculina que ha permitido invisibilizar y legitimar las desigualdades de género, posibilitando de esta manera que muchas de aquellas prácticas subsistan hasta la actualidad y por lo tanto las desigualdades que aquellas provocan. Es un sistema que ha permitido mantener subordinadas y dominadas a las mujeres, atentando contra sus derechos fundamentales. Es por ello que se considera como “la primera estructura de

⁷⁰ Alda Facio, Lorena Fries, y Washington College of Law, eds., *Género y derecho*, 1. ed, Colección Contraseña (Santiago: Lom Ediciones : La Morada, 1999), 45.



dominación y subordinación de la Historia y aún hoy sigue siendo un sistema básico de dominación, el más poderoso y duradero de desigualdad y el que menos se percibe como tal”.⁷¹

La institución en donde originariamente se manifiesta el patriarcado es la familia, la misma que es dirigida y representada por el padre, lo que en Roma se lo conocía como *Pater Familia*; siendo éste quien ejerce el dominio y por lo tanto subordina a todos los demás miembros de la familia. En otras palabras, la familia es la primera institución que fomenta la desigualdad de género, digo primera en virtud de que, no es la única institución patriarcal que interviene en construcción de esta desigualdad.

Si bien existen diferentes instituciones que actúan dentro de este sistema de dominación, hay características que le hacen similares a cada uno de ellos y para explicarlo tomaremos como referencia nuevamente a Alda Facio.⁷²

La primera característica del sistema patriarcal es que éste es histórico y no es natural, lo cual es importante tener en cuenta en relación con el fenómeno de las desigualdades de género y la violencia que estas provocan. Pues si se dice que no es natural, por lo tanto es una construcción social que puede ser modificable, siendo esto fundamental y que deber ser atendido en el momento en el que se diseñan las políticas públicas contra la violencia de género.

La segunda característica es que los sistemas patriarcales se fundamentan en el dominio del hombre ejercido a través de la violencia en sus diversas manifestaciones, siendo la fuerza y el temor el instrumento fundamental de dominación.

Otra característica de estas instituciones patriarcales es que la mujer mantiene una relación de subordinación frente al varón, lo que no necesariamente significa que todos los varones tienen los mismos privilegios. Si bien el sistema permite el dominio de la mujer, este dominio no se ejerce de la misma forma, pues los hombres no gozan de una igual posición jerárquica, pues está supeditado al paradigma de lo humano o modelo ideal de lo que debe ser un hombre. Pero

⁷¹ Ana D. Cagigas, “El patriarcado como origen de la violencia doméstica”, (s.f.), 1,:

⁷² Facio, Fries, y Washington College of Law, *Género y derecho*, 45.



¿Cuál es el paradigma de lo humano? Al respecto la autora antes referida menciona que las características del hombre que podrá gozar de la máxima jerarquía es un varón blanco, rico, en edad productiva, sin discapacidades físicas y heterosexual.

Por último, otra característica del sistema patriarcal es que el dominio del varón sobre la mujer trata de justificarse en las diferencias biológicas, pues se creía que el sexo masculino es superior al femenino, posición que en su inicio era defendido por la religión con apoyo de la medicina. Conforme lo refiere Alda Facio, Darwin Spencer y otros han mantenido esta línea de argumentación al decir que las mujeres son seres incompletos en su evolución lo que se demostraría en la existencia de sus periodos menstruales y en la subsecuente inmadurez intelectual.⁷³

Estas y otras características de este sistema de dominación han permitido y legitimado que a través de la historia se violen derechos fundamentales de las mujeres, prácticas que en cierta medida aún subsisten hasta la actualidad. María Zambrano de forma muy acertada menciona:

La violencia de género ya es percibida como un atentado a los derechos humanos de las mujeres y uno de los más graves problemas sociales y de urgente atención. Sabemos que no es natural: la violencia se incuba en la sociedad y en el Estado debido a la inequidad genérica patriarcal: falta de democracia y desarrollo, instituciones rebasadas por la problemática social, falta de políticas públicas adecuadas.⁷⁴

Evidentemente todas estas posiciones que datan de siglos anteriores no subsisten hasta la actualidad como tales, empero, ello no significa que no existe desigualdad de género, lo que sucedió es que todas estas posiciones existen de forma oculta en ciertas prácticas, creencias; muchas de ellas asumidas como normales o naturales, representados mediante estereotipos.

⁷³ Ibíd., 46.

⁷⁴ Russell et al., *Feminicidio*, 16.



La subsistencia de estos discursos y prácticas se ha dado gracias a la existencia de las instituciones o agencias socializadoras, las cuales permiten transmitir de generación en generación las desigualdades de género y por lo tanto la dominación del hombre y consecuentemente la subordinación de la mujer. Anteriormente se mencionó que la familia no era la única institución a través de la cual se estructuraba el sistema de desigualdad de género, pues existen otras que permiten la reproducción de los mecanismos de dominación masculina que da origen a la violencia de género. Por lo tanto, si se quiere identificar el origen del problema necesariamente debemos recurrir a estas agencias socializadoras.

2.1.1.4 Agentes socializadores de la violencia de género

Tomas Hobbes afirmaba que el hombre es el lobo del hombre, por lo tanto es violento por naturaleza; si esto fuera así, entonces la violencia sería natural en la sociedad. Contrariando aquella posición, consideramos que la violencia es una construcción social por lo tanto no es natural, en otras palabras, no se nace violento sino se hace, siendo esto así cabe hacernos la siguiente interrogante ¿Cuál es la primera manifestación de la violencia en la persona?

El Centro Internacional para el Desarrollo del Niño de UNICEF afirma que las investigaciones realizadas sobre el desarrollo infantil corroboran el hecho de que los niños no nacen violentos, sino más bien la violencia tiene su origen en la familia y otros factores de riesgo que influyen en su desarrollo de la personalidad:

Las raíces de este hecho parecen radicar en cuestiones sociales más que en biológicas, resaltando la inadecuación de la educación actual de los niños y la promoción de modelos y actitudes de comportamiento masculino absolutamente insensibles en muchas sociedades.⁷⁵

Los doctrinarios consideran que existe una socialización primaria y otra secundaria, dentro de las cuales la familia constituye la primera institución o

⁷⁵ Centro Internacional para el Desarrollo del Niño, "Niños y violencia", en Inocent Digest, (Florenia: s.f.): 15.



agencia socializadora, por lo tanto, dentro de ella se da el primer aprendizaje y el contacto con los roles de género y por lo tanto con la violencia. Esta socialización primaria es mucho más fuerte e influyente en la construcción de la personalidad del niño/a, pues se implanta en la conciencia de éste con mucha más firmeza, yendo más allá de un aprendizaje puramente cognoscitivo. Al respecto Ana Petrlik menciona:

La familia es el lugar donde se lleva a cabo la transmisión de los sistemas de normas y valores que rigen a los individuos y a la sociedad como un todo. De esta manera la familia va estimulando el sistema de diferenciación de valores y normas entre ambos sexos, asentando así la identidad como el rol de género.⁷⁶

Es la familia la que trasmite los primeros estereotipos que desembocarán en comportamientos violentos, que no necesariamente se manifiestan en la edad adulta sino en los mismos niños/as. Una vez configurado la personalidad o identidad de género del menor en la familia, inmediatamente intervienen los agentes secundarios de socialización.

No existe una posición unánime respecto de que instituciones intervienen en esta segunda fase y construcción de la identidad de género, en virtud de ello, analizaremos aquellas que a nuestro criterio consideramos que ejercen mayor influencia en la construcción de la identidad y consecuentemente de la desigualdad de género, estos son: Escuela, religión, empresas, lenguaje ginepe y los medios de comunicación.

2.1.1. 4.a. Escuela

Marie Curie acertadamente menciona “No podeis esperar crear un mundo mejor sin mejorar a los individuos”,⁷⁷ pero ¿Cómo mejoramos las relaciones entre

⁷⁶ Ana Dorothy Petrlik, “Masculinidades en la tercera edad”, Tesis de Magister, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Sede Perú, 2008.

⁷⁷ Citada por May Silva Ortega, “El papel de la educación y los medios de comunicación en la erradicación de la violencia contra las mujeres”, en Instituto Andaluz de la Mujer, Fundación Audiovisual de Andalucía, y Seminario Internacional de Medios de Comunicación y Violencia de



los individuos? La sociedad tal y como está conformada en la actualidad es producto de una construcción social, por lo tanto, las desigualdades e injusticias de género son constructos sociales modificables, siempre que se identifique su génesis. Si bien conforme se mencionó anteriormente la socialización primaria ejercida por la familia a través de la cual se da la primera influencia en la identidad de género y por lo tanto la violencia provocada por esta, este proceso es continuado por las instituciones educativas. Es por ello que Petrlik considera:

El contexto escolar constituye uno de los espacios que más poderosamente influye en la construcción de la identidad personal de los hombres y de mujeres, y de su futuro proyecto de vida.⁷⁸

Según la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura la mayoría de la conducta humana se transmite socialmente, de forma deliberada o no a través de los ejemplos que suministran personas influyentes, siendo una de ellas los educadores. Por ello se dice que los docentes además de transmitir conocimientos, transmiten normas, valores y códigos de conducta socialmente aceptadas.

La escuela participa en la construcción de la identidad de género de la persona, y con la consecuente violencia que trae consigo. La desigualdad de género dentro de las instituciones educativas se manifiesta de diferente forma y en diferentes individuos, y que a la postre terminarán influenciando en la violencia de género.

La socialización dada en las unidades educativas es ejercida por dos autores principalmente, los docentes y los grupos de pares. En cuanto a los primeros son asumidos como un ejemplo para la o el menor, en donde claramente se evidencia las relaciones de poder existente entre alumnos y de estos con el docente; así también los estereotipos que poseen los docentes, quienes, al ser el

Género, eds., *Medios de comunicación y violencia contra las mujeres: Sevilla, 2003*. ([Sevilla]: Instituto Andaluz de la Mujer : Fundación Audiovisual de Andalucía, 2003), 23.

⁷⁸Petrlik, "Masculinidades en la tercera edad", 109.



ejemplo del estudiante, voluntaria o involuntariamente terminan transmitiendo al menor aquellas construcciones sociales.

Los compañeros de clase también ejercen influencia en la construcción de la identidad de género. Conocidos también como grupo de pares, son aquel grupo de personas entre las cuales existe afinidad y amistad, y que terminarán influenciando en la formación y comportamiento de las personas.

Se debe también tener en cuenta que otro factor que interviene en la educación y que a su vez influye en la construcción de la identidad de género, es la malla curricular ya que su contenido está diseñado desde un sistema patriarcal, y por lo tanto difícilmente fomentará una verdadera igualdad. Además de la malla curricular, existe un curriculum pocas veces evidenciado que termina influyendo enormemente en las desigualdades de género. Conocido también como curriculum oculto:

Hace referencia a los conocimientos, destrezas, valores, actitudes y normas que se adquieren en los procesos de enseñanza-aprendizaje y, en general, en todas las interacciones que se dan cotidianamente en el aula y la escuela, pero que no llegan a explicitarse como metas educativas a lograr de una manera intencionada.⁷⁹

Teniéndose en cuenta que la base fundamental sobre la cual se construye una cultura y por lo tanto la identidad de género es la educación, cabe preguntarnos ¿Cómo solucionamos esta influencia? Consideramos que el problema no es que ejerza influencia sobre los individuos, porque quizá ese es uno de sus roles fundamentales de las instituciones educativas, el problema es que se continúe ejerciendo como se lo ha venido haciendo. La educación debe ser ejercida desde la igualdad, el enfoque de género y en general desde el respeto a

⁷⁹ Beatriz Carrillo Siles, "Importancia del curriculum oculto en el proceso de enseñanza - aprendizaje". http://www.csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_14/BEATRIZ_CARRILLO_2.pdf. Consulta: 03 de abril de 2016.



los derechos fundamentales, que no permita construir discriminación sino por el contrario, debe constituirse en un instrumento que ayude a erradicarlo.

La educación por esencia no puede asumir un rol neutro, sino más bien estará influenciado por la subjetividad del docente, así como por las políticas de educación que el gobierno pretende alcanzar; he ahí la importancia de la intervención sobre todo en las políticas que el Estado diseña respecto de la educación. Esta intervención en la política estatal educacional no debería ser solo cuestión de voluntad política sino de respeto a la Constitución, la ley y a los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país.

El art 70 de la CRE establece:

El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, a través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el enfoque de género en planes y programas, y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público

Toda política estatal debe incluir el enfoque de género, por lo tanto, la educación debe ser estructurada desde este enfoque. Uno de los principios que deben regir en la actividad educativa es la igualdad de género,⁸⁰ la misma que pretende entre otros fines la igualdad entre hombres y mujeres, el respeto de los derechos humanos, la igualdad y no discriminación. Uno de los fines de la educación relacionado con el tema de género es:

La Promoción de igualdades entre hombres, mujeres y personas diversas para el cambio de concepciones culturales discriminatorias de cualquier orden, sexistas en particular, y para la construcción de relaciones sociales en el marco del respeto a la dignidad de las personas, del reconocimiento y valoración de las diferencias.⁸¹

⁸⁰ Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), art 2-I: Igualdad de género.- La educación debe garantizar la igualdad de condiciones, oportunidades y trato entre hombres y mujeres. Se garantizan medidas de acción afirmativa para efectivizar el ejercicio del derecho a la educación sin discriminación de ningún tipo

⁸¹ LOEI, art 3-i



De forma similar establece la CEDAW en su art 10 respecto de la obligación de adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación.

Una educación ejecutada desde un sistema patriarcal, en donde los estereotipos terminan influenciando en la construcción de la identidad de género de los niños/as, constituyen a estos en las primeras víctimas de la violencia de género. Si el origen del femicidio es la desigualdad de género, la primera intervención que debe realizar el Estado es en la educación, esto en virtud de que la obligación de luchar por una educación libre de prejuicios y por lo tanto de violencia recae sobre los dos actores fundamentales: El estado y los docentes.

2.1.1.4.b. Religión

Constantemente nos hemos venido refiriendo al patriarcado como sistema que fomenta la desigualdad de género; por lo que consideramos importante definirlo sobre todo por la relación que tiene con la religión como agente socializador. Dolores Reguant la define como:

Una forma de organización política y social basada en la idea de autoridad y liderazgo del varón, en la que se da el predominio de los hombres sobre las mujeres [...]. El patriarcado ha surgido de una toma de poder histórico por parte de los hombres quienes se apropiaron de la sexualidad y reproducción de las mujeres y de su producto, los hijos, creando al mismo tiempo un orden simbólico a través de los mitos y la religión que la perpetúan como única estructura posible.⁸²

El sistema patriarcal, de la mano de la religión y de las leyes ha pretendido convencer que la mujer es inferior al hombre. Por lo tanto, podríamos decir que la religión es un instrumento de discriminación, utilizado por el sistema hegemónico.

⁸² Nuria Varela y Espido Freire, *Feminismo para principiantes* (Barcelona: Ediciones B, 2005), 177.



Las desigualdades de género se ven influenciadas por las relaciones de poder existentes entre los hombres y mujeres, las mismas que son influenciadas directamente por la religión. En estas relaciones de poder existe una división entre lo público y lo privado, en el primero se desenvuelven los hombres quienes son los que representan a la familia, los que desarrollan actividades públicas entre ellas las productivas.

En cuanto al ámbito privado, desde la visión de este sistema, le pertenece a la mujer, sobre todo limitado a las actividades de alimentación y cuidado, las mismas que no son compensadas monetariamente sino más bien invisibilizadas y no valoradas. Es únicamente en el ámbito privado en el que supuestamente las mujeres deben participar, y que en la práctica sucede comúnmente, no porque sea natural o porque las mujeres así lo deseen, sino es consecuencia de este sistema de relaciones de poder en donde la religión ejerce un gran papel.

A manera de ejemplo podemos mencionar determinados capítulos de la Biblia que demuestran como la religión ha sido utilizada como como instrumento de dominación y discriminación:

Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia; y él es el que da la salud al cuerpo⁸³

A ser templadas, castas, que tengan cuidado de la casa, buenas, sujetas a sus maridos; porque la palabra de Dios no sea blasfemada.⁸⁴

Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo.⁸⁵

Frases como las antes mencionadas han permitido mantener aquel sistema patriarcal, siendo el género la base la base de las creencias y prácticas religiosas discriminatorias. Por lo tanto, la historia nos demuestra por ejemplo que si la mujer era descubierta en adulterio, debía ser lapidada hasta la muerte, circunstancia que no sucedía con los varones que estaban en las mismas

⁸³ Efesios 5:23 "

⁸⁴ Tito 2:5

⁸⁵ Efesios 5:24



circunstancias. Es por ello que acertadamente Juan Jose Tamayo afirma que “Las religiones son uno de los lugares donde las mujeres sufren una de las más radicales experiencias de silenciamiento, discriminación e invisibilización”⁸⁶

Esto se puede evidenciar en las afirmaciones que sobre las mujeres hacían ciertos teólogos, por ejemplo Agustín de Hipona afirmaba que la inferioridad de la mujer pertenece al orden natural, Santo Tomás de Aquino definía a la mujer como un varón imperfecto y Lutero las consideraba como inferiores de mente y cuerpo.⁸⁷

Por lo antes mencionado podemos decir que la religión se constituye en un agente de socialización secundaria, que históricamente ha venido ejerciendo diferentes tipos de violencia en contra de las mujeres, e inclusive hasta la actualidad se mantienen ciertas prácticas que inciden en las relaciones de género, aunque no en la misma intensidad que lo hacía anteriormente.

Debemos hacernos una pregunta ¿existe alguna relación entre la religión y el feminicidio? Consideramos que evidentemente existe tal relación, pues los primeros femicidios eran cometidos por las religiones; así tenemos la lapidación conforme ya lo mencionamos, se autorizaba la agresión física en público por parte de su esposo cuando ésta “se portaba indecorosa”, e inclusive en la Santa Inquisición las que mayormente eran asesinadas eran mujeres y niños. En otras palabras, las religiones han autorizado y legitimado la muerte de las mujeres cuando éstas han intentado ir en contra de esta organización patriarcal e ideológicamente androcéntrica.

Así también las religiones han permitido sentar una de las bases sobre las cuales se estructura la violencia de género, la misma que a la postre terminará con el asesinato de las mujeres por el solo hecho de serlo. Pero cabe hacernos otra pregunta ¿es posible una religión con enfoque de género? En principio podríamos decir que no, sin embargo, encontrar una respuesta acertada a un problema tal complejo como este, requiere mayor profundización en el tema; y que por no estar relacionado directamente con el tema de la presente monografía no se lo realizará.

⁸⁶ Juan José Tamayo, “Discriminación de las mujeres y violencia de género en las religiones”, (España: s.f.), 1. <http://fhu.unse.edu.ar/boletin52/dmvg.pdf>. Consulta: 05 de abril de 2016

⁸⁷ *Ibíd.*, 4



Sin embargo de aquello, consideramos que si Dios es fuente de Justicia, de bondad y misericordia, entonces mal podría ser utilizada la religión como instrumento de dominación, control y violencia; consideramos así también acertada la posición de Elizabeth Schussler Fiorenza sobre las religiones: “Solo las tradiciones de interpretación bíblica que no sean sexistas ni androcéntricas, ni opresivas poseen autoridad teológica de revelación”.⁸⁸

2.1.1.4.c. Empresas

Más que la empresa como tal, en general son las relaciones laborales las que se constituyen en agentes socializadores de la desigualdad de género. Está relacionado directamente con la división sexual del trabajo, es decir entre el ámbito público y el privado, el productivo y el reproductivo, creyéndose que el lugar naturalmente designado para las mujeres es el privado-reproductivo.

El problema se agrava en el momento en el que la mujer pretende dejar este ámbito privado y participar dentro del público, pues los hombres se sienten amenazados, siendo esta una de las razones por las que surge la violencia en sus diversas manifestaciones.

Pero, ¿Por qué se sienten amenazados los hombres? La división sexual del trabajo ha permitido mantener a las mujeres subordinadas, puesto que en el sistema así construido son los hombres los que participan en el ámbito público-laboral y por lo tanto los que pueden cubrir los gastos, aspecto que no es cuestión de capacidad sino de sometimiento. Evidentemente, la estructura patriarcal diseñada de tal forma, considera a la mujer como amenaza de aquel sistema de privilegios y control, siendo por lo tanto la violencia uno de los mecanismos de defensa de aquel sistema utilizado por los varones.

Cabe hacernos otra interrogante ¿Cómo se manifiesta la violencia en el ámbito laboral? Consideramos que existe diferentes tipos de violencia que se ejerce sobre la mujer en el ámbito laboral, dentro de las cuales están: Ejercicio de un triple rol (la posibilidad de que pueda participar en el ámbito productivo, pero

⁸⁸ Elisabeth Schüssler Fiorenza, *Bread not stone: the challenge of feminist biblical interpretation: with a new afterword*, 10th anniversary ed (Boston: Beacon Press, 1995).



en conjunto con el rol reproductivo y de cuidado), desvalorización del trabajo, remuneración diferente pese a que se realiza la misma actividad, los cargos de gerencia pocas veces son ejercidos por mujeres, maltrato verbal por parte de los compañeros o por sus jefes, intimidación y quizá el más preocupante es el acoso sexual.

Si bien es cierto no existe una normativa específica que permita luchar contra la violencia de género dentro del área laboral, empero, existe un Convenio adoptado en la 42ª reunión en 1958 y que entro en vigencia el 15 de junio de 1960 respecto de la discriminación en el ámbito laboral:

Artículo 1

1. A los efectos de este Convenio, el término discriminación comprende:

(a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación;

(b) cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación que podrá ser especificada por el Miembro interesado previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y con otros organismos apropiados.⁸⁹

Quizá esta sea una de las pocas normativas que han sido reguladas dentro de la OIT que permite luchar contra la violencia de género, esto en virtud de que los Estados que suscriban tienen la obligación de respetar y promover leyes que permitan la efectiva vigencia del mismo.

Es la división sexual del trabajo la que origina diferentes formas de violencia, las mismas que no han sido visibilizadas ni tratadas con la importancia debida, en donde el género constituye en un factor de gran influencia. Muchas de estas prácticas han sido consideradas como naturales y por lo tanto transmitidas como tales.

⁸⁹ Convenio OIT, C111, ratificado por nuestro país el 10 de Julio de 1962



Consideramos que, si bien dentro de la normativa interna de nuestro país existe regulación respecto de las desigualdades en el ámbito laboral, no son suficientes. Nuestra constitución se limita a garantizar al dignidad de la personas una remuneración justa,⁹⁰ estas y otras como la ley de cuotas o la ley de amparo laboral de 1997, han pretendido de alguna manera alcanzar una igualdad al menos formal sin que haya obtenido resultados del todo exitosos, peor aún han posibilitado alcanzar una igualdad material o de facto. En virtud de lo mencionado, la relación laboral sigue siendo un agente socializador de la violencia de género, y que por lo tanto imperiosamente debe ser analizada en la búsqueda de soluciones frente al femicidio.

2.1.1.4.d. Lenguaje Ginope

Heidegger afirma que no hablamos nosotros a través del lenguaje, sino que el lenguaje habla a través nuestro.⁹¹ Es en el lenguaje en donde se refleja el modelo de una sociedad, siendo esto así, si una sociedad es androcéntrica y patriarcal, el lenguaje también reflejará aquello. Partiremos definiendo al lenguaje ginope o sexista como aquel lenguaje androcéntrico que invisibiliza a las mujeres, al no denotar su existencia o sus obras, y que permiten crear y mantener desigualdades de género.

Teniendo en cuenta que el lenguaje crea y habilita una vida social, una comunicación y en general una visibilización de las relaciones personales, y, si decimos que las mujeres han permanecido invisibilizadas, significa entonces que las mujeres no forman parte del lenguaje o al menos no lo hacen en la misma categoría que los varones. Cada lenguaje ejercerá esta discriminación dependiendo el contexto y de la época, siendo menester por obvias razones enfocarnos en el lenguaje español. ¿El lenguaje español es ginope? Consideramos que si por las siguientes razones:

⁹⁰ CRE, art 33

⁹¹ Alvaro García Meseguer, *Es sexista la lengua española?: una investigación sobre el género gramatical*, 1a. ed, Papeles de comunicación 4 (Barcelona: Ediciones Paidós, 1994), 23.



En primer lugar porque lo masculino es considerado como el paradigma de lo humano, lo central, mientras lo femenino como la marginalidad, “lo masculino es la norma o el paradigma y lo femenino es ‘lo otro’ o lo que existe sólo en función de lo masculino o para lo masculino”.⁹² Como evidencia de aquello podemos advertir que todos los adjetivos son estructurados en su forma masculina, y cuando se quieren referir a una mujer le agregan una “a”; por ejemplo: Conciner/ra, lindo/a, trabajador/a, entre otros. Otra manifestación de esta centralidad de lo masculino es cuando se refieren a los animales, por ejemplo al caballo se refiere como animal solípedo doméstico mientras que yegua la define como hembra del caballo.

Otra razón por la que consideramos que el lenguaje es ginope es por su falta de neutralidad y su evidente influencia del sistema patriarcal. Esto se puede evidenciar por ejemplo en la definición de mujer:

La que con diligencia se ocupa de los quehaceres domésticos y cuida de su hacienda y familia[...] La que es valorada exclusivamente por su belleza o atractivo sexual [...] La de cortos talentos e instrucción [...] La de poca habilidad y sin vigor ni resolución.⁹³

Así también la RAE cuando define al sexo, se diferencia entre “débil. m. Conjunto de las mujeres” y “fuerte. m. Conjunto de los hombres”.⁹⁴ Estos y otros aspectos dan muestra que nuestro lenguaje está estructurado en base a estereotipos, en virtud de lo cual necesariamente influirá en la violencia de género, si se tiene en cuenta que el lenguaje es el que influye en una cultura, en lo que es bueno y malo, fuerte y débil, superior e inferior, lo que es natural y lo que no es. Es por ello que Alfa Facio menciona que “el poder de la palabra es el poder de escoger valores que guiarán a una determinada sociedad pero más aún es el poder de crear una determinada sociedad”.⁹⁵

⁹² Facio, Fries, y Washington College of Law, *Género y derecho*, 48.

⁹³ RAE, 1051

⁹⁴ *Ibíd.*, 1398

⁹⁵ Facio, Fries, y Washington College of Law, *Género y derecho*, 47.



Por lo tanto, si los valores que se transmiten están cargados de prejuicios discriminatorios, necesariamente la sociedad será discriminatoria. Si decimos que nuestra cultura es androcéntrica y patriarcal, en donde las mujeres valen menos, ésta visión necesariamente se verá reflejada en el lenguaje. Si esto es así, consideramos que las políticas estatales encaminadas a erradicar la violencia de género, necesariamente deberá intervenir frente a este agente socializador, que ha sido utilizado para invisibilizar, devaluar, descalificar, denigrar y en general para ejercer violencia contra la mujer.

2.1.1.4.e. Medios de comunicación

Los medios de comunicación son agentes socializadores del sistema estructural de violencia, se dice que una de las características fundamentales que deben tener los diferentes medios de comunicación, son la neutralidad y la objetividad; empero esto no es sino solo una utopía. En la práctica no existe tal neutralidad, aspecto que es entendible pero no justificable; esto si se tiene en cuenta que son seres humanos los que intervienen en esta actividad, quienes tienen sus propios prejuicios que a la postre influirán en el contenido de lo que transmiten a través de los medios.

Quizá esta es una de las razones por las cuales no se puede alcanzar tal neutralidad, peor aún en temas vinculados con el género. Pero el problema es más complejo; pues consideramos que los medios de comunicación son influenciados por los intereses económicos y políticos que representa, y que a la postre terminan influenciando en la política criminal de un Estado. Por ser un tema que requiere un análisis más profundo y en aras de guardar concordancia, éste tema será desarrollado en el capítulo siguiente.

En definitiva, podemos advertir que los estereotipos sociales que a su vez terminan ejerciendo influencia en la violencia de género, son construcciones sociales mantenidas en el tiempo, muchas de ellas invisibilizadas y otras naturalizadas; en la que juegan un papel fundamental los diferentes agentes socializadores, y que merecen ser analizados a la hora de diseñar estrategias que



pretendan luchar frente a este tipo de violencia, a fin de procurar una deconstrucción de todo el sistema patriarcal.

2.2 Críticas del movimiento feminista al derecho

El derecho no es y nunca será neutro afirma Ramiro Ávila Santamaría,⁹⁶ pues éste responde a los intereses de quienes lo crean. Desde la teoría general del derecho se afirma que las características fundamentales que toda norma debe tener es su universalidad, racionalidad y objetividad, características que, si efectivamente radican en una norma, se podría considerar a estas como verdaderos instrumentos de lucha en contra de la violencia de género.

Lejos de aquel anhelo, lo cierto es que los derechos no son ni universales, ni se caracterizan por ser racionales u objetivos, siendo ésta la primera crítica que las feministas hacen al derecho. Al respecto Frances Olsen afirma:

El derecho no es racional, objetivo, abstracto y universal. Es tan irracional, subjetivo, concreto y particular [...]

El derecho no es universal, racional y objetivo y, conforme a lo que creemos, jamás podrá serlo.⁹⁷

Esta aseveración que hace el autor resulta entendible si tenemos en cuenta que el derecho es producto de un sistema patriarcal, que obviamente reflejará y protegerá los valores e intereses de este sistema opresor. Pero, ¿porque decimos que el derecho no es universal, racional y objetivo? El derecho se considera universal porque supuestamente está constituido por pocas normas y que proporcionan fundamentos básicos para resolver casos particulares, esto desde la teoría. Empero, en la práctica el derecho sobre todo en los actuales tiempos, se

⁹⁶ Ramiro Ávila Santamaría et al., *El género en el derecho: ensayos críticos* (Quito: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ; Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2009), 250.

⁹⁷ Frances Olsen, "El sexo del derecho", en Ramiro Ávila Santamaría et al., *El género en el derecho: ensayos críticos* (Quito: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ; Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2009), 152



caracteriza por sufrir un fenómeno de inflación normativa destinada para resolver o dar respuesta a casos concretos, por lo tanto no es universal.

Como dice Olsen “las normas son demasiados específicas, precisas y contextuales para considerarlas universales”.⁹⁸ Si una norma es establecida para un caso concreto, difícilmente se le podría otorgar la categoría de universal. Por ejemplo el femicidio regulado en el COIP, se refiere al asesinato de una mujer, a consecuencia de las relaciones de poder; norma que regula un determinado hecho de forma específica, y que por lo tanto no puede utilizarse en el caso del asesinato de un hombre o en el caso de que no sea por razones de género, pues en este caso existe otra norma concreta, esto es el asesinato.

Pese a que dentro del derecho existen también principios, los cuales pueden ser considerados como universales, empero, muchas veces éstos frente a un caso concreto resultan ser vagos e indeterminados. Siendo esto así, cabe hacernos una pregunta ¿La no universalidad del derecho incide en la violencia de género? Consideramos que la respuesta dependerá de la forma en la que se busque contrarrestar dicha violencia, pues si se considera que una norma es la solución a dicha la violencia, quizá la no universalidad sea lo mejor en estos tipos de violencia pues lo que se necesita es una norma específica que sancione cualquier comportamiento violento por razones de género.

Pero si la respuesta que se pretende dar frente a la violencia de género va más allá de la creación de tipos penales, quizá la no universalidad de la norma si termine afectando; esto en virtud de que puede ser utilizado por unos pocos en contra de otros, todos éstos determinados; utilizándolo como instrumento de dominación. Fenómeno que ha existido desde el origen mismo del derecho hasta los actuales tiempos, e inclusive pese a la normativa nacional e internacional de los actuales tiempos en pos de una igualdad entre el hombre y la mujer; existen todavía normas que son claramente discriminatorias conforme lo veremos más adelante. Inclusive, existen normas destinadas a la protección de las mujeres, que terminan desfavoreciéndolas por la estructura patriarcal de donde surgen.

⁹⁸ Ibíd.



Se considera así también que el derecho no es racional así como tampoco objetivo, en cuanto al primero se dice que “una elaboración racional de derechos igualitarios para los seres humanos destinada a lograr derechos para las mujeres no han funcionado y no funcionarán”,⁹⁹ es evidente que en nuestra normativa existen distinciones irracionales entre el hombre y la mujer lo cual favorece a la desigualdad de género.

Respecto a la objetividad del derecho, anteriormente se mencionó que el derecho no es neutral, si esto es así, el derecho tampoco podrá ser objetivo. Circunstancia que es fácilmente demostrable y quizá hasta entendible; esto en virtud de que cada norma que sea aprobada tendrá como trasfondo algún interés sea político, económico o de algún otro tipo. Es por ello que se considera al derecho como “falsamente neutral y [que] en la práctica favorece los intereses y el modo de ser masculino”.¹⁰⁰

Por lo tanto, si no puede existir un derecho neutral, universal o racional, se debería propender a que así los sean. Evidentemente las normas han sido estructuradas desde un modelo patriarcal, por lo tanto es deber de cada persona comprometida con el cambio de buscar medios que permitan deconstruir aquellas normas; quizá ya se ha dado los primeros pasos a través de la incorporación de normas más igualitarias, se ha firmado instrumentos internacionales que pretendan alcanzar una igualdad de género, sin embargo, consideramos que el recorrido recién empieza.

Otra crítica que los movimientos feministas realizan al derecho es respecto de los prejuicios existentes en los operadores de justicia, sean jueces, fiscales, defensores públicos o privados. Por mucho tiempo estos oficios eran ejercidos únicamente por varones, pues recientemente existe mayor participación de las mujeres. Por lo tanto, si la estructura de administración de justicia esta ejercida por varones, difícilmente defenderán los intereses que no sean o que pongan en peligro a los privilegios vinculados con su género. Un ejemplo de aquello es que

⁹⁹ Ibíd., 153

¹⁰⁰ Carol Smart, *Feminism and the power of law*, (Londres: Routledge, 1989), citado por Isabel Agatón Santander, *Justicia de género: un asunto necesario* (Bogotá: Ed. Temis, 2013), 12.



por mucho tiempo la violencia intrafamiliar no estaba regulada en una norma, por lo tanto no intervenía el poder punitivo para regularla, esto en virtud de que se consideraba como un problema interno de pareja en la que el Estado no debía intervenir.

Consideramos que la participación femenina dentro de las instituciones de juzgamiento, investigación o defensa; no garantizan una administración de justicia neutral; esto en virtud de que el problema de administración de justicia es el sistema patriarcal al que responde. Siendo por lo tanto un conocimiento de género un requisito fundamental que debería tener los funcionarios de los diferentes órganos jurisdiccionales.

Fenómeno similar sucede con la representación y participación femenina en la Asamblea Nacional, en entidades que desarrollan políticas públicas o en entidades que administran justicia, toda vez que pese a que exista participación de las mujeres en dichas instituciones, esto no garantiza que efectivamente se creen normas igualitarias, que se diseñen políticas públicas con perspectiva de género o que se administre justicia de forma objetiva.

Al respecto Jorge Eduardo Buompadre considera que por mucho tiempo las normas sobre todo en el derecho penal no han estado vinculadas con la cuestión de género,¹⁰¹ pues el hecho de que el sujeto pasivo de un delito sea una mujer, aquello no era considerado como agravante o como atenuante, circunstancia que es entendible si se tiene en cuenta el sistema patriarcal de aquellos tiempos. Por ejemplo en nuestra normativa cualquier delito que se cometa, su sanción se verá agravada cuando de por medio existan circunstancias de vulnerabilidad, indefensión, relaciones de poder entre el agresor y la víctima.¹⁰²

Quizá el derecho penal ha sido una de las ramas que más fuertemente ha sido criticada por los distintos movimientos feministas, circunstancia que se da por ser una rama de derecho que tradicionalmente ha respondido al sistema patriarcal, colonial y capitalista; y es justamente en esta área en donde se encuentra

¹⁰¹ Jorge Eduardo Buompadre, *Violencia de género, femicidio y derecho penal: los nuevos delitos de género*, 2013, 45, <http://alltitles.ebrary.com/Doc?id=10853580>.

¹⁰² COIP, art 47, 48, 142.



regulado el femicidio. Si es criticado fuertemente ¿Por qué el feminismo utiliza el derecho como un instrumento de lucha antidiscriminatorio? ¿Por qué su lenguaje social de lucha contra la violencia de género se redujo a un lenguaje punitivista? Las respuestas a esta interrogante por ser de gran importancia y por estar vinculado con el tema principal de la presente monografía la desarrollaremos más adelante dentro de las críticas que realizaremos a la tipificación del femicidio.

Otra crítica que se realiza al derecho es que éste ha permanecido ausente de la esfera doméstica, y en general ausente a la cuestión de género; lo cual ha permitido contribuir a la subordinación de las mujeres.¹⁰³ No es sino a partir de la lucha de los años sesenta por parte de los diferentes movimientos feministas que se ha comenzado a regular tipos penales vinculados con el género, por ejemplo, en el ámbito penal el caso de violencia intrafamiliar. En el ámbito laboral, las mujeres no podían ejercer alguna labor remunerada sin que exista de por medio el consentimiento de su cónyuge, y si es que podía participar del ámbito productivo, su trabajo era menos remunerado.

En el ámbito civil las mujeres hasta antes de 1970 eran consideradas relativamente incapaces y por lo tanto en cualquier actuación debía estar representada por su cónyuge o en el caso de la administración de la sociedad conyugal si no había estipulación se entendía que esta debía ser ejercida por el varón; en el derecho de familia, por ejemplo la patria potestad de los hijos menores a doce años a falta de acuerdo es confiada a la madre (norma que todavía se encuentra vigente), lo cual está relacionado con el rol reproductivo asignado a la mujer por el sistema patriarcal.

Estos y otros ejemplos demuestran que el derecho se ha mantenido al margen de la cuestión de género, lo cual ha permitido mantener aquel sistema patriarcal dentro del derecho y por lo tanto si se quiere un derecho que no favorezca la subordinación de la mujer, al momento de crear normas, estas deben ser elaboradas cuidadosa y estratégicamente para rectificar y superar esta injusta desigualdad.

¹⁰³ Ávila Santamaría et al., *El género en el derecho*, 149.



Estas y otras críticas han venido siendo realizadas por los diferentes movimientos feministas que requieren ser superadas, para lo cual consideramos que una de las soluciones es crear una teoría del derecho feminista; circunstancia que es complicada entre otras razones y fundamentalmente debido a que no existe una posición unánime respecto de los postulados feministas, por el contrario existe una multiplicidad de movimientos feministas con contenidos y objetivos de lucha diferentes e inclusive muchos de ellos contrarios por lo que difícilmente se podrá diseñar una teoría del derecho feminista que represente a las diferentes corrientes.

Pues por ejemplo el feminismo liberal clásico pretendía alcanzar una igualdad formal entre hombres y mujeres dentro del derecho, en virtud de ello, estaban en contra de toda norma que provocaba discriminación de las mujeres; el feminismo liberal social por su parte se orienta a criticar sobre todo al derecho social, pues esta corriente feminista considera que las normas jurídicas deben propender a garantizar una mayor autonomía de las mujeres en temas de empleos salarios y distribución de los recursos. El feminismo radical critica a la rama de los derechos sexuales, pues consideran que “las normas jurídicas aseguran a los hombre el acceso a la sexualidad femenina”,¹⁰⁴ siendo sus principales reclamos la penalización de la violación entre cónyuges y el acoso sexual.

De lo mencionado, se puede evidenciar que el derecho ha sido fuertemente criticado, sin embargo, consideramos que toda crítica debe venir acompañada de una propuesta pues de lo contrario no tendría utilidad ni importancia. Las diferentes corrientes feministas han criticado al derecho y han realizados propuestas, empero, el problema es que no existe una posición consensuada sino más bien muchas veces son posiciones contrarias, lo cual constituye una dificultad a la hora de diseñar una teoría del derecho feminista, necesaria para la lucha contra la violencia de género.

Pese a las diferentes a estas críticas, en los actuales tiempos se ha suscitado un fenómeno interesante de relación entre el derecho (sobre todo el

¹⁰⁴ Agatón Santander, *Justicia de género*, 11.



penal) con los movimientos feministas. Frente a ello cabe hacernos algunas interrogantes ¿es posible una amistad entre el derecho penal y los movimientos feministas? ¿Es necesario utilizar al derecho penal como instrumento de lucha contra la violencia de género? ¿Se puede combatir la violencia de género al margen del derecho? Estas y otras interrogantes buscaremos responder a continuación.

2.3 Críticas a la tipificación del femicidio

2.3.1. Fundamentos de la tipificación del femicidio

Los fundamentos más comunes que podríamos encontrar sobre todo desde la doctrina que respalda la tipificación del femicidio se refieren al elevado número de casos que se suscitan, lo que le constituye en un problema grave respecto del cual ha existido limitadas acciones por parte del estado; siendo por lo tanto necesario la tipificación del femicidio a fin de evitar que se continúen las muertes por razones de género.

Es menester tener en cuenta que estos fundamentos varían en cada Estado dependiendo los objetivos que se pretenda alcanzar con la norma. Es por ello que en este punto se analizará cuáles son los fundamentos en los que nuestros legisladores se basaron para la tipificación de este nuevo tipo penal; para ello se solicitó a la Asamblea Nacional las actas de segundo debate del Proyecto de Código Integral Penal realizados por la Asamblea Nacional durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2013 (Ver Anexo N°1).

En fecha 09 de octubre de 2013 se inició el segundo debate del Proyecto de Código Orgánico Integral Penal, en el informe presentado por el Asambleísta Mauro Andino, Presidente de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, respecto del femicidio refiere:

Como un avance, en tanto mecanismo normativo para luchar contra la violencia que sufren las mujeres, para evitar la impunidad y visibilizar un problema



social oculto, desatendido y extremadamente grave cuya dimensión no se logra comprender todavía, se tipifica el femicidio [...] El propósito es extremar los esfuerzos por combatir este grave problema social y elevar su nivel de protección jurídica.¹⁰⁵

[...] Así mismo, tenemos el sicariato y el femicidio, ese delito que atenta en contra del derecho de género por el simple hecho de ser mujer, no es como alguien decía, por tratar de satisfacer a las mujeres, no, es porque hay que precautelar el derecho de las mujeres. [...] ¹⁰⁶

Por su parte el asambleísta Fausto Teran Sarzosa sobre le femicidio refiere:

[...] El femicidio en el Ecuador ha sido el sello más evidente y extremo de la violación contra las mujeres [...] falta de información u otras circunstancias que no han permitido visibilizar el fenómeno. [...] Espero, señores compatriotas, que nunca más de los medios de comunicación, noticieros televisados y de prensa escrita, reporte casos de femicidio y peor aún otorguen categorizaciones sociales inscritas en la justificación de la desigualdad entre hombres y mujeres. [...] ¹⁰⁷

La Asambleísta María Soledad Buendía menciona:

[...] El femicidio, es una herramienta que nos va a permitir visibilizar un hecho que no lo podemos tapar, que no lo podemos negar. Esa espiral de violencia con las mujeres, que inicia con un grito [...] luego avanza con un golpe [...] y termina quizá con el asesinato de las mujeres. Todavía esta sociedad es una sociedad machista, todavía es una sociedad homofóbica, sexista, misógina [...] tenemos aquí la responsabilidad de cambiarlo. [...] ¹⁰⁸

¹⁰⁵ Ecuador, Asamblea Nacional, acta N° 257 del segundo debate del Proyecto de Código Orgánico Integral Penal de fecha 09 de octubre de 2013, 11.

¹⁰⁶ Ecuador, Asamblea Nacional, acta N° 257 – A del segundo debate del Proyecto de Código Orgánico Integral Penal de fecha 10 de octubre de 2013, 6.

¹⁰⁷ *Ibíd.*, 30,31.

¹⁰⁸ *Ibíd.*, 45.



Así también el Asambleísta Byron Pacheco Ordoñez sobre el femicidio menciona:

[...] estoy de acuerdo con el femicidio, que no existan más Karinas del Pozo en el Ecuador, y que, de darse este tipo de delitos que han horrorizado a la sociedad ecuatoriana, exista una sanción drástica, como la que se está planteando con el femicidio. [...] ¹⁰⁹

La Asambleísta Betty Carrillo Gallegos refiere que:

[...] Nuestro objetivo como legisladores en este Código, debe ser tratar de revertir la injusticia de un sistema penal que selecciona los criminales entre los estratos más pobres y desfavorecidos de la sociedad lo cual lamentablemente no es un problema de la justicia ecuatoriana o latinoamericana, sino una característica global del Derecho Penal. [...] Lastimosamente, todavía en la propuesta que existe en este momento vemos que en el delito de femicidio no se han tomado en cuenta las características que determinan este crimen y se lo está asociando a un delito común [...] ¹¹⁰

Finalmente, el Asambleísta Henry Cucalón Camacho menciona:

[...] No comprendo porque tiene la misma pena de los delitos ya sancionados como el caso del asesinato [...] si ya vamos a establecer la figura del femicidio, apoyarla como una política pública reflejada en este Código, debe tener un agravante pues, debe tener una cuestión adicional, no puede ser sancionado por las mismas herramientas jurídicas que ya se tenían, [...] debe ser tratado y sancionado con mayor severidad, [...]. ¹¹¹

Nos hemos referido a las intervenciones de estos asambleístas por cuanto nos otorgan ciertas categorías importantes que nos permiten visibilizar cuales son

¹⁰⁹ Ibid., 66.

¹¹⁰ Ibid., 78.

¹¹¹ Ibid., 145.



los objetivos que desde el legislativo se pretende alcanzar a través del femicidio. La primera observación que podemos advertir es que todos los asambleístas están a favor de esta tipificación, aunque difieren respecto a su utilidad práctica.

El asambleísta Mauro Andino considera al femicidio como un instrumento que permita evitar la impunidad y visibilizar el problema social; en cuanto a la visibilización compartimos aquello por cuanto conforme se refirió anteriormente dentro de las ventajas del femicidio, su tipificación permite visibilizar aquel fenómeno que ha permanecido oculto durante todo este tiempo; posición que es defendida también por la asambleísta Buendía.

Otros asambleístas defienden una visión más punitiva y utilitarista, pues debido a la gravedad de los asesinatos de mujeres por razones de género, consideran que el objetivo de este nuevo tipo penal es la sanción severa para aquellos que han cometido estos delitos.

Consideramos importante rescatar lo mencionado por la asambleísta Betty Carrillo, respecto de las injusticias del sistema penal actual, y la necesidad de revertir aquello; además refiere sobre la necesidad de tener en cuenta las características propias que giran en torno al femicidio, lo cual permitirá mejorar su aplicabilidad.

En definitiva, los fundamentos del femicidio desde la visión de los asambleístas antes referidos, giran en torno a precautelar los derechos de las mujeres, visibilizar el fenómeno, evitar su impunidad y sobre todo está enmarcado en la sanción severa de la persona que vulnere el bien jurídico protegido por este tipo penal. Cabe entonces ahora analizar la posibilidad de alcanzar aquellos objetivos y sobre todo las críticas que pueden existir sobre los mismos.

2.3.2 Derecho penal como solución a un problema social de violencia de género

Partiremos premisa de que el derecho penal no ha podido, no puede, ni podrá solucionar el problema de violencia de género, posición que la defendemos por dos razones: Porque la violencia de género es un fenómeno social de orden



estructural y porque al derecho penal no le importa el problema de la violencia de género, menos aún la víctima, sino le importa defender el poder punitivo que a su vez está íntimamente relacionado con el poder patriarcal.

Respecto a la primera, anteriormente mencionamos que este tipo de violencia tiene su origen en la desigualdad existente entre los géneros, la misma que ha sido mantenida y protegida a través del sistema patriarcal y sus agentes socializadores. Teniendo esto en cuenta podríamos llegar a la primera conclusión, la violencia de género es una construcción social surgida de aquel sistema patriarcal, al que hay que destruirlo o mejor aún deconstruirlo.

El sistema patriarcal requiere ser reasignado, modificado; es necesario crear un nuevo sistema igualitario, no discriminatorio, en donde las personas sin importar su sexo o género tengan iguales oportunidades y derechos. La deconstrucción permite evidenciar o descubrir aquella estructura sobre la cual está asentada el sistema patriarcal, circunstancia que no solo posibilita visibilizar sino también evitar que otros sistemas discriminatorios surjan.

Ahora cabe hacernos una pregunta ¿El derecho penal permite deconstruir el sistema patriarcal? Consideramos que no, porque tanto el poder punitivo, el sistema patriarcal y el conocimiento, son sistemas que están íntimamente vinculados, y conforman las tres vigas sobre las cuales “la sociedad corporativa y verticalizada asienta su poder jerarquizado”.¹¹²

Además de lo mencionado, es menester tener en cuenta que la mayoría de los y las feministas consideran que la desigualdad de géneros es la causa única o la más relevante que da origen a la violencia de género, empero, existen criterios defendidos sobre todo por la criminología crítica que consideran que “el discurso de género ha simplificado excesivamente la explicación de un problema social”.¹¹³ Y que por lo tanto, si bien es necesario tener en cuenta la desigualdad de géneros

¹¹² Eugenio Raúl Zaffaroni, “El discurso feminista y el poder punitivo”, en Ramiro Ávila Santamaría et al., *El género en el derecho: ensayos críticos* (Quito: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2009), 323.

¹¹³ Elena Larrauri, *Criminología crítica y violencia de género*, Colección Estructuras y procesos. Serie Derecho (Madrid: Editorial Trotta, 2007), 23.



para poder explicar la violencia, empero, ésta no debe ser la única categoría, pues se refiere que existen otras como la personalidad del agresor, abuso de alcohol y drogas, pertenencia a minorías étnicas, lugar en donde vive, entre otras, que inciden en la violencia de género.

Elena Larrauri desarrolla tres argumentos a través de los cuales defiende la idea de que la desigualdad no es la única causa de la violencia de género.¹¹⁴ En primer lugar afirma que si la desigualdad de géneros es la única variable relevante, no se puede explicar porque la violencia contra la mujer es un comportamiento realizado por un grupo minoritario de hombres. El segundo argumento es que si la desigualdad es el problema, porque en países en donde existe mayor igualdad los índices de violencia no han disminuido, sino por el contrario han aumentado.¹¹⁵ El tercer argumento que refiere Larrauri es que si el género, la desigualdad y la subordinación de las mujeres es la variable relevante, porque las mujeres son menos víctimas que los hombres.

Independientemente de si se comparte o no el criterio de Larrauri, lo cierto es que para solucionar el problema de violencia de género es menester analizar cada una de las variables que pudieren incidir en este tipo de violencia. Evidentemente la desigualdad de géneros existentes a consecuencia del sistema patriarcal, ejerce una influencia directa y preponderante en la violencia de género, pero no por ello debemos dejar de ampliar nuestro marco de análisis a otras variables.

Por lo tanto, si el problema de la violencia de género es entendido como producto de múltiples variables, el derecho penal evidentemente no podrá intervenir en este proceso de búsqueda de una solución.

La segunda razón por la que consideramos que el derecho penal no es una solución para un problema social, peor aún para la violencia de género, es porque a éste no le interesa resolver el problema, así como tampoco le importa la víctima,

¹¹⁴ Ibid., 24-29.

¹¹⁵ La explicación que encontramos es que en países más democráticos, en donde se busca garantizar igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, los primeros sienten temor de perder sus privilegios, y por lo tanto reaccionan violentamente, buscando que el sistema se mantenga.



sino ejecutar el poder punitivo en su máxima expresión, la cárcel. Para evidenciar aquello, analizarnos el origen del poder punitivo y sus objetivos.

Se dice que el poder punitivo siempre ha existido, circunstancia que según Zaffaroni es falso, toda vez que la humanidad convivió por miles de años sin conocer este poder; afirma que hasta los siglos XII y XIII no había poder punitivo en la forma en la que hoy se la conoce.¹¹⁶

Cuando surgían problemas entre los germanos –continúa el autor- el agresor se recluía en un templo, hasta que el jefe de su clan busque arreglar el problema con el jefe del clan de la víctima, bajo el riesgo de que si no se llega a un acuerdo se declararía la guerra. Evidentemente en este sistema no intervenía el estado, y si lo hacía era como mero “juez deportivo”; lo que interesaba a los clanes en conflicto era solucionar el problema en donde la víctima gozaba de una importancia fundamental. Sin embargo, esto cambió cuando surge la confiscación de la víctima, pues ya no interesaba aquella sino el sistema penal, convirtiéndose el Estado en la nueva víctima.

Con razón Zaffaroni menciona que:

El día cuando el poder punitivo restituya en serio a la víctima, pasará a ser otro modelo de solución de conflictos, dejará de ser poder punitivo porque perderá su carácter estructural, que es la confiscación de la víctima.¹¹⁷

El derecho penal desde sus orígenes no ha sido un instrumento que permita solucionar problemáticas sociales, pero aún de la forma como es entendida y aplicada en los actuales tiempos.

Se dice que al derecho penal no le interesa el problema de violencia, así como tampoco la víctima, sino más bien ejecutar el poder punitivo en su máxima expresión, es decir la cárcel. Cabe entonces hacernos otra interrogante ¿la cárcel debe ser la respuesta frente al cometimiento de un delito? Consideramos que no

¹¹⁶ Ibíd.

¹¹⁷ Ibíd., 324.



porque es ésta la que “reproduce en grado máximo la injusticia social”¹¹⁸, sin embargo es complicado prescindir de aquella sobre todo por la forma en la que se encuentran estructuradas las sociedades actuales. Este punto desarrollarnos con mayor profundidad cuando tratemos el tema del derecho penal como última ratio.

Lo cierto es que la cárcel actúa en contra de las personas más vulnerables de la sociedad, y que terminará afectando no solo al victimario, sino también a la víctima, en el caso del femicidio a las víctimas secundarias o indirectas.

Para demostrar aquello y a manera de ejemplo vamos a referirnos a un caso real acaecido en la ciudad de Loja. En dicha ciudad el señor Segundo Rodolfo Chiriboga fue sentenciado a ocho años, ocho meses y tres días de reclusión por tentativa de femicidio cometido en contra de su pareja; además de aquello, fue condenado al pago de dos mil dólares para la víctima en calidad de reparación integral, y el pago de trescientos treinta y tres remuneraciones básicas unificadas por concepto de multa.¹¹⁹ Cabe hacer dos importantes observaciones.

En primer lugar, independiente del debido proceso que pudo o no darse, la condena pecuniaria y privativa de la libertad terminará afectando no solo al agresor, sino también a la víctima directa y a sus hijos que son las víctimas indirectas. Esto en virtud de que se manda a pagar a la víctima dos mil dólares por reparación integral, asumiendo que de esta forma se está aplicando lo que establece el art 78 de CRE; cuando en realidad lo único que pretende con aquello es una reparación material, sin que observe las demás formas de reparación, como es la restitución, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición, conforme lo establece el artículo antes referido. En otras palabras, la imposición de dos mil dólares en favor de la víctima no implica una reparación integral.

El problema se agrava cuando se dispone el pago de ciento veinte mil dólares aproximadamente, en favor del Estado, pues este es la nueva víctima que

¹¹⁸ Elsie Rosales, “Sistema penal y Estado constitucional en Venezuela”, en Elsie Rosales y Lola Aniyar de Castro, com., *Cuestión Criminal y Derechos Humanos: La perspectiva crítica*, (Caracas: ICP-UCV, 2007), 245

¹¹⁹ Ecuador, Tribunal de Garantías Penales de Loja. [Sentencia condenatoria en contra de Segundo Rodolfo Chiriboga Salinas en juicio penal por tentativa de femicidio N° 11282-2015-00446], 09 de septiembre de 2015.



importa en el derecho penal conforme ya lo mencionamos. El Estado tiene la facultad de cobrar dichos valores vía coactiva, pues por ejemplo si tenía dinero en una cuenta bancaria, este se podría apropiar de dichos valores, y que por la sociedad conyugal terminará vulnerando la estabilidad económica de la víctima, siendo de esta manera revictimizada.

En definitiva, podemos mencionar que al poder punitivo no le interesa la violencia de género, así como tampoco las personas que lo sufren, por lo tanto, si estos no son sus objetivos, mal haríamos en esperar que el derecho penal actúe en favor de las mujeres como víctimas de feminicidio; empero, no por ello podemos prescindir del mismo, sino más bien mejorarlo para que dentro del sistema penal se observe un estricto respeto al debido proceso, y a los intereses de las víctimas ya que actualmente no se les da la importancia debida; así también enfocándose más en la prevención que en la sanción cuando el delito ya se cometió.

2.3.3 Femicidio: ¿Un triunfo de las mujeres violentadas?

Los movimientos feministas defienden la tipificación del femicidio como un triunfo conseguido gracias a la alianza entre el colectivo feminista, la academia y el derecho penal. Frente a ello, consideramos que la forma más adecuada de confirmar este triunfo, es verificando los resultados de dicha alianza.

Quizá sea prematuro pretender analizar los resultados alcanzados a través de la creación de este nuevo tipo penal, por el hecho de que han transcurrido solamente dos años desde la tipificación del mismo y que por lo tanto sus resultados, pese a que puede ser útiles para lo que pretendemos justificar, lo sería aún más con el transcurso del tiempo.

Sin embargo, consideramos oportuno partir el análisis desde el momento en el que se comenzó a luchar contra la violencia de género en nuestro país. No es sino a partir de los años ochenta que diferentes movimientos feministas financiados y apoyados por organismos internacionales e intergubernamentales comenzaron a realizar investigaciones respecto de la violencia de género. En 1986



se creó la Dirección Nacional de la Mujer como primera institución en contra de la violencia de género, en 1994 se crearon las primeras Comisarías de la Mujer y la Familia, en 1995 se expidió la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia y en el 2003 se crearon las primeras Fiscalías de Unidades especializadas en delitos sexuales y violencia intrafamiliar.¹²⁰

En virtud de aquello se puede decir que en nuestro país se ha venido luchando contra la violencia de género por casi treinta años, siendo el derecho el instrumento principalmente utilizado. Si esto así, cabe entonces preguntarnos si con la actuación de todo este aparataje estatal la violencia ha disminuido estadísticamente. Lejos de lo fines esperados, la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las mujeres, realizada por el INEC en el año 2011 presenta los siguientes resultados: 6 de cada 10 mujeres a nivel nacional han sufrido algún tipo de violencia, el 48,7% la violencia fue provocada por la pareja o expareja.¹²¹

En el caso del Azuay las estadísticas son aún más preocupantes: Nuestra provincia es en donde las mujeres registran mayor índice de violencia con el 68.8%, siendo la violencia psicológica la que mayormente se registra con el 60.3%, el 75.9% de las mujeres en el Azuay han sufrido violencia por su pareja o expareja.¹²² Estas estadísticas podrán ser analizadas de mejor manera a futuro, en virtud de que tendrán información base con la cual podrían hacer comparaciones, circunstancias que en la actualidad no es posible puesto que las estadísticas antes referidas son una de las primeras informaciones levantadas en nuestro país respecto de la violencia de género.

Evidentemente las cifras reflejan que la violencia ejercida en contra de las mujeres tiene porcentajes elevados, lo que nos debe llevar a cuestionarnos si las

¹²⁰ Susy Garbay Mancheno, "El femi(ni)cidio como expresión de dominio patriarcal", en Benavides Llerena, Gina Morela, editora y Chávez Núñez, María Gardenia, editora. *Horizonte de los derechos humanos Ecuador 2012*. (Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Programa Andino de Derechos Humanos, PADH, 2013), 245.

¹²¹ Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, "Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres", 2011. <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/violencia-de-genero/>. Consulta en: 10 de Mayo de 2016.

¹²² *Ibíd.*



políticas del estado implantadas en aras de erradicar la violencia de género están funcionando. Al respecto Susy Garbay menciona:

Estos datos ponen en evidencia la persistencia de la violencia contra las mujeres, lo que obliga a reflexionar la pertinencia y eficacia de las estrategias de intervención estatal, que han tenido un énfasis en el ámbito legal, especialmente de carácter punitivo, sin generar cambios significativos en las estructuras del sistema patriarcal.¹²³

Lo estadistas no favorecen, esto refiriéndonos a la violencia de género; ahora cabe preguntarnos ¿qué está sucediendo con el femicidio como máxima expresión de la violencia de género? ¿Qué ha sucedido estadísticamente a partir de la creación de este nuevo tipo penal?

No existe mayor investigación al respecto, la única información que hasta la actualidad se tiene disponible es la entregada por la Fiscalía General del Estado, la misma que recopiló información desde la fecha en que entró en vigencia el COIP hasta agosto del 2015. En este tiempo la fiscalía conoció 58 noticias de delitos de femicidio, 45 investigados como femicidio y los otros 13 como otros delitos contra la vida.¹²⁴ Claro que es necesario tener en cuenta que muchos casos son investigados como delitos comunes, que no hay un registro exacto de cuantas denuncias llegan a sentencia, entre otros aspectos. En virtud de ello el análisis estadístico del tipo penal femicidio resultado limitado, empero, trataremos de analizarlo en el siguiente capítulo con mayor profundidad.

Por lo antes mencionado, consideramos que la utilización de la norma no ha permitido alcanzar un descenso en la violencia de género, por lo que mal podríamos decir que es un triunfo de las mujeres. Así como también cometiéramos un error si únicamente justificáramos nuestra posición en datos estadísticos, siendo esto así, volvemos nuevamente a la pregunta inicial. ¿Es un triunfo de las mujeres la tipificación del femicidio?

¹²³ Garbay, "El femi(ni)cidio como expresión de dominio patriarcal", 246

¹²⁴ Fiscalía General del Estado, *Análisis Penológico 2014-2015*, (Quito: Dirección de Política Criminal, 2016), 41.



Una mujer que es víctima de constantes agresiones tanto físicas como psicológicas, necesita la intervención del Estado para que le brinde protección, y así parar ese continuum de violencia; pues de lo contrario podría terminar en femicidio. Consideramos que cuando la víctima acude a las diferentes instituciones vinculadas con la defensa de las mujeres, sean fundaciones, unidades de violencia intrafamiliar o la fiscalía; lo que busca principalmente es que paren las agresiones de las que está siendo víctima, que se le otorgue medidas de protección y que se le garantice que dicho acto no vuelva a suceder; probablemente la mayoría no piense en encerrarle largos años al agresor en un centro carcelario.

Consideramos que fue este uno de los razonamientos de los legisladores cuando crearon la ley 103, puesto que sus objetivos principales era brindar protección a la mujer agredida, las comisarías de la mujer o de la policía en los lugares en donde no existían las primeras, eran las que conocían este tipo de denuncias, y que pese a los diferentes obstáculos culturales, académicos, geográficos, consideramos que la mujer era mejor protegida sobre todo en el tema de prevención; entre otras razones porque eran inmediatamente concedidas las medidas de protección, que es lo que una víctima necesita en el momento posterior a la violencia, independientemente de las acciones que después deseen tomar.

Este panorama cambia considerablemente con la vigencia del COIP, pues si bien no deroga totalmente al instrumento base que era utilizado en contra de la violencia de la mujer, lo limita sobre todo en el tema de procedimiento, medidas de protección y sanciones. Con este nuevo cuerpo normativo, la violencia intrafamiliar es dividida en contravención cuando las heridas provoquen una incapacidad no superior a tres días, y si lo supera se convierte en delito y deberá ser remitido a la Unidad Especializada de Violencia de Género de la Fiscalía General del Estado.

En uno u otro caso, los temas de violencia intrafamiliar son procesados como un juicio, lo que en lugar de favorecer a la víctima, termina agravando su situación por las siguientes razones: Porque las medidas de protección no son



concedidas con la misma celeridad, porque para que éstas persistan se deberá comparecer y participar dentro de un juicio y que en la mayoría de casos las víctimas se niegan a participar sea por miedo o simplemente porque se encuentran inmersas en un círculo de violencia. Es por ello que consideramos que, en temas de violencia intrafamiliar la tipificación en el COIP conlleva a que el triunfo de las mujeres en este tema sea cuestionable.

Si esto sucede con el tema de violencia intrafamiliar, que generalmente es uno de los principales antecedentes de aquel continuum de violencia y que puede terminar en la muerte de la víctima, cabe hacernos una interrogante ¿Qué sucede con el feminicidio?

Independientemente si se está en favor o en contra de la tipificación del femicidio, hay algo en lo que no cabe discusión alguna. La sanción alcanzada a través de este tipo penal, únicamente permite encerrar al femicida con los efectos que anteriormente nos referimos, empero, no con ello se podrá satisfacer integralmente a los familiares de la víctima y a las víctimas indirectas en general. Muchos asumen a la sanción como una pena ejemplificativa que causará y evitará que otros potenciales femicidas ejecuten hechos similares, cayendo de esta forma en un derecho penal simbólico que no necesariamente influye en la reducción de los índices de criminalidad conforme lo veremos más adelante.

La mexicana Karla Micheel Santos menciona algo fundamental: “todos los feminicidios son prevenibles y son evitables”.¹²⁵ Si esto es así, consideramos que la política estatal debe enfocarse principalmente en la prevención, y después en la sanción del femicida, circunstancia que actualmente no se tiene en cuenta. Pues lo que importa dentro de la política criminal en nuestro país, es demostrar la cantidad de feminicidios que se dan y los sentenciados que existen, haciendo alarde de las penas desproporcionadas impuestas a consecuencia de aquello, creyendo utópicamente que de esta forma se está protegiendo a la mujer frente al potencial femicida. En virtud de ello consideramos que la creación de nuevos tipos penales

¹²⁵Karla Micheel Santos, “La lucha contra el feminicidio en México y los avances en el acceso a la justicia para las mujeres: Caso Campo Algodonero”, dictado en el marco del Seminario Internacional de femicidio/feminicidio dictado



no es un triunfo de las mujeres, por ser una medida no idónea frente a este tipo de violencia basada en patrones socioculturales.

Una de las obligaciones que la CEDAW impone a los diferentes Estados, es la adopción de medidas legislativas que prohíban toda discriminación contra la mujer con la consecuente protección jurídica;¹²⁶ en esta virtud, la creación de tipos penales está conforme a lo estipulado en este instrumento internacional, empero, esa es una de las obligaciones que los Estados deben observar.

En efecto, el preámbulo de esta convención entre otros aspectos establece que “[...] para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia.”,¹²⁷ lo cual evidencia que para erradicar la violencia ejercida contra la mujer es necesario afrentar los estereotipos de género presentes en las prácticas sociales y culturales y no solo limitarse a sancionar penalmente.

En otras palabras, si bien esta Convención obliga a los estados crear tipos penales que permitan erradicar la violencia de género, sin embargo, consideramos el fin último no es ese, sino erradicar aquellos patrones socioculturales que originan esta violencia. Así lo establece la CEDAW:

Artículo 5: Los estados tomarán todas las medidas apropiadas para:

- a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de inferioridad y superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres.

Por su parte el comité de la CEDAW en la investigación de los femicidios en la ciudad Juárez mencionó:

Una situación estructural y de un fenómeno social y cultural profundamente arraigado en la conciencia y las costumbres de la población [...] requiere de una

¹²⁶ CEDAW, art 2.

¹²⁷ Ibíd.



respuesta global e integral [...] dirigida a transformar los patrones socioculturales existentes [...] [y] eliminar la concepción de que la violencia de género es inevitable.¹²⁸

La sola creación de un tipo penal no permitirá erradicar la violencia de género, en virtud de ello, si la mayoría de las estrategias de lucha giran únicamente entorno a la sanción, no podríamos considerar como un auténtico triunfo de las mujeres frente a éste fenómeno social. Solo basta ver los índices preocupantes que existen sobre violencia de género, para darnos cuenta que la estrategia utilizada no está funcionando como se esperaba.

Si el origen de la violencia de género es la estructura social patriarcal, toda medida debe estar enfocada en modificar aquella estructura, frente a ello, el derecho penal únicamente con su función de infundir temor simbólico consideramos que no podrá alcanzar tal cambio a menos que su accionar sea limitado y que vaya en conjunto de otras medidas.

2.3.4 Teorías de la pena y el Femicidio

Doctrinariamente la pena ha sido entendida desde diferentes teorías, dependiendo del contexto en el que se esté aplicando, del sujeto a quien se busca proteger, sobre quien se busca aplicar la pena y finalmente y quizá lo más importante, el fin que pretenda alcanzar y que a su vez permitirá legitimarla.

Partiremos realizando una análisis de las dos teorías fuertemente discutidas desde la doctrina, esto es la teoría retributiva absoluta y la relativa con sus diferentes clases, nos referiremos así también brevemente a las teorías abolicionistas de la pena, para finalmente analizar a que teoría responde la tipificación del femicidio y la política criminal en general vigente en nuestro país.

No podemos iniciar el presente análisis sin antes definir que debemos entender por pena, para lo cual acudimos a Bernardo Feijoo Sanchez quien la define como:

¹²⁸ Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, *Informe de México producido por el bajo el Art. 8 del Protocolo Facultativo de la Convención*, 2005.



Una lesión de intereses o un gravamen que se causa a una persona por una instancia autorizada como consecuencia o reacción ante un comportamiento desaprobado o reprochable de esa misma persona.¹²⁹

En cuanto a sus clases, la teoría retributiva absoluta entiende a la pena como un fin en sí mismo, “como un castigo, compensación, reacción, reparación o retribución del delito, justificada por su valor axiológico intrínseco”.¹³⁰ Si bien estas teorías en algún momento influyeron considerablemente en el diseño de la política criminal de los estados, en los actuales tiempos esta ha sido superada por la teoría retributiva relativa; la misma que a través de sus clases, esto es la teoría de la prevención general o especial han generado fuerte incidencia en el derecho penal de los actuales tiempos, y sobre todo en el momento de establecer las penas frente a los delitos.

La prevención general se caracteriza por pretender que los efectos de la pena influyan en la sociedad en general, independientemente si son los que cometieron el delito. Es decir no importa el delincuente sino la sociedad en general, así como también su legitimación no se radica en la justicia sino en la utilidad que se pueda dar a la pena; ya sea provocando temor o estimulando el respeto a la norma.

Utilizar a la pena como instrumento simbólico que permita evitar que los demás miembros de la sociedad cometan delitos por temor, doctrinariamente se le conoce como prevención general negativa. Conocida también como intimidatoria, cuya finalidad es evitar que en el futuro se vuelvan a cometer hechos delictivos, para lo cual acuden a la intimidación o coaccionamiento psicológico. Esto en aras de proteger el derecho de los demás, y en virtud de que la coacción física es insuficiente para prevenir la comisión de delitos.

¹²⁹ Bernardo Feijóo Sánchez, *Retribución y prevención general: un estudio sobre la teoría de la pena y las funciones del derecho penal* (Montevideo: Editorial B. de F [u.a.], 2007), 49.

¹³⁰ Luigi Ferrajoli, *Derecho y razón: teoría del garantismo penal* (Madrid: Trotta, 2009), 253.



En otras palabras, la finalidad de la pena es la prevención, pero nunca a través de la ejecución sino a través de la amenaza;¹³¹ argumentos que fueron utilizados por algunos de nuestros assembleístas a la hora de tipificar el femicidio, conforme lo analizamos anteriormente.

En cuanto a la prevención general positiva es una teoría que no solo se limita a dirigirse a los eventuales delincuentes, sino está enfocada a la sociedad en general y a la confianza de ésta en la norma. Lo que busca la pena es la prevención mediante la integración psicológica o mediante la pedagogía social.¹³² Al respecto Ramiro Ávila Santamaría afirma que la prevención general positiva busca la fidelidad y conformidad de las personas al Estado, empero critica que se utiliza a las personas como medios para el cumplimiento de fines de otros,¹³³ lo cual va en contra del principio de dignidad defendido por Kant.

Las dos teorías antes referidas, conforme ya se mencionó les importa la sociedad en general más allá de los que violaron la norma, empero, existe otra teoría a la que le interesa los efectos que puedan causar únicamente sobre los delincuentes. Estas son la prevención especial positiva y negativa. La primera se refiere a que la función de la pena es la pretensión de corregir, sanar y educar al delincuente, considera que la pena permite al delincuente la resocialización, reeducación, rehabilitación o reinserción social. Se critica a ésta teoría por presumir que la sociedad es buena y que los encerrados son los malos, y por lo cual hay que convertirlos a imagen y semejanza de los buenos que están afuera.¹³⁴ Al respecto Ferrajoli considera que esta teoría está vinculada con el retribucionismo moral, la misma que concibe el dolor como medicina y factor de redención.¹³⁵

En cuanto a la prevención especial negativa, pretende que la persona que haya cometido un delito no lo vuelva hacer, es decir busca evitar la reincidencia a

¹³¹ Ibid., 136.

¹³² Feijóo Sánchez, *Retribución y prevención general*, 263.

¹³³ Ramiro Ávila Santamaría, *La (in)justicia penal en la democracia constitucional de derechos: una mirada desde el garantismo penal*, 1. ed, Colección profesional Ecuatoriana (Quito: Ediciones Legales EDLE [u.a.], 2013), 69.

¹³⁴ Ávila Santamaría, *La (in)justicia penal en la democracia constitucional de derechos*, 68.

¹³⁵ Ferrajoli, *Derecho y razón*, 266.



través de la eliminación o neutralización. “Estas orientaciones miran no tanto a los delitos como a los reos, no a los hechos sino a sus autores, distinguidos por sus características personales antes que por su actuar delictivo”.¹³⁶

Finalmente haremos referencia al abolicionismo como una teoría fuertemente criticada, pero que consideramos menester analizarlo brevemente por los aportes que puede brindar frente a la tendencia punitivista existente en nuestro país. Es una teoría que deslegitima todo tipo de coerción ejercido sobre el ser humano, esto bajo la premisa de que la libertad es un derecho fundamental y que a su vez es base de la organización social y política.¹³⁷ Es una teoría de larga data, que tiene ciertas limitaciones pero en la actualidad existen muchos defensores de la misma, lo cual es entendible si se le mira desde la perspectiva de que los objetivos propuestos desde la teoría de la pena (dependiendo de la escuela), no han podido ser conseguidos y por otro lado han sido fuertemente cuestionados. La privatización del ius puniendi, el poco interés por la víctima, la expropiación del conflicto, la subordinación del individuo al poder del estado, entre otras; han sido las críticas en base a las cuales se ha buscado la deslegitimación del sistema penal, y que muchas de ellas se evidencia en la política criminal adoptada por nuestro Estado frente a la lucha contra la violencia de género.

Defender una abolición total de la pena resulta desacertado, pues estaríamos transitando de un estado con serios problemas de legitimidad respecto de la pena, a otro en donde no exista regulación alguna y por ende sin pena; y con seguridad violatorio de derechos fundamentales. La pena debe ser necesaria, mínima y cierta y que obviamente el abolicionismo no podrá responder a estos requerimientos, pues como Ferrajoli afirma el abolicionismo es utópico y regresivo.¹³⁸

Sin ánimos de alejarnos del tema inicial y sin que ello le reste su importancia, hasta ahora se ha analizado las diferentes teorías de la pena, y que consideramos importante hacerlo por aquello nos permitirá encontrar una

¹³⁶ Ibid., 265.

¹³⁷ Avila Santamaría, *La (in)justicia penal en la democracia constitucional de derechos*, 66.

¹³⁸ Ferrajoli, *Derecho y razón*, 251.



respuesta a las siguientes interrogantes ¿Cuál es la política criminal referente a la pena vigente en nuestro país? ¿Cuál es el objetivo que se pretende obtener a través de la pena impuesta para el femicidio? ¿Es posible alcanzarlo?

Para responder aquello, en primer lugar nos referiremos a lo que la nuestra constitución establece:

Art. 201.- El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como la protección de las personas privadas de la libertad y la garantía de sus derechos.¹³⁹

Es claro que desde el enfoque constitucional la pena debería buscar la rehabilitación del delincuente, sin que importe los demás miembros de la sociedad; por lo tanto opta por la teoría de la prevención especial positiva. Si por mandato constitucional toda norma jerárquicamente inferior no debe ser contraria a la constitución, debería entenderse que el fin de la pena establecido en el COIP y por ende del femicidio debería ser el mismo, empero, lejos de aquello consideramos que responde a otra teoría totalmente contradictoria.

El art. 52 del COIP establece que el fin de la pena es “la prevención general para la comisión de delitos y el desarrollo progresivo de los derechos y capacidades de la persona con condena así como la reparación de la víctima”. Es decir que el COIP opta por la teoría de la prevención general, sin que se pueda distinguir claramente si es por la confianza en la norma (positiva) o la intimidación (negativa). Nuestra posición es que las penas en el COIP están acorde a la teoría de la prevención general negativa por las siguientes razones.

Con el nuevo COIP se dio un fenómeno de inflación punitivista, pues se aumentó considerablemente las penas. Hasta antes del siglo XX en nuestro país se mantenía como máximo de pena dieciséis años, incluyendo agravantes no sobrepasaba los 22 años; actualmente el límite es de 40 años. Si es que es posible la rehabilitación del delincuente, ésta se elimina con este tipo de penas,

¹³⁹ CRE, art. 201.



más aún si se tiene que en cuenta las recomendaciones que la doctrina basada en estudios criminológicos realiza, quienes consideran que el máximo de encierro debería ser de diez años, ya que con una pena superior no se podrá volver a ser normal y nunca podrá rehabilitarse.¹⁴⁰

Con este tipo de penas, es claro que lo que se quiere provocar es el temor en los demás miembros de la sociedad para que no cometan delitos, basta analizar las actas de debate del Proyecto del COIP para darnos cuenta que este es uno de los objetivos principales de la creación de estos nuevos tipos penales.

La rehabilitación es uno de los objetivos defendidos por el COIP, siendo esto así, cabe preguntarnos ¿la rehabilitación de la persona que cometió un delito puede mejorarse con el aumento de años de privación de la libertad? Nuestra opinión es que no, porque conforme se mencionó doctrinariamente existen dudas si la cárcel puede rehabilitar personas o por el contrario agrava su situación, peor aún en el sistema de rehabilitación social como es llevado en nuestro país; y para muestra de ello basta ver los altos índices de reincidencia que existen. Al respecto Ramiro Ávila Santamaría menciona:

Desde la perspectiva preventiva, la reincidencia demuestra el fracaso del sistema represivo y fortalece el círculo vicioso de la violencia. 'Enfrentar la violencia con más violencia no resuelve el problema, por el contrario, más temprano que tarde la incrementa...'¹⁴¹

Consideramos así también que el temor a través de la amenaza de la sanción ha sido la principal herramienta utilizada en la lucha contra la violencia de género, siendo la tipificación del femicidio un ejemplo de aquello. Se crea un tipo penal diferenciado al asesinato, así también aunque su sanción es la misma se crea un sistema de agravantes que permiten regular todo tipo de relación, en donde difícilmente se podría sancionar un femicidio sin agravantes. Siendo esto

¹⁴⁰ Ferrajoli, *Derecho y razón*, 414.

¹⁴¹ Ávila Santamaría, *La (in)justicia penal en la democracia constitucional de derechos*, 268.



así, posiblemente todo femicidio será sancionado con agravantes y por lo tanto sentenciado a una pena privativa de la libertad de casi treinta y siete años.

La forma como es manejada el sistema de penas en nuestro país difícilmente podrá rehabilitar y/o reeducar al que cometió el delito, peor aún permitir una reparación integral de la víctima. Consideramos que en temas de delitos de género, el objetivo principal que debe propender la pena es a la reparación integral de la víctima, evitar su reincidencia y sobre todo deconstruir los factores socioculturales que influyeron en dicho cometimiento, circunstancia que la prevención a través del temor no podrá alcanzarlo.

Es evidente que al derecho penal y la pena en particular no le interesa la víctima sino sus propios intereses. Por ello proponemos aplicar una justicia restaurativa antes que sancionatoria, garantizar una verdadera reparación integral que incluirá el conocimiento de la verdad de los hechos, la restitución, indemnización, rehabilitación y garantía de no repetición, en observancia a lo establecido en nuestra constitución¹⁴² y en los instrumentos internacionales.¹⁴³

Optar por una teoría abolicionista tampoco parece acertado, pues por un lado nuestra sociedad no está preparada para convivir en un Estado en donde no sea necesario sancionar, pero lo que sí es posible es en dejar de pensar en la cárcel como primera y muchas veces como única opción como respuesta a un delito. Debemos destruir aquel pensamiento de que a través de la cárcel se está dando protección a la víctima, por el contrario, consideramos que re-victimiza, destruye toda posibilidad de rehabilitación del agresor y aquellos factores socioculturales discriminantes en lugar de ser deconstruidos son afirmados. La finalidad de la pena debe ser además de la prevención de los delitos, ser un instrumento de garantía de los no desviados y de la minoría desviada, postulado que es defendido por el garantismo penal.

¹⁴² CRE, art. 78.

¹⁴³ Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales derechos de humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, 16 de Diciembre de 2005, IX.



Finalmente consideramos importante mencionar que frente al femicidio, no se debe dar una respuesta de la misma calidad o valor social (retribución absoluta), o sancionar de manera ejemplificadora para provocar temor en los demás. No estamos en contra de las penas privativas de la libertad, pero sí de la forma como es llevada en los actuales tiempos. El asesinato de una persona por razones de género, debe ser sancionada, pero teniendo en cuenta los múltiples factores antes referidos; y en donde la víctima debe ser la primera beneficiada (aunque no la única), pues si esto no es así, debemos analizar y realizar nuevas propuestas. El derecho penal debe estar limitado tanto como sea posible, siendo el garantismo penal el principal instrumento de control.

2.3.5 La ejecución de la pena desde un enfoque de derecho penal mínimo

Nuestra Constitución pese a las diferentes enmiendas sigue manteniendo un perfil garantista, basta ver los derechos establecidos en favor las personas privadas de la libertad, el derecho de las víctimas, las garantías constitucionales, el debido proceso y el principio de mínima intervención entre otros.

En el presente punto nos referiremos específicamente al principio de mínima intervención, para lo cual trataremos de responder las siguientes interrogantes ¿En qué consiste el derecho penal mínimo? ¿Es posible aplicarlo en nuestro país? ¿Su aplicación afectaría los derechos en favor de las mujeres? ¿Es legítima la intervención del derecho penal en los casos asesinato de las mujeres por razones de género?

Es necesario partir mencionando que Garantismo y derecho penal mínimo son términos sinónimos, puesto que ambos “designan un modelo teórico y normativo de derecho penal capaz de minimizar la violencia de la intervención punitiva [...]”.¹⁴⁴

El máximo exponente del Garantismo, Luigi Ferrajoli lo entiende como:

¹⁴⁴ Juan Oberto Sotomayor Acosta y Luigi Ferrajoli, eds., *Garantismo y derecho penal* (Bogotá, Colombia: Editorial Temis, 2006), 4.



Un modelo de derecho fundado sobre la rígida subordinación a la Constitución y la ley de todos los poderes y sobre los vínculos impuestos a éstos para garantía de los derechos consagrados en las constituciones.¹⁴⁵

El derecho más violento es el penal, y que puede ser el más violatorio de derechos si no se encuentra debidamente limitado, es ahí en donde debe intervenir el derecho penal mínimo. Desde esta perspectiva, dos son las características que deben rodear al sistema penal para legitimarlo: Debe permitir prevenir y minimizar los delitos, así como minimizar la violencia estatal frente a los delitos cometidos. Al respecto Luigi Ferrajoli menciona:

El derecho penal, podríamos decir, se justifica si y solo si, además de prevenir los delitos [...] logra también minimizar la violencia de las reacciones frente a los delitos. Si y solo si, en consecuencia, logra ser instrumento de defensa y garantía de todos: de la mayoría no desviada pero también de la minoría desviada.¹⁴⁶

Desde esta visión, el derecho penal debe tener una aplicación excepcional, solo en determinados casos en donde el problema no pueda ser solucionado desde otras ramas del derecho menos violentas como por ejemplo el derecho civil.

Una vez que hemos definido al derecho penal mínimo, es menester hacernos la siguiente interrogante ¿es posible aplicarlo en nuestro país? Consideramos que no solamente puede, sino que debe ser aplicado, porque nuestra Constitución así lo prescribe:

Art. 195.- La Fiscalía dirigirá de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal [...]

¹⁴⁵ Luigi Ferrajoli, *Derecho penal mínimo y otros ensayos* (México DF: Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes, 2008), 27

¹⁴⁶ Sotomayor Acosta y Ferrajoli, *Garantismo y derecho penal*, 5.



El COIP de forma similar lo establece:

Art 2.- La intervención está legitimada siempre y cuando sea estrictamente necesaria para la protección de las personas. Constituye el último recurso, cuando no son suficientes los mecanismos extrapenales.

En virtud de que se encuentra regulado constitucional y legalmente el principio de mínima intervención penal debería ser aplicado en nuestro país; digo debería porque en la práctica sucede un fenómeno totalmente contrario. Quizá una de las explicaciones es porque según el criterio de Ramiro Ávila Santamaría el COIP es como el dios romano Jano, es decir tiene dos caras,¹⁴⁷ en sus primeros artículos es garantista pero en lo demás es totalmente punitivista. Por lo mencionado con mucha más razón debe ser aplicada este principio.

Defender un derecho penal garantista ha sido motivo para recibir fuertes críticos sobre todo de ciertos movimientos sociales como los feministas, porque a su criterio va en contra de los derechos de las mujeres. Cabe entonces responder la tercera interrogante ¿Su aplicación afectaría los derechos en favor de las mujeres?

Consideramos que la respuesta dependerá de cual sea los fines que pretendan alcanzar los movimientos feministas a través del derecho penal y de la pena es especial; como referimos anteriormente estos pueden ser variados e inclusive contradictorios. Si lo que se busca es combatir la violencia de género a través de la aplicación de fuertes sanciones penales, para que a través del ejemplo y del temor se evite que otra persona cometa un delito similar o si cometió no lo vuelva a hacer, consideramos que el garantismo y el derecho penal mínimo afectarían sus objetivos por defender ideales contradictorios.

Si por el contrario lo que se busca es deconstruir aquellas estructuras socioculturales patriarcales, en donde el derecho penal no sea su única estrategia,

¹⁴⁷ Ramiro Ávila Santamaría, "El código orgánico integral penal y su potencial aplicación garantista", en Ramiro Ávila Santamaría, comp., *Código Orgánico Integral Penal. Hacia su mejor comprensión y aplicación*. (Quito: Corporación Editora Nacional, 2015), 21.



y que permita proteger a la víctima, así como al procesado, es claro que el garantismo no lo afectaría sino que podrían funcionar conjuntamente.

Se dice que el garantismo defiende a delincuentes y que se constituye en un obstáculo para la justicia penal,¹⁴⁸ frente a lo cual se considera que no defiende a delincuentes sino al que se encuentra en la posición más débil en una relación jurídico penal, el cual varía pues, en el momento del cometimiento del delito es la víctima, durante el proceso es el imputado y cuando se da una sentencia es el condenado.

En cuanto a que es un obstáculo para la justicia penal, se dice que más bien es una condición para su validez.¹⁴⁹ Es menester dejar atrás aquella concepción de que toda persona que está en contra del endurecimiento de las penas, lo está también en contra de los intereses de las mujeres; lo cual muchas veces termina enfocándose en la sanción antes que en la protección de la víctima. Elena Llarrauri menciona al respecto:

Las campañas del feminismo oficial exigiendo penas más severas han tropezado con las críticas de los propios grupos feministas, quienes advierten que el recurso al sistema penal debe ser excepcional y que cuando se acude a éste las mujeres están más interesadas en la protección que en el castigo.¹⁵⁰

Uno de los problemas que el derecho penal mínimo enfrenta, es en el momento de determinar cuándo esta le está permitido intervenir, es decir cuál es el umbral de gravedad que se debería pasar para que la intervención del derecho penal este legitimada. Difícilmente se puede dar una respuesta consensuada al respecto, empero, lo cierto es que se debe propender a una máxima protección al coste del mínimo posible. Relacionado con nuestro tema, la interrogante a resolver sería ¿Es legítima la intervención del derecho penal en los casos asesinato de las mujeres por razones de género?

¹⁴⁸ Ávila Santamaría, *La (in)justicia penal en la democracia constitucional de derechos*, 43.

¹⁴⁹ *Ibíd.*, 45.

¹⁵⁰ Larrauri, *Criminología crítica y violencia de género*, 68,69.



Nuestra opinión es que su intervención es legítima por tratarse de una vulneración de bienes jurídicos fundamentales como es la vida e integridad física de las mujeres, sin embargo, la discusión no debe quedar ahí. El derecho penal debe intervenir para sancionar al infractor pero de manera conjunta con políticas de prevención y protección, en donde lo más importante no sea sancionar sino proteger al grupo vulnerable y deconstruir la estructura sociocultural que lo origina.

Consideramos que la forma en la que viene interviniendo el derecho penal frente a este tipo de fenómenos sociales, no es la correcta; nuestra opinión es que su intervención debe caracterizarse por: Proteger al más débil en la relación jurídica penal, garantizar un debido proceso, las penas no deben ser desproporcionadas, el Estado debe ofrecer medidas alternativas al derecho penal, mejorar los mecanismos de protección, dar una respuesta a una demanda específica, mayor interés en la víctima, entre otras características.

Si se opta porque este sistema represivo se mantenga, a criterio de Ramiro Ávila Santamaría se lo debe hacer bajo tres condiciones: debe ser absolutamente excepcional, las personas deben ser juzgadas con estricto apego a sus derechos y por último las condiciones de vida durante el encierro deben ser dignas y estar sujetas a control judicial.¹⁵¹

2.3.6 La sexualización de la respuesta punitiva

María Acalé Sanchez fue una de las primeras doctrinarias que acuñó el término de sexualización de la respuesta punitiva, entendiéndole como aquel abandono de la neutralidad formal de los tipos penales para dar paso a tipificaciones que expresamente incluyen la diferencia sexual, esto por la

¹⁵¹ Ávila Santamaría, *La (in)justicia penal en la democracia constitucional de derechos*, 268.



necesidad buscar cambios en la legislación penal a fin de evidenciar que en ciertas conductas existe predominio de un sexo.¹⁵²

Anteriormente mencionamos que el derecho no es y nunca será neutro; puesto que ha sido construido y aplicado desde una perspectiva patriarcal, el derecho tiene sexo y es masculino.¹⁵³ Siendo esta una de las críticas por las cuales dudamos respecto de esta alianza entre los movimientos feministas y el derecho penal.

Se dice que al diferenciar un tipo penal se puede caer en un derecho penal de autor, circunstancia que iría en contra de principios fundamentales como el de igualdad y de culpabilidad y en general en contra del desarrollo moderno y garantista del derecho penal. Contrario a este tipo, está el derecho penal de acto según el cual no se sanciona a una persona por lo que es sino por lo que hizo, y que se encuentra regulado en nuestra constitución¹⁵⁴ y en el COIP.¹⁵⁵ Pese a aquello, en el caso del femicidio en nuestro país es evidente que se ha optado por una sexualización de la respuesta punitiva, pues si bien el sujeto activo puede ser cualquier persona, el sujeto pasivo está limitado para la mujer.

Existen ciertos doctrinarios que consideran que no existe vulneración a dichos principios fundamentales si se lo hace pretendiendo un efecto simbólico, sin que implique una agravación de las penas.¹⁵⁶ En ciertas legislaciones como la española ha optado por agravar la pena, inclusive con la aprobación del Tribunal Constitucional Español bajo los siguientes criterios:

¹⁵² María Acale Sánchez y Agustín Jorge Barreiro, *La discriminación hacia la mujer por razón de género en el Código penal*, 1a. ed, Colección de derecho penal (Madrid: Editorial Reus, 2006).

¹⁵³ Ramiro Ávila Santamaría, "Género, derecho y discriminación", (Quito:UASB-DIGITAL, 2012), <http://hdl.handle.net/10644/2975>. Consulta: 25 de Mayo de 2016.

¹⁵⁴ CRE, art 76:3

¹⁵⁵ COIP, art 22

¹⁵⁶ Patsilí Toledo Vásquez et al., *Feminicidio* (México: Naciones Unidas: Derechos Humanos: OACNUDH, 2009), 77.



Ciertas acciones son más graves, más reprochables socialmente, porque son expresión de una desigualdad y de una situación de abuso de poder, de una situación de discriminación en que se encuentran muchas mujeres.¹⁵⁷

Existen otras legislaciones como la de Suecia o Guatemala que han optado por mantener la misma pena que otros delitos como el asesinato. Como se dijo, si no existe agravación de pena quizá las discusiones sobre su constitucionalidad sean menores, no así cuando se decide aumentar las penas.

Nuestra posición es que, en un Estado Constitucional de derechos, con una Constitución caracterizada por ser garantista, debe ser ésta la que oriente cada creación normativa, pues de lo contrario sería inconstitucional. Defender dualismos normativos consideramos que no es una estrategia eficaz, puesto que puede originar restricciones o exclusiones a cierto tipo de violencias como por ejemplo entre parejas lésbicas u homosexuales. Acertadamente Patsili Toledo afirma que hay que tener cuidado en el momento de la elaboración de estos tipos penales diferenciados, los cuales en lugar de ser antidiscriminatorias, podrían terminar reproduciendo nuevas formas de discriminación.¹⁵⁸

Debemos reconocer que una de las ventajas de una tipificación sexualizada es que facilita la obtención de estadísticas respecto de este tipo de crímenes que a su vez podrían ser de gran ayuda en el momento de diseñar políticas públicas enfocadas a modificar el problema estructural. Otra de las ventajas que consideramos respecto de la sexualización de la respuesta punitiva, es que nos permite visibilizar aquella violencia que ha permanecido oculta tramposamente por el sistema patriarcal, pues para encontrar una solución a un problema primero hay que identificarlo; en lo que discrepamos es en que el derecho penal permita alcanzar dicho objetivo.

Es claro que en este tipo de violencia las víctimas mayoritariamente son las mujeres, pero no son las únicas siendo por ello menester no desatender a los

¹⁵⁷ España, Sentencias del Tribunal Constitucional N°59/2008 del 14 de Mayo de 2008.

¹⁵⁸ Patsilí Toledo Vásquez, «¿Tipificar el Femicidio?», *Anuario de Derechos Humanos* 0, n.º 4 (1 de enero de 2008): 219, doi:10.5354/0718-2279.2008.13660. www.anuariocdh.uchile.cl. Consulta: 25 de Mayo de 2016.



demás grupos; pues desde una perspectiva integradora debería tener en cuenta las diferentes manifestaciones de violencia; como dice Ramiro Ávila Santamaría “es necesario no solo cuestionar la realidad que oprime sino también los discursos, incluso los discursos de género cuando éstos crean jerarquías”.¹⁵⁹

Independientemente si se está a favor o en contra, lo cierto es que las legislaciones de los diferentes países han optado por una u otra forma de tipificación y que a consecuencia de aquello se ha dado un fuerte debate sobre la constitucionalidad de estas disposiciones, y que por su enorme importancia analizaremos a continuación.

2.3.7. El femicidio y su constitucionalidad

Entre los diferentes cuestionamientos sobre la tipificación del femicidio, existe uno sustentado en la supuesta vulneración de garantías fundamentales principalmente las vinculadas con los principios de legalidad, igualdad, culpabilidad e inocencia. Debemos tener en cuenta que dicha vulneración no puede ser analizada desde un punto de vista general por dos razones; en primer lugar porque cada Estado tiene su normativa legal y constitucional que requiere ser tomada en cuenta y en segundo lugar porque la muerte de una mujer por razones de género necesaria e imperiosamente debe ser analizada dentro del contexto dentro del cual se da, pues no es igual que una mujer sea asesinada en Ciudad Juárez que en la ciudad de Cuenca, pese a que respondan a un mismo sistema.

Es por ello que consideramos oportuno realizar un análisis de constitucionalidad del tipo penal de femicidio dentro del contexto ecuatoriano, siendo la Constitución el instrumento jurídico base que utilizaremos para dicho análisis. En primer lugar nos referiremos al principio de legalidad.

Partiremos mencionado que según este principio toda conducta debe encontrarse previamente tipificada para que pueda ser sancionada, así como también su sanción. En otras palabras una ley debe ser expresa, previa, general y

¹⁵⁹ Ávila Santamaría, “Género, derecho y discriminación”, 24.



prohibida de toda analogía.¹⁶⁰ Principio que se encuentra regulado en el COIP¹⁶¹ así como en la CRE¹⁶²; cabe entonces hacernos la primera interrogante ¿el femicidio respeta el principio de legalidad?

En principio podríamos decir que si, puesto que existe un tipo penal que regula aquella conducta, que establece la correspondiente pena y cuya norma se encuentra legalmente vigente; sin embargo, consideramos menester hacer una observación.

Una de las consecuencias de este principio es el mandato de precisión, es decir que toda norma debe ser clara, circunstancia que posibilita en el momento del juzgamiento realizar una adecuación de la conducta al tipo penal de forma adecuada. En relación a aquello, consideramos que el art 141 del COIP es una norma que carece de precisión, pues es una norma abierta; esto en virtud de que no existe una definición concreta sobre que debemos entender por relaciones de poder o por condición de género, que son una de las características fundamentales de este tipo penal.

Si el problema de la definición de estas categorías es aún complicado dentro del ámbito doctrinario, más lo será en un ambiente jurisdiccional; pues puede prestarse a consideraciones subjetivas de los jueces lo que terminarían vulnerando el principio de legalidad; sobre todo con aquellos administradores de justicia que carezca de conocimientos de género.

En cuanto al principio de igualdad debemos partir dando una definición formal; el artículo 3 de la CRE lo define como el goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales sin discriminación alguna, así también en el art 11 numeral 2 ibídem establece que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Desde un punto de vista material la igualdad debe ser entendida como “la necesidad de que

¹⁶⁰ Enrique Bacigalupo, *Derecho penal: parte general*, 1. ed (Lima: Ara Editores, 2004), 64.

¹⁶¹ COIP, art 5:1

¹⁶² CRE, art 76:3



el Estado adopte medidas tendientes a remover los obstáculos que impidan de hecho la igualdad”.¹⁶³

En el tema anterior se manifestó que en nuestra legislación existe una sexualización de la respuesta punitiva, lo cual podría terminar vulnerando el principio de igualdad; también se afirmó que el conflicto de su constitucionalidad se reduce si no existe agravación de la pena. En el caso de nuestro país el Femicidio tiene la misma pena que el tipo penal de asesinato, y en base a este postulado podríamos decir que no afecta el principio de igualdad, o por lo menos no afecta de forma grave; pero la discusión no debe quedar ahí pues resulta menester realizar un análisis más profundo.

Es necesario tener en cuenta que no existe un nivel máximo o mínimo de vulneración de un principio constitucional, es decir, es o no es vulnerado. Siendo esto así, la primera conclusión que podríamos llegar es que en nuestro país existe vulneración al principio de igualdad por cuanto el tipo penal establece como único sujeto pasivo a la mujer excluyendo al hombre. Cabe entonces hacernos la siguiente interrogante ¿El principio de igualdad es absoluto?

Referente a la primera interrogante la Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala frente a una consulta realizada se pronunció de la siguiente manera:

“El concepto de igualdad así regulado estriba en el hecho de que las personas deben gozar de los mismos derechos y las mismas limitaciones determinadas por la ley. Sin embargo, ese concepto *no reviste carácter absoluto* [...] Así, la igualdad ante la ley consiste en que no deben establecerse excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros *en iguales circunstancias* [...] Lo que puntualiza la igualdad es que *las leyes deban tratar de igual manera a los iguales en iguales circunstancias*, sin que ello signifique que los legisladores carezcan de la facultad de establecer categorías entre los particulares siempre que tal diferenciación se apoye en una base

¹⁶³ Guillermo Treacy, “Categorías sospechosas y control de constitucionalidad”. <http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/89/treacy-guillermo-f-categorias-sospechosas-y-control-de-constitucionalidad.pdf>. Consulta: 21 de Junio de 2016



razonable y sea congruente con el fin supremo del Estado”¹⁶⁴ (el énfasis es nuestro).

Guatemala a través de la Corte de Constitucionalidad es uno de los defensores respecto de que la tipificación del femicidio no vulnera el principio de igualdad por cuanto se considera que el principio de igualdad no es absoluto; en virtud de ello podríamos llegar a la segunda conclusión; contraria a la primera, por cierto. Si no existe igualdad entre hombres y mujeres, es dable su regulación sexualizada, por supuesto en aras de deconstruir aquella estructura discriminatoria que origina la violencia en contra de la mujer. Sin embargo, es necesario cuestionarnos si efectivamente permite alcanzar tal fin, pues de lo contrario, el tipo penal así formulado no se encontraría legitimado. Conforme lo mencionamos anteriormente, nuestra posición es que una norma no ha podido, no puede ni podrá deconstruir un sistema patriarcal, discriminatorio y androcéntrico.

Más allá de la idoneidad de la utilización del derecho penal frente al problema de violencia de género; de las dos conclusiones antes mencionadas optamos por la segunda, es decir a través del tipo penal femicidio no existe vulneración al principio de igualdad por las siguientes razones: Porque efectivamente vivimos en una relaciones desiguales de poder propias del sistema patriarcal, a través del cual se discrimina a la mujer otorgándole una posición inferior a la del varón y sobre todo porque nuestra Constitución permite realizar discriminaciones positivas, a través de las medidas de acción afirmativa que pretende garantizar una igualdad real de los titulares que se encuentren en situación de desigualdad.¹⁶⁵

En cuanto al principio de culpabilidad que a su vez está relacionado con el de inocencia, consideramos que en el caso del femicidio en nuestro país no existe vulneración, esto en virtud de que no se regula una agravación de la pena y porque el sujeto activo puede ser cualquier persona indistintamente de su sexo o

¹⁶⁴ Guatemala, Corte de Constitucionalidad, Expediente N° 3009-2011 del 23 de febrero de 2012. http://www.cc.gob.gt/documentosCC/SentenciaCC_LeyFemicidio.pdf. Consulta: 22 de Junio de 2016.

¹⁶⁵ CRE, art 11:2



género. En el supuesto de que la autoría estuviese reservada únicamente para el sexo masculino, si existiera tal vulneración, por cuanto la presunción de culpabilidad estaría reservada a la condición de varón; cayendo así en un derecho penal de autor.

Por lo mencionado, respecto de la constitucionalidad del tipo penal de femicidio llegamos a la siguiente conclusión: de los cuatro principios analizados, en tres de ellos no existe vulneración. Empero es necesario tener en cuenta que nuestra constitución establece normas, principios, valores y garantías cuya observación es imperativa y que por lo tanto merecen ser analizadas profundamente. El debate entre los doctrinarios sobre todo ha girado alrededor del principio de igualdad y que conforme lo desarrollamos no se da tal vulneración.

Si bien el tipo penal de femicidio no vulnera dicho principio; se corre con el riesgo de crear categorías sospechosas que en un momento dado podría terminar vulnerando más principios fundamentales que los que se busca proteger.

2.4 Síndrome de Adaptación paradójica, síndrome de Estocolmo y su relación con el Femicidio

En el capítulo I referimos que el femicidio es producto de aquel continuum de violencia, lo cual está relacionado con el hecho de que la mujer pese a que es violentada continuamente sigue conviviendo con su agresor y a consecuencia de aquello muchas veces termina en su asesinato; en virtud de ello, es menester analizar cuál es la razón por la que pese a ser víctima de constantes agresiones la mujer continúa viviendo con su agresor, análisis que debe realizarse desde un enfoque público y privado.

El aspecto privado de la víctima de violencia de género puede ser analizado desde varios enfoques, puesto que una persona violentada puede permanecer junta a su agresor por razones económicas (dependencia), culturales, religiosas, afectivas entre otras. Existen varios autores que han pretendido dar explicación al porque la mujer pese a ser maltratada permanece con su victimario, a las que nos referiremos brevemente a continuación.



La primera explicación que se pretende dar es la defendida por Snell, Rosenwall y Robey; quienes afirman que la razón por la que se permanece con el agresor es por cuestiones inherentes a la víctima, pues por un lado permite descargar el estrés del hombre (a consecuencia de ejecutar su rol productivo) y al mismo tiempo permite a la mujer una satisfacción masoquista.¹⁶⁶

Por su parte Jorge Corsi justifica la permanencia de la víctima en el aprendizaje social, pues considera que existe una relación causal entre la vivencia de violencia como testigo en la infancia y su posterior desarrollo de conductas violentas o una predisposición a ser víctima, es lo que Martin Seligman lo denominó la Teoría de la indefensión aprehendida.¹⁶⁷

Finalmente Leonor Walker busco justificar esta dependencia en la teoría del ciclo de la violencia, denominado también Síndrome de Adaptación Paradójica a la Violencia de Género (en adelante SAPVG), al respecto Andrés Montero Gómez refiere:

Este síndrome será descrito como un conjunto de procesos psicológicos que culminan en el desarrollo paradójico de un vínculo interpersonal de protección entre la mujer víctima y el hombre agresor [...] ¹⁶⁸

Esta conducta de dependencia provoca que la víctima permanezca en una relación de continua violencia, el cual se caracteriza por estar compuesto de tres fases que la psicóloga norteamericana Walker lo definió como “ciclo de la violencia”¹⁶⁹.

¹⁶⁶ Citado por Raquel Castillejo Manzanares y Ma Ángeles Catalina Benavente, eds., *Violencia de género, justicia restaurativa y mediación*, 1a edición, Temas / La Ley (Las Rozas, Madrid: La Ley, 2011), 574.

¹⁶⁷ *Ibíd.*

¹⁶⁸ Andrés Montero Gómez, *Síndrome de adaptación paradójica a la violencia doméstica: una propuesta teórica*. (Madrid: Colegio Oficial de psicólogos de Madrid, 2001), 5. <<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=180618320001>> ISSN 1130-5274. Consulta: 23 de Junio de 2016.

¹⁶⁹ Elizabeth Nicole Barrientos, “Análisis descriptivo de los tipos de violencia de pareja y el periodo de latencia existente desde el comienzo real de violencia hasta el inicio de la ruta crítica”, (Tesis de licenciada en enfermería, Universidad Austral de Chile, 2012), 14.



Dicha autora realiza una descripción de aquel ciclo, siendo la primera fase la denominada “acumulación de tensiones” en donde se dan aquellas agresiones físicas y sobre todo verbales de forma leve, y la víctima siente culpabilidad y tensión y busca calmar las tensiones complaciendo en todo al agresor. Posteriormente se da la fase de “incidente” en donde se dan maltratos más graves y pese a ello las mujeres no denuncian por miedo o temor, siendo la característica fundamental de esta fase que después de sufrir dichas agresiones tratan de minimizarlos. La última etapa es la del “arrepentimiento y comportamiento cariñoso” en la que el agresor se arrepiente y en donde la mujer desea creerle y aunque no lo haga, la presión social impide que le abandone por lo que decide mantenerse en la relación, esta fase se la conoce también como “luna de miel”¹⁷⁰.

Este proceso se repetirá una y otra vez, encerrándole a la víctima en este círculo de violencia que de no existir una intervención oportuna, podría terminar en femicidio. Sin embargo, pese a que estos aspectos privados vinculados con la víctima y el agresor es fundamental, a la hora de realizar propuestas que permitan enfrentarlo es imperativo tener en cuenta el aspecto público de esta dependencia.

Consideramos que la mujer además de las cuestiones individuales y sociales, permanece junto a su agresor debido a la falta de políticas de protección y prevención de la mujer, que le permita empoderarse y superar aquel continuum de violencia. Con razón Montero menciona que existen tres causas por las que además de estas psicopatologías, la mujer pese a ser maltratada permanece en dicha relación:

- 1) Diversos procesos paralizantes generados y mantenidos por el miedo; 2) la percepción por la víctima de una ausencia de vías de escape o salida de la situación de tortura; 3) y la carencia de recursos alternativos.¹⁷¹

¹⁷⁰ Ibíd.

¹⁷¹ Montero Gómez, Síndrome de adaptación paradójica a la violencia doméstica, 9.



Esta clasificación demuestra que efectivamente existen tantos factores vinculados con la persona así como también aspectos vinculados con la obligación de los Estados de generar políticas públicas que permitan eliminar la violencia de género. Como recomienda Montero Gómez se debe propender a una “comprensión rigurosa del aparato psicológico involucrado en la formación del tipo de vínculos paradójicos mencionados, con el propósito final de desactivarlos y abrir más oportunidades a la acción de procedimientos legales o asistenciales”.¹⁷²

Es por esta ausencia de la intervención estatal en temas de violencia que Marcela Lagarde prefiere hablar de feminicidio mas no de femicidio, pues éste término le da un plus de responsabilidad al Estado conforme lo referimos en el capítulo primero.

Pese a las diferentes teorías que pretenden explicar la razón por la que las víctimas permanecen junto a su agresor, todavía persiste en el imaginario social el hecho de que la mujer es la culpable por permanecer en dicha relación y por otro lado se justifica el accionar del hombre alegando el estrés y otras circunstancias externas o internas vinculadas sobre todo con los roles que debe desempeñar; circunstancia que se agrava si no existe interés por parte del Estado de intervenir en esta problemática social.

Es imperativo ejecutar políticas que permitan empoderar a las mujeres víctimas de un ciclo de violencia, a través de la prevención y protección oportuna; para que de esta forma decidan romper aquel ciclo que muchas veces termina con un femicidio.

¹⁷² *Ibíd.*, 10.



CAPITULO III

EL FEMICIDIO EN EL MUNDO

3.1 Femicidio como delito propio regulado en algunos países de Sudamérica

Una de las principales críticas que ciertos doctrinarios realizan a los movimientos feministas es que no existe una sola versión del feminismo y consecuentemente existen diversas consideraciones respecto de la violencia de género; una muestra de aquello es la tipificación del feminicidio en los diferentes países de Latinoamérica, cada una con sus características propias.

Es menester mencionar que si bien el tipo penal en los diferentes países posee características propias, sin embargo, todos responden a una misma tendencia conforme lo veremos a continuación. Para mejor ilustración, clasificaremos entre aquellos países que regulan el feminicidio de manera amplia y aquellos que lo hacen de forma restrictiva, entendiéndose por la primera aquellas regulaciones en donde se sanciona aquellos crímenes cometidos tanto en la esfera pública como en la privada; en cuanto a los modelos restrictivos son aquellos en donde su regulación se limita a aquellos crímenes cometidos en la esfera privada.

3.1.1 Modelos restrictivos de tipificación

3.1.1.1 Costa Rica

Art 21. Femicidio

Se le impondrá pena de prisión de veinte a treinta y cinco años a quien de muerte a una mujer con la que mantenga una relación de matrimonio, en unión de hecho declarado o no.¹⁷³

¹⁷³ Costa Rica. Ley para la Penalización de la Violencia contra las Mujeres N° 8589, Aprobada por la Asamblea Legislativa el 12 de abril de 2001 y publicada el 30 de mayo de 2007.



El contexto que influye en su tipificación conforme lo refiere Patsilí Toledo es el peso del Derecho Internacional de los Derechos Humanos así como también la gran influencia que ejercía el feminismo local y sobre todo el activismo feminista ejercido por los/las académicas.¹⁷⁴

Es una de las primeras legislaciones que regula el femicidio, solo detrás de España (2004) y Venezuela (2007). Este tipo penal se caracteriza por estar limitado a aquellas con las que mantenga un vínculo matrimonial o unión de hecho, siendo ésta una de las principales críticas que se ha hecho desde los movimientos feministas; toda vez que si una persona desconocida comete dicho acto no puede ser juzgado mediante este tipo penal.

Otra observación es que no refiere a los elementos de género, como por ejemplo “por el sólo hecho de ser mujer”, “por razones de género”, “relaciones de poder” entre otras. Lo cual resulta un problema, puesto que, si se quiere visibilizar la violencia de género, no se podrá lograr ya que en el tipo penal así como está regulado, todo suceso que atente contra la vida de la mujer será femicidio sin importar la causa, claro siempre que exista aquella vinculación antes referida.

En cuanto al sujeto activo se entiende que puede ser cualquier persona y el sujeto pasivo será únicamente la mujer; referente a su sanción, la normativa antes referida impone una pena de 20 a 35 años de privación de la libertad.

3.1.1.2 Chile

Art 390. El que, conociendo las relaciones que los ligan, mate a su padre, madre o hijo, a cualquiera otro de sus ascendientes o descendientes o a quien es o ha sido su cónyuge o su conviviente, será castigado, como parricida, con la pena de presidio mayor en su grado máximo o presidio perpetuo calificado.

Si la víctima del delito descrito en el inciso precedente es o ha sido el cónyuge o la conviviente de su autor, el delito tendrá el nombre de femicidio.¹⁷⁵

¹⁷⁴ Patsilí Toledo Vásquez y Patricia Laurenzo Copello, *Femicidio*, 1. ed (Buenos Aires: Didot, 2014), 206.

¹⁷⁵ Chile, Ley N° 20.048, Aprobada por el Congreso Nacional el 26 de octubre de 2010 y publicada el 18 de Diciembre de 2010.



La primera observación que podemos realizar es que el femicidio no se regula como tipo penal autónomo, sino se encuentra establecido dentro del tipo penal de parricidio; lo cual es criticable pues éste es un tipo penal que se ha venido eliminándose progresivamente en las diferentes legislaciones, un ejemplo de ello es nuestra legislación; pues el COIP a diferencia de la ley penal anterior no regula este tipo penal.

Así también la legislación chilena limita la sanción a aquellas personas cónyuges o convivientes de la víctima, siendo quizá un aspecto importante el hecho de no establecer un sexo único sea como sujeto activo o pasivo, en otras palabras, tanto la víctima o el victimario pueden ser hombres o mujeres. Esta circunstancia ha llevado a considerar que es un tipo penal que “no reconoce la situación de grave desigualdad y discriminación implícita en estas conductas”,¹⁷⁶ pues se dice que si una mujer es asesinada por un varón tiene igual consideración que si la mujer comete el mismo hecho, y por lo tanto será sancionada de igual forma.

Conforme lo refiere Toledo, este modelo restrictivo ha sido duramente cuestionado por los doctrinarios, cuyo debate se reactivó el año 2012 a consecuencia de un impactante asesinato de una trabajadora sexual, siendo inclusive cuestionado por el Comité de la CEDAW. Se dice así también que la tipificación del femicidio tiene un impacto más mediático que real, puesto que la protección de las mujeres no se incrementa por esta vía.¹⁷⁷

3.1.1.3 Perú

Art 107. Parricidio/feminicidio. El que, a sabiendas, mata a su ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, o a quien es o ha sido su cónyuge, su

¹⁷⁶ Patsilí Toledo Vásquez et al., *Feminicidio* (México: Naciones Unidas: Derechos Humanos: OACNUDH, 2009), 132.

¹⁷⁷ Toledo Vásquez y Lorenzo Copello, *Femicidio*, 215.



conviviente, o con quien esté sosteniendo o haya sostenido una relación análoga será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de quince años.

La pena privativa de la libertad será no menor de veinticinco años, cuando concurren cualquiera de las circunstancias agravantes previstas en los numerales 1, 2, 3, y 4 del artículo 108.

Si la víctima del delito descrito es o ha sido cónyuge o la conviviente del autor; o estuvo ligada a él por una relación análoga el delito tendrá el nombre de feminicidio.¹⁷⁸

La redacción de este tipo penal es prácticamente igual a la legislación chilena, pues se encuentra regulado dentro del parricidio, el sujeto activo y pasivo en principio podríamos decir que no son calificados, y la restricción en cuanto a quienes pueden ser sujetos dentro de este tipo penal; empero, existen elementos adicionales que es menester referirnos.

En primer lugar se menciona que este tipo de delitos puede cometerse entre cónyuges, o convivientes, pero además en aquellos en donde exista una “relación análoga” pues al igual que en la legislación de Costa Rica, estos son términos que pueden prestarse para cualquier interpretación creando vacíos normativos que podría terminar afectando el principio de tipicidad y seguridad jurídica.

En segundo lugar podemos mencionar que si bien expresamente no se refiere a la víctima o victimario como hombre o mujer, la forma gramatical en la que esta estructurada (la cónyuge, del autor, ligada a él) haría suponer que la víctima será mujer y el femicida un hombre.

Finalmente consideramos que un aporte fundamental que realiza este país es que lo define como feminicidio, y no femicidio como lo hacían las dos legislaciones antes referidas; circunstancia que le otorga responsabilidad al Estado en este tipo de muertes con las implicaciones que en los capítulos anteriores referimos.

¹⁷⁸ Perú, Ley N° 29.819, Aprobada por el Congreso el 01 de Diciembre de 2011 y publicada el 27 de diciembre de 2011.



Las tres legislaciones hasta ahora referidas se caracterizan por regular limitadamente el contexto dentro del cual puede cometerse este tipo de delitos, sin embargo la mayoría de las legislaciones han optado por crear modelos amplios de tipificación. Estos permiten sancionar no solamente aquellos cometidos en aquellas relaciones privadas sea como cónyuges, uniones de hecho o noviazgos, sino también en el ámbito público sean o no conocidos de la víctima.

3.1.2 Modelos amplios de tipificación

3.1.2.1 Guatemala

El Congreso de la República de Guatemala en el año 2008 aprobó la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, a través de la cual se regula el tipo pena de femicidio.¹⁷⁹ La primera diferencia con las legislaciones antes referidas es que regula aquellos femicidios cometidos no solamente en relaciones de pareja, sino también en aquellos en donde no existió una relación previa.

¹⁷⁹ Artículo 6. Femicidio. Comete el delito de femicidio quien, en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, diere muerte a una mujer, por su condición de mujer, valiéndose de cualquiera de las siguientes circunstancias:

- a. Haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima.
- b. Mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber mantenido con la víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo, amistad, compañerismo o relación laboral.
- c. Como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de la víctima.
- d. Como resultado de ritos grupales usando o no armas de cualquier tipo.
- e. En menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos sexuales, o cometiendo actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de mutilación.
- f. Por misoginia.
- g. Cuando el hecho se cometa en presencia de las hijas o hijos de la víctima.
- h. Concurriendo cualquiera de las circunstancias de calificación contempladas en el artículo 132 del Código Penal.

La persona responsable de este delito será sancionada con pena de prisión de veinticinco a cincuenta años, y no podrá concedérsele la reducción de la pena por ningún motivo. Las personas procesadas por la comisión de este delito no podrán gozar de ninguna medida sustitutiva



Una de las características es la pena con la que se sanciona este tipo de delitos, quizá sea una de las más severas de Latinoamérica, esto en virtud de que puede privarse de libertad al femicida hasta por 50 años sin que exista posibilidad de reducción a la pena impuesta. La pena establecida para los casos de femicidio en Guatemala, podría inclusive ser considerada como cadena perpetua, teniendo en cuenta que los sancionados son mayores de 18 años y la esperanza de vida en este país es de 71 años.¹⁸⁰ Siendo esto así, difícilmente una persona sancionada por femicidio saldrá con vida, siendo por lo tanto atentatorio a derechos fundamentales.

Por otro lado, en Guatemala las mujeres son las únicas que podrán ser consideradas como víctimas de femicidio, en cuanto al sujeto activo no existe determinación específica.

Este tipo penal termina confundiéndose con el asesinato, pues en su literal h establece que será sancionado por femicidio si concurre alguna de las circunstancias del asesinato.

3.1.2.2 El Salvador

Artículo 45. Femicidio

Quien causare la muerte de una mujer mediando motivos de odio o menosprecio por su condición de mujer, será sancionado con pena de prisión de veinte a treinta y cinco años.

Se considera que existe odio o menosprecio a la condición de mujer cuando ocurra cualquiera de las siguientes circunstancias [...] ¹⁸¹

La primera característica que podemos evidenciar en esta ley es que está dirigida exclusivamente a la protección de la mujer, por lo tanto el sujeto pasivo del femicidio siempre será la mujer. Así también regula cinco circunstancias, las

¹⁸⁰ Banco Mundial, "Life expectancy at birth, total (years)". <http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN>. Consulta 13 de Julio de 2016

¹⁸¹ El Salvador, Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, publicada el 25 de Noviembre de 2010.



cuales debidamente probadas, permitirán demostrar que existió odio o menosprecio por la condición de ser mujer, lo cual supera aquellas críticas sobre vacíos legales que existen en otras legislaciones.

Una de las circunstancias que vale la pena destacar es la “muerte precedida por causa de mutilación”, que es una de las circunstancias que justifica el odio; el mismo que es una novedad sobre todo en países latinoamericanos, este tema ha sido debatido mayormente en los países del continente africano, pues es en éstos en donde más se practica las mutilaciones sobre todo por cuestiones culturales y religiosas.

Al igual que en nuestro país, la legislación de El Salvador regula circunstancias que agravan la pena del femicidio,¹⁸² imponiendo una pena de hasta 50 años de prisión. Así también esta legislación penal regula la figura de suicidio feminicida, lo cual es una novedad dentro de las demás legislaciones, pues su sanción amplía no solo a aquellas personas que asesina a la mujer por su condición, sino aquellos que inducen o presten ayuda para que la mujer se suicide, aunque su pena sea menor que al que lo ejecuta.

Finalmente otra circunstancia que vale la pena destacar es que se utiliza el término feminicidio, pese a que no tenga mayor implicación por cuanto en los diferentes artículos no refiere a la responsabilidad estatal frente a estos sucesos.

3.1.2.3 Nicaragua y Bolivia

En Nicaragua fue regulada en el año 2012 a través de la Ley integral contra la violencia hacia las mujeres, tiene una tipificación muy similar a la de

¹⁸² Art 46. Femicidio Agravado: El delito de feminicidio será sancionado con pena de treinta a cincuenta años de prisión, en los siguientes casos:

- A) Si fuere realizado por funcionario o empleado público o municipal, autoridad pública o agente de autoridad.
- B) Si fuere realizado por dos o más personas
- C) Si fuere cometido frente a cualquier familiar de la víctima
- D) Cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad, adulta mayor o sufre discapacidad física o mental
- E) Si el autor se prevaleciere de la superioridad originada por relaciones de confianza, amistad, doméstica, educativa o del trabajo.



Guatemala,¹⁸³ con la sola diferencia en cuanto al sujeto activo, pues en este caso se establece únicamente el hombre será el que puede cometer este tipo de delitos. Otra diferencia es que la pena para los delitos del femicidio en el ámbito privado es de hasta 25 años y en el público de hasta 20 años.

En cuanto a Bolivia, tipificada en el año 2013 a través de la Ley Integral para garantizar una vida libre de violencia contra las mujeres¹⁸⁴, reguló de forma similar a las anteriores legislaciones, estableciendo un modelo amplio de regulación, el sujeto activo puede ser cualquier persona y el pasivo únicamente la mujer. Se sanciona con una pena de treinta años de prisión.

3.1.2.3 México

Pese a ser uno de los primeros y principales países que han iniciado la lucha en contra de la muerte de la mujer por razones de género en Latinoamérica, no es sino hasta el año 2010 que en el Estado de Guerrero se tipifica por primera vez el feminicidio.

Es menester destacar que México se organiza mediante estados federales, en virtud de ello existe una ley federal (cuyo valor es meramente simbólico y político) a partir del cual los estados federales establecen su propia legislación. Pese a ello, cada estado mexicano tiene sus propios códigos penales los cuales han venido regulando de diferente forma, no siempre respondiendo a los intereses de los movimientos de defensa de las mujeres.

Conforme lo refiere Toledo, el feminicidio ha sido tipificado en más de veinte estados federales en los últimos tres años (2012-2013-2014), todos influidos por factores políticos y jurídicos.¹⁸⁵ Jurídicamente porque en el año 2010 el Comité de Derechos Humanos recomendó a México la necesidad de incorporar el tipo penal de femicidio, empero, quizá el factor que más influyó fue el político, pues las diferentes aprobaciones se dieron dentro de un contexto previo a las elecciones:

¹⁸³ Nicaragua, Ley N°779, publicada el 22 de Febrero de 2012.

¹⁸⁴ Bolivia, Ley N° 348, publicada el 09 de marzo de 2013.

¹⁸⁵ Toledo Vásquez y Lorenzo Copello, *Femicidio*, 249.



Las denuncias de mujeres frente al feminicidio han dado lugar a rápidas respuestas legislativas en diversas entidades y la aprobación de las leyes de feminicidio ha tenido gran fuerza política y mediática, siendo promovidas – en diversas formulaciones- por gobiernos de todos los partidos.¹⁸⁶

De todas las legislaciones latinoamericanas revisadas se puede concluir que existe un mayor compromiso de lucha contra la violencia de la mujer por razones de género, siendo el derecho penal el principal instrumento utilizado como respuesta a este fenómeno. Existen países como Perú que establecen una pena de 15 años de prisión, y otros hasta 50 años de prisión como en el caso de Guatemala o El Salvador; penas que a nuestro criterio son desproporcionales, atentatorios de derechos fundamentales y contradictorios frente a los fines que la pena debe perseguir. Nuestro país adopta muchas de las características de las legislaciones analizadas, sobre todo referente a la pena, su desproporcionalidad y respecto de los sujetos que intervienen en la relación jurídico penal. A continuación, desarrollaremos un cuadro que resume los aspectos fundamentales de cada legislación:

¹⁸⁶ Ibid., 250.



PAIS	MODELO	AÑO	SUJETO ACTIVO	SUJETO PASIVO	PENA EN AÑOS
Costa Rica	Restrictivo	2007	No calificado	Calificado	20 – 35
Chile	Restrictivo	2007	No calificado	No calificado	Presidio mayor-presidio perpetuo calificado
Perú	Restrictivo	2011	No calificado	No calificado	15
Guatemala	Amplio	2008	No calificado	Calificado	25-50
El Salvador	Amplio	2010	No calificado	Calificado	20-35 (Feminicidio) 30-50 (agravado) 5-7 (suicidio feminicida)
Nicaragua	Amplio	2012	Calificado	Calificado	15-20 (público) 20-25 (privado)
Bolivia	Amplio	2013	No calificado	Calificado	30

3.2 Los medios de comunicación y su influencia en la violencia de género

Los medios de comunicación desde sus orígenes han representado y defendido determinados intereses, y pese a que la objetividad es uno de sus postulados fundamentales, pocas veces lo practican. Cabe entonces hacernos la siguiente interrogante ¿Los medios de comunicación influyen en la violencia de género? Y si esto es así ¿de qué manera lo hacen?

Debemos partir mencionando que la creación de tipos penales, el endurecimiento de las penas y en general el discurso político criminal, actúa de la mano de los medios de comunicación, pues son éstos los que intervienen en la



construcción del sujeto peligroso, de los hechos que deben ser regulado y de las penas que deben darse como respuesta a los mismos. En virtud de ello diremos que existe gran influencia de los medios de comunicación en la sociedad a través de la criminología mediática.

Se dice que siempre existieron criminologías mediáticas, aunque su estructura ha variado a través del tiempo, circunstancia que estuvo supeditada a la tecnología, pues si antes se los ejercía a través de folletines o diarios ahora se lo hace principalmente a través de la televisión o el internet.

Pese a estos cambios exteriores, su esencia no ha variado puesto que este tipo de criminología siempre se construyó en base a una causalidad mágica. Pero ¿Qué es una causalidad mágica? Zaffaroni considera que “es aquella causalidad que se usa para canalizar la venganza contra determinados grupos humanos...hace de estos grupos humanos chivos expiatorios”.¹⁸⁷ Creado en base a un imaginario social que a su vez responde a determinados intereses.

Se dice que actualmente la televisión es el medio característico de este tipo de criminología, lo que termina convirtiendo a la persona en homo videns.¹⁸⁸ Esto en virtud de que la capacidad de pensar está siendo reemplazada por una cultura en donde no se fomenta el pensamiento crítico sino se limita a la captación de imágenes que reproducen la idea de lo que nos quieren mostrar. Siendo el primer inconveniente de este tipo de criminología ejercido por los medios, pues muestra y construyen una versión que ellos quieren mostrar y que en la mayoría de los casos es distinta a la realidad.

En efecto, uno de los problemas de esta comunicación a través de las imágenes es que se limita a un pensamiento específico, esto por el mismo hecho de que una imagen no puede reproducir hechos abstractos y los termina limitando a meros pensamientos concretos.

Al respecto Zaffaroni menciona:

¹⁸⁷ Eugenio Raúl Zaffaroni, *La palabra de los muertos: conferencias de criminología cautelar*, 1. reimpr (Buenos Aires: Ediar, 2011), 365.

¹⁸⁸ *Ibíd.*, 367.



La criminología mediática crea la realidad de un mundo de personas decentes frente a una masa de criminales identificada a través de estereotipos, que configuran un ellos separado del resto de la sociedad, por ser un conjunto de diferentes y malos.¹⁸⁹

Permiten crear a los “ellos”, siendo aquel grupo de personas que no se adecuan al paradigma de lo humano, que obviamente será determinado por los políticos en conjunto con los medios de comunicación. Son aquellos prejuiciados que no necesariamente serán los criminales peligrosos, sino aquellos que no cometieron ningún delito pero que por estar estereotipados forman parte de aquel grupo contra el cual debe actuar la criminología pues se considera que son ellos los peligrosos que causan problemas en la sociedad, es aquel chivo expiatorio que debe ser temido, criminalizado y eliminado, creando así un sentimiento de inseguridad respecto de este grupo de personas, los “ellos”.

Los “ellos” son los que causan miedo, los que corrompen la sociedad, son los desviados sociales. Estas personas desviadas no son consideradas como tales a consecuencia de su comportamiento, sino más bien dependerá de quienes directa o indirectamente la presencian,¹⁹⁰ en donde evidentemente los medios de comunicación ejercerán un papel preponderante. Para ser catalogado como desviado dependerá de su acto pero sobre todo de lo que el resto de la gente piense de dicho acto; siendo esto así, cabe preguntarse a quien realmente le interesa que un sujeto sea considerado peligroso, debiendo tener en cuenta que el carácter de desviado lo define la mentalidad pública.¹⁹¹

A pesar de lo antes mencionado, no debemos caer en el error de pensar que la violencia de género y en especial los asesinatos por razones de género no existen y que son creaciones imaginarias de la criminología mediática. Pues en los capítulos anteriores evidenciamos claramente que este tipo de violencia existe y desde hace cientos de años; aunque su visibilización es reciente.

¹⁸⁹ Ibid., 369.

¹⁹⁰ Ian R Taylor, Paul Walton, y Jock Young, *La nueva criminología: contribución a una teoría social de la conducta desviada* (Buenos Aires: Amorrortu, 2007).

¹⁹¹ Ibid.



Tampoco debemos referir que los medios de comunicación no aportan frente a la lucha contra la violencia de género, pues consideramos que han jugado un papel fundamental en la visibilización de los mismos; aunque sus fines no sean la reivindicación de los derechos de las víctimas de este tipo de violencia, lo cual no importa si a través de ellos posibilitan alcanzan los resultados propuestos por los movimientos en defensa de los derechos de las mujeres.

Pero, entonces ¿Cuál es el problema con los medios de comunicación y su criminología mediática?

Consideramos que el problema es que permite crear estereotipos de sujetos peligrosos; pues no es el acto de la persona sino el estereotipo que exista sobre el mismo, lo que dependerá en su persecución. Dando lugar a un derecho penal de autor, en donde no interesa el acto violatorio de la ley sino quien la realiza, pues de aquello dependerá el rating del medio.

Respecto de casos de muertes violentas con características de ser femicidio, existe cobertura de los medios, pero no por su gravedad sino por intenciones morbosas que a la postre inciden en el rating. No es casualidad que se ha venido denunciando constantemente este tipo de violencias, convirtiéndose los medios de comunicación en los grandes defensores por la igualdad de género, pero ¿realmente le interesa esta “nueva” forma de violencia? Consideramos que no, por varias razones.

En primer lugar porque la violencia ha existido desde hace mucho tiempo atrás, en donde los medios no ejercieron oposición ni denunciaron dicha violencia sino más bien fueron cómplices de la misma, pero como en los años sesenta sobre todo a consecuencia de los movimientos feminista, los medios vieron su nuevo campo de acción y lucro, se convirtieron en “defensores” de las mujeres, ni siquiera de la igualdad de género. Consideramos que no les interesa en realidad la desigualdad de género, sino que mediante su discurso ha permitido aumentar el colectivo de los “ellos”.

El problema se agrava en los casos de muertes violentas, sin que medie investigación alguna ya lo catalogan como feminicidio, pudiendo serlo o no.



Posición que lo transmite al colectivo social, lo que termina afectando la imparcialidad y objetividad con la que se debe llevar un proceso investigativo.

Igual sucede con los jueces, pues estos en un caso concreto a la hora de sentenciar una muerte violenta; deberán analizarlo doctrinaria y jurídicamente para determinar si le catalogan como femicidio, o van en contra de una posición que ha venido defendiendo los medios de comunicación, bajo el riesgo de un rechazo social e inclusive de perder su cargo. Un ejemplo claro de aquello es la amplia cobertura que los medios de comunicación dieron al caso de la muerte de Edith Bermeo (caso Sharon), independientemente de si fue o no femicidio; la criminología mediática desde el momento mismo ya lo sentenció como tal. Solo una investigación imparcial, oportuna y objetiva permite llegar a la verdad de los hechos y su consecuente sanción, la misma que muchas veces es influenciada por los medios de comunicación y la termina corrompiendo sus principios fundamentales que están llamados a observar.

Otro de los efectos perversos de esta criminología es el trato que se le da a la víctima, pues éstas también son utilizadas por su funcionalidad a la publicidad.¹⁹² No importa el daño o el sufrimiento que tengan la víctima, sino lo que aporten a la captación del rating. Se da una verdadera confiscación de la víctima, pues así como la sentencia no atiende el interés del afectado sino del Estado, los medios tampoco les interesa el bienestar de la víctima sino el beneficio que puedan obtener de aquella. Esto va de la mano con el panpenalismo el cual es parte del abanico político, pues privilegia su aspecto de espectáculo hasta quedar reducido a eso.¹⁹³ No importa la violencia de género que ha sufrido la víctima, sino el beneficio que se pueda obtener de aquello; dando paso inclusive a su revictimización.

Otro de los problemas que acarrea la criminología mediática es su hipocresía frente a la problemática social, pues discursivamente se dice que defiende el interés de la sociedad y constituye la voz del que no tiene voz, empero,

¹⁹² Zaffaroni, *La palabra de los muertos*, 377.

¹⁹³ Eugenio Raúl Zaffaroni, "El discurso feminista y el poder punitivo", en Haydée Birgin (comp.), *El género en el Derecho penal: las trampas del poder punitivo*, (Buenos Aires: Editorial Biblós, 2000), 31



ello dista mucho de la realidad. Lo que reflejan los medios es lo que a éstos les interesa, para evidenciar una realidad que ellos quieren mostrar; para alcanzar aquello no necesariamente necesitan mentir sino callar u omitir aquella versión que no va acorde a su intencionalidad.

Independientemente de la sanción que debe ser impuesta a un feminicida, los medios de comunicación le otorgan la categoría de “ellos”, y por lo tanto son enemigos de la sociedad que deben ser sancionados con la mayor dureza y en donde sus derechos poco o nada importan, pues lo importante es reivindicar los derechos de las mujeres a costa de la inobservancia de los derechos de los demás.

En definitiva podemos decir que este tipo de criminología ejercida por los medios de comunicación, no estudia el crimen, ni los delincuentes ni mucho menos cuales son las causas estructurales que terminarán influyendo en el cometimiento de un hecho delictivo. Su único efectivo es estereotipar un determinado grupo, crear un sentimiento de riesgo y una vez alcanzado, lograr captar la mayoría de televidentes pues estos a través del rating permiten subsistir y más que ello obtener millonarias ganancias a costa del sufrimiento de las víctimas y de los inocentes.

La gran influencia de los medios de comunicación en lugar de aportar frente a la lucha por la erradicación de la violencia de género, puede prestarse para construir sociedades menos democráticas, estigmatizadas y estereotipadas, en donde el más afectado será el débil, entendido dicha calidad desde un punto de vista político, económico y social.

Los medios de comunicación mantienen estereotipos sociales que fundamentan la violencia de género y que por lo tanto requieren de un nuevo enfoque; y que una vez alcanzado aquello, pueden llegar a constituirse en agentes socializadores que pueden ayudar a deconstruir aquellas mentalidades estereotipadas que influyen directamente en la violencia de género.



3.3. Estadísticas nacionales respecto del tema de violencia de género y femicidio. Análisis

Hasta la presente fecha a excepción de un informe presentado por la Fiscalía General del Estado, en nuestro país no existe un levantamiento de información completo que permita realizar un análisis penológico sobre el femicidio como tipo penal, lo cual es entendible aunque no justificable si se tienen en cuenta que han transcurrido dos años desde la vigencia del COIP; es necesario destacar que no significa que anteriormente no hayan existido muertes violentas por razones de género, el problema es que no existe registro de aquello.

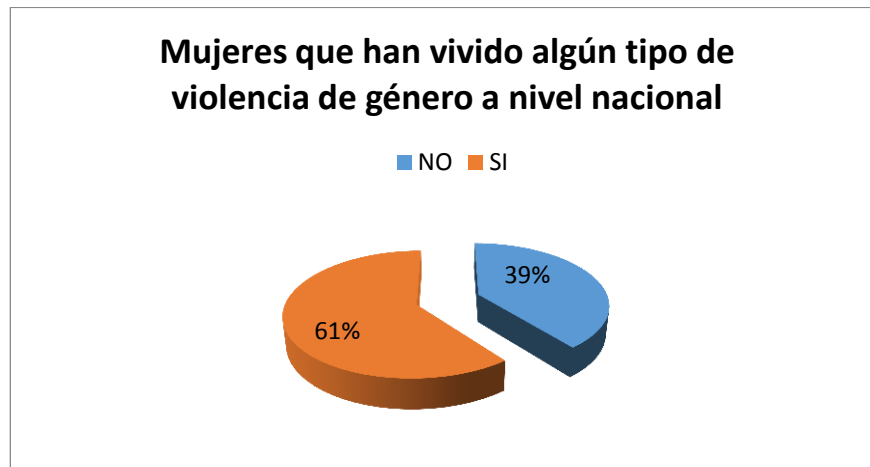
Si bien no hay información estadística suficiente respecto del femicidio como tipo penal, si hay investigaciones que han analizado la violencia intrafamiliar y que consideramos importante referirnos por cuanto la mayoría de las víctimas han sufrido previamente este tipo de violencia.

En el año 2004 en nuestro país se realizó la Encuesta Demográfica y de Salud Materna e infantil (en adelante ENDEMAIN) promovida por el Centro de Estudios de Población y Desarrollo Social (CEPAR), la misma que entre otros tuvo como objetivo analizar los roles de género y la violencia intrafamiliar. Entre sus resultados se obtuvo que el 41% de las mujeres alguna vez casadas o unidas entre 15 y 49 años reportaron haber recibido maltratos verbales o psicológicos; el 31% violencia física y el 12 % violencia sexual por parte de su pareja o ex pareja.¹⁹⁴

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (en adelante INEC) a su vez en el año 2011 realizó la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las mujeres, el cual evidenció que 6 de cada 10 mujeres a nivel nacional han sufrido algún tipo de violencia, en el 48,7% la violencia fue provocada por la pareja o expareja.¹⁹⁵

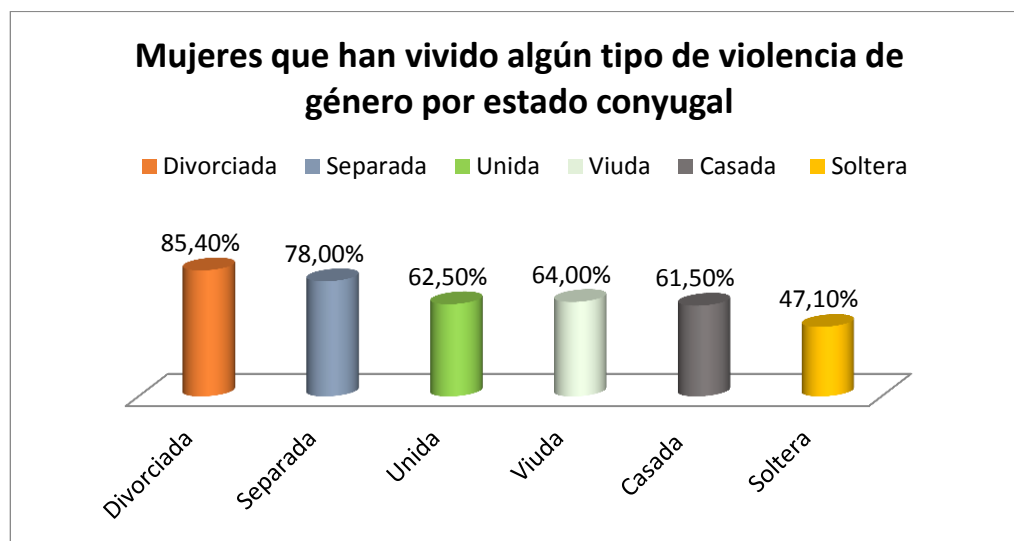
¹⁹⁴ CEPAR. ENDEMAIN-2004. Ecuador: Encuesta demográfica y de salud materna e infantil. Informe general. Quito: CEPAR, CDC, MEASURE EVALUATION, USAID, 2005.

¹⁹⁵ Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, "Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres", 2011. <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/violencia-de-genero/>. Consulta: 10 de Mayo de 2016.



Fuente: INEC (2011) (Diseño Propio)

Las mujeres divorciadas son las que en mayormente han sido violentadas, pues 9 de cada 10 han vivido algún tipo de violencia.



Fuente: INEC (2011) (Diseño propio)

Es evidente que la violencia de género mantiene índices alarmantes en nuestro país, cabe entonces analizar respecto de una de las manifestaciones más violentas de violencia de género, el femicidio.

Se debe tener en cuenta que el levantamiento de información estadística respecto del femicidio puede realizarse a partir de agosto del 2014, fecha en la que entró en vigencia el COIP. Hasta entonces lo que existían eran registros sobre muertes violentas que se han suscitado y que han sido procesadas como



asesinato; muchos de ellos seguramente reúnen las características del tipo penal femicidio y que no puede ser analizado como tales por cuanto no existía hasta entonces esta nueva categoría.

Emma Ortega junto con otras investigadoras en el año 2008, impulsado por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) realizó un monitoreo sobre la situación del Femicidio/Feminicidio en nuestro país, el cual refleja los procesos iniciados por delitos en contra de las personas durante el periodo 2004-2006; información que lamentablemente no tiene disgregación por sexo.¹⁹⁶

MINISTERIO PUBLICO: RESUMEN DE CASOS ATENDIDOS
AÑOS 2004-2005-2006)

DENOMINACIÓN	Año	DENUNCIAS	INDAGACION PREVIA	DICTAMEN		AUD. TRIBUN	
				AB S	ACU	ABS.	ACUS.
DELITOS CONTRA LAS PERSONAS	2004	18439	15486	461	1188	41	30
	2005	20620	14811	506	1304	37	198
	2006	21290	15644	422	1332	40	322
	TOTAL	60349	45941	1389	3824	118	822
DELITOS SEXUALES	2004	7744	6043	221	565	24	135
	2005	8144	6875	312	777	45	131
	2006	8945	7667	309	976	41	228
	TOTAL	24833	20585	842	2318	110	494

Fuente: Ministerio Público del Ecuador.
Elaboración: Equipo de Investigación

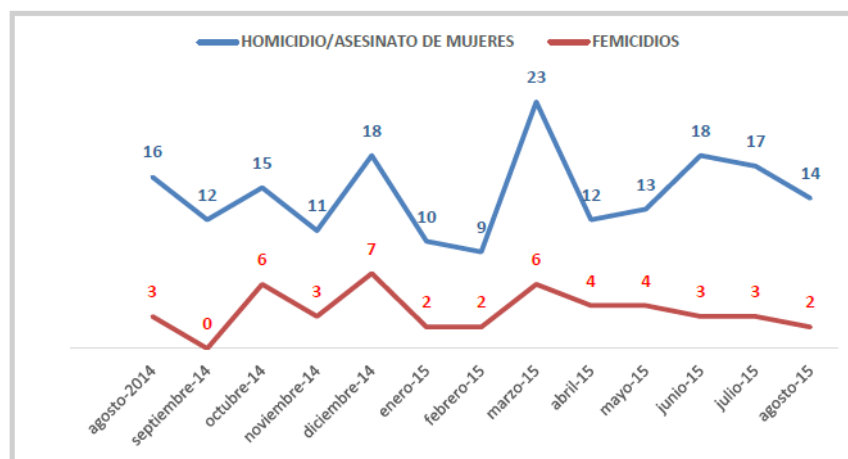
La Fiscalía es la institución encargada de investigar y de perseguir la sanción penal, siendo por lo tanto menester analizar los resultados presentados por esta institución. En el mes de abril de 2016 se publicó una edición digital sobre un análisis penológico sobre el femicidio, con el fin de monitorear el comportamiento de la noticia del delito y el estado procesal de los casos

¹⁹⁶ CLADEM, *Monitoreo sobre Femicidio/Feminicidio en Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú y República Dominicana*, (Lima: s.e, 2008), 109. <http://www.cladem.org/>. Consulta: 28 de Julio de 2016.

investigados por el tipo penal de femicidio. Información que fue recopilada desde agosto de 2014 hasta agosto de 2015 con corte en febrero de 2016.¹⁹⁷

En este periodo existieron 58 noticias del delito por femicidio, de los cuales 13 casos se continúan el proceso como delitos contra la vida por cuanto fueron reformulados, quedando finalmente 45 casos. Los mismos que son considerablemente inferiores a los delitos contra la vida sean asesinatos u homicidios.

Comparación entre homicidios de mujeres y femicidios en el Ecuador



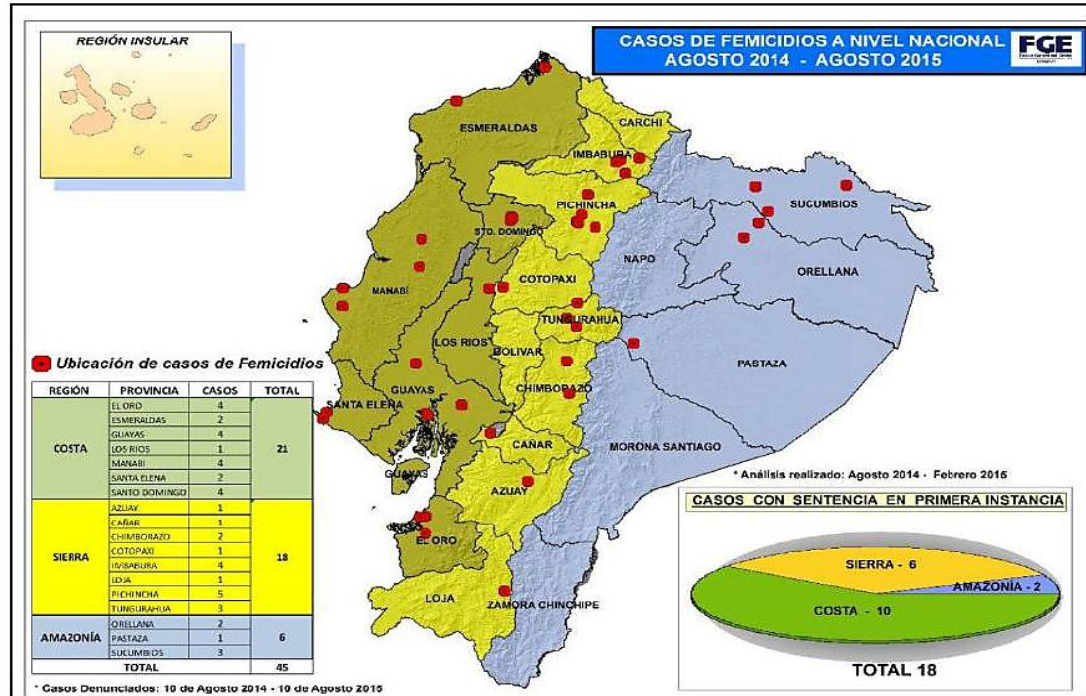
Fuente: Informe Penológico de la Fiscalía General del Estado

Es necesario tener en cuenta que en este periodo porcentualmente los casos de femicidio son menores, aunque en la práctica muchos que seguramente fueron femicidios no fueron investigados como tales, circunstancia que según nuestra opinión entre otras razones se produjo por la falta de información sobre este nuevo tipo penal, falta de preparación de los y las Fiscales sobre temas de género y sobre todo por la mayor complejidad a la hora de probar el asesinato por razones de género.

Respecto al comportamiento geográfico del femicidio en el Ecuador, refleja que la mayoría de casos con sentencia fueron cometidos en la región Costa con 10 casos, le sigue la Sierra con 6 casos y la Amazonía con dos casos de femicidio:

¹⁹⁷ Dirección Nacional de Política Crimin-Fiscalía General del Estado, *Femicidio Análisis Penológico 2014-2015*, (Quito: Edición Digital, 2016).

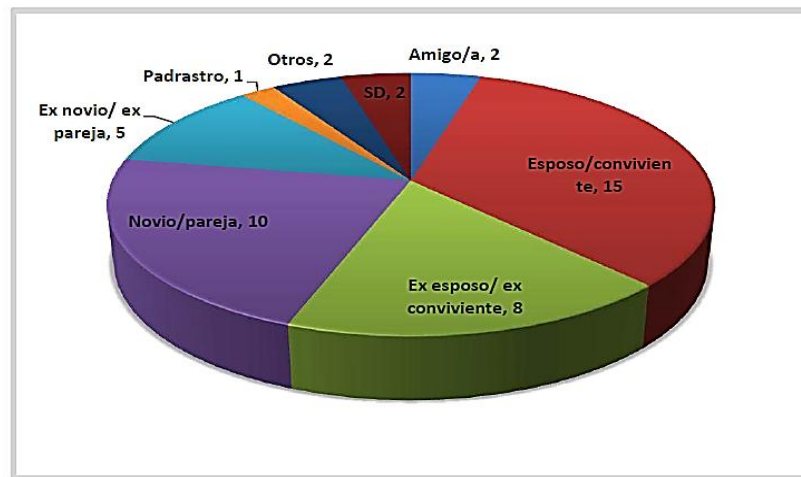
Comportamiento geográfico del femicidio en el Ecuador



Fuente: Informe Penológico de la Fiscalía General del Estado

En cuanto a la relación que existe entre el victimario y la víctima, la mayoría ha sido cometidos por su esposo (15), en segundo lugar están aquellos cometidos en una relación de noviazgo (10), le sigue aquellos cometidos por su ex pareja y otros conforme lo refleja la siguiente tabla del informe penológico antes referido:

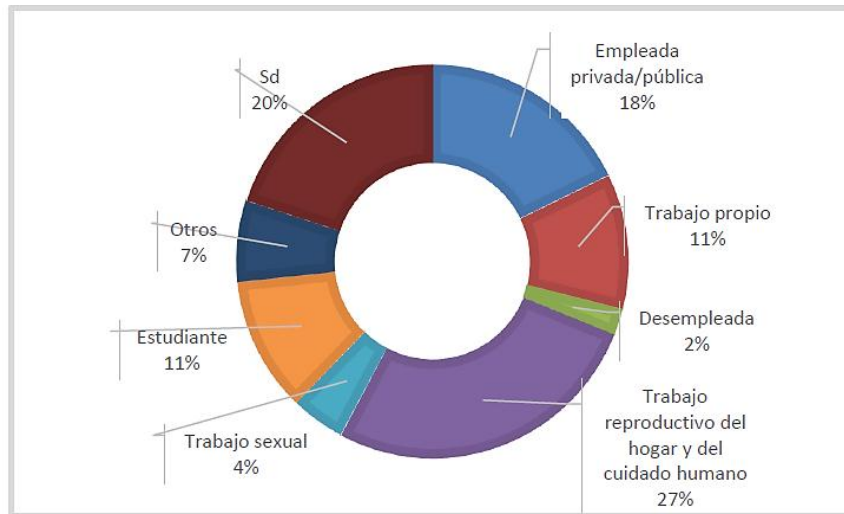
Relación entre victimario y la víctima de femicidio en el Ecuador
Agosto 2014 – Agosto 2015



Fuente: Informe Penológico de la Fiscalía General del Estado

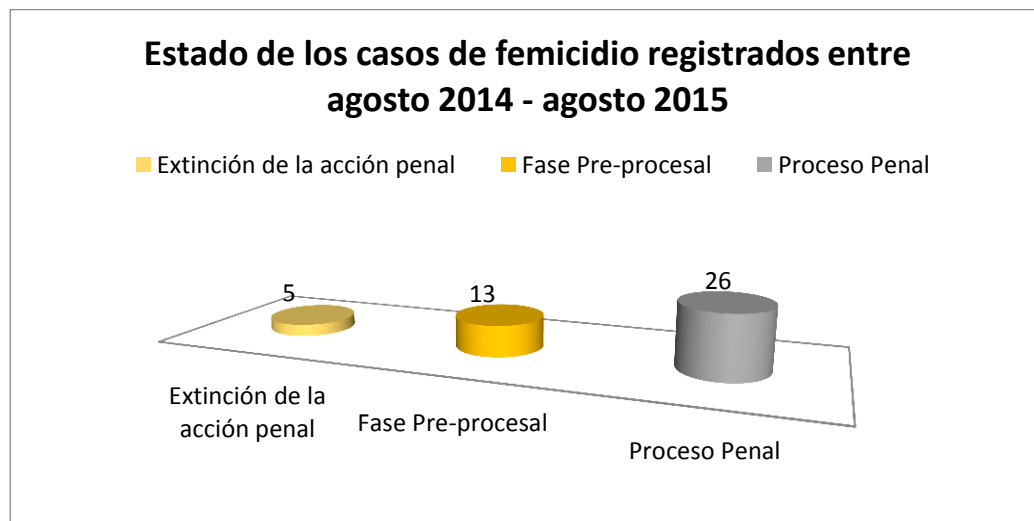
Es evidente que la mayoría de los femicidio se producen en aquellos espacios en donde existen relaciones de poder. Circunstancia que está vinculada con la actividad que desempeña la persona víctima de femicidio; pues en la mayoría de los casos (27%), la mujer desempeñaba el rol reproductivo y de cuidado humano, siendo esta una de las razones por las que permiten mantenerse aquellas relaciones de poder.

Víctima de femicidio en el Ecuador según ocupación Agosto de 2014 - Agosto 2015



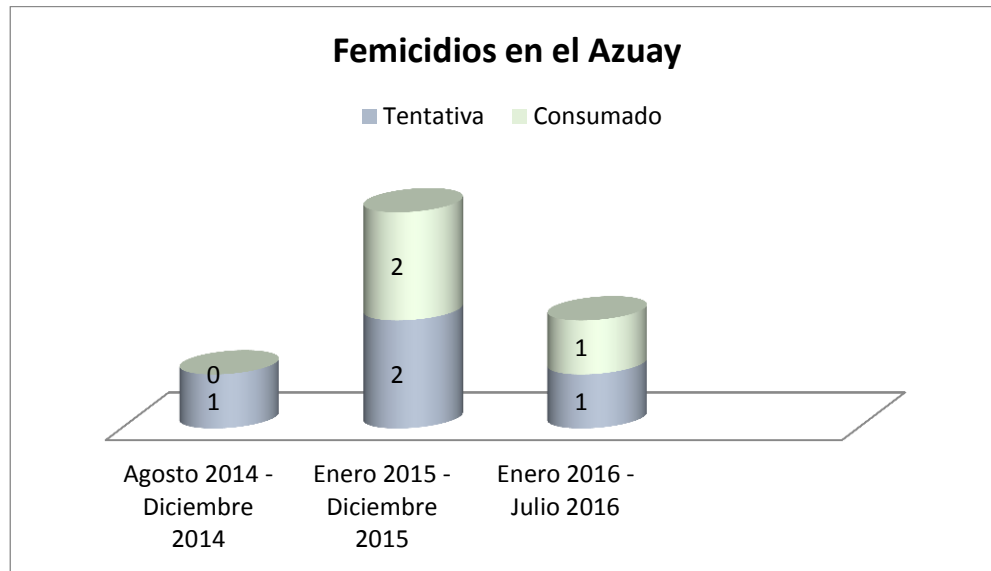
Fuente: Informe Penológico de la Fiscalía General del Estado

Referente al estado de los procesos, el informe penológico de la Fiscalía refleja que la mayoría de casos se encuentran dentro de un proceso penal, teniendo como fecha de corte febrero de 2016:



Fuente: Informe Penológico de la Fiscalía General del Estado
(Elaboración propia)

A su vez en la provincia del Azuay, durante el periodo agosto 2014 hasta el 22 de Julio de 2016 han existido 7 casos denunciados, 4 por tentativa y 3 consumados, conforme lo refiere la información proporcionada por dicha institución (Ver anexo N° 2):



Fuente: Fiscalía Provincial del Azuay (Elaboración propia)

El diseño de políticas enfocadas en la violencia de género en sus diversas manifestaciones, van de la mano de la generación de información estadística. En virtud de ello, mejorar la información estadística debe ser un de las estrategias para combatir la violencia de género; pues esto permite evidenciar la magnitud del problema y así también posibilita diseñar políticas públicas que permitan enfrentar el problema de forma estructural.

Si bien es cierto que el levantamiento de información estadística realizado por la Fiscalía General del Estado, es el más actualizado que sobre el femicidio existe hasta la actualidad y que nos ha permitido evidenciar este fenómeno social se mantiene; sin embargo, consideramos que dicha tarea debe ser realizada de forma más completa por el INEC, al ser el órgano rector de la estadística nacional y el encargado de generar las estadísticas oficiales del Ecuador.



La participación de esta Institución nos permitirá entender de mejor manera este fenómeno, no solo por la mayor información que pudiera llegar a recopilar, sino porque también permitiría reducir márgenes de error. No queremos con ello decir que los datos de la Fiscalía sean falsos, sin embargo, los mismos deberán reflejar sus objetivos alcanzados lo cual podría limitar la objetividad con la que debe ser tratada este tipo de información, siendo esta una de las razones por las que dicha tarea debe ser encomendada a una institución diferente.

Es importante así también rescatar la tarea que los y las investigadoras han realizado sobre este fenómeno social, siendo por lo tanto necesario que se fomente la investigación sobre el femicidio como una de las estrategias que el gobierno debe asumir en su lucha contra la erradicación de la violencia de género.

Los datos estadísticos antes referidos dan muestra de los niveles elevados de muertes violentas que en nuestro país aún se mantiene, la mayoría identificados como asesinatos u homicidios; así también evidencia que existen muchos factores como la condición social económica y la relación que existe entre la víctima y el victimario, que inciden en el cometimiento de femicidio y que deben ser analizados a la hora de enfrentar este fenómeno. Se evidencia que el número de muertes se han mantenido, ya sea investigados como asesinatos o como femicidios.

En fecha 08 de marzo de 2016 se conmemoró el día Internacional de la Mujer, fecha en la cual se realizaron múltiples eventos y se presentaron informaciones estadísticas que evidencian el aumento del fenómeno de violencia de género. La coordinadora nacional del Programa Regional de Combate a la Violencia contra la Mujer, Liliana Maldonado daba cuenta de que la situación de las mujeres no ha variado en lo sustancial, por su parte Virginia Gómez de Coalición de Mujeres afirma que es un día trágico para las mujeres porque aún en el Ecuador no se han reivindicado los derechos de las mujeres en todas sus formas. (Ver anexo N° 3)

Es evidente que los índices de violencia de género no han disminuido, lo cual nos lleva a la necesidad de repensar en las estrategias que por parte del



Estado han venido adoptando frente a la lucha por la erradicación de este tipo de violencia. El objetivo debería ser la deconstrucción del sistema patriarcal, androcéntrico para lo cual es necesario una intervención integral desde múltiples ámbitos como el laboral, educativo, judicial; los cuales a través de un trabajo coordinado permitirán alcanzar una verdadera reivindicación de los derechos de las mujeres.

3.4 Análisis de un proceso judicial vinculado con el tema de Femicidio

3.4.1. Individualización del proceso

El proceso que se pretende analizar es el único que hasta la presente fecha ha sido tramitado por femicidio (en grado de tentativa) en la provincia del Azuay y que ha llegado a sentencia (absolutoria), signada con los siguientes datos.

- Numero de proceso: 01283-2015-0351
- Tribunal de Garantías Penales del Azuay: Dr. Pablo Leoncio Galarza Castro, Miriam Pulgarín Muevecela y Cayo Cabrera Vélez.
- Víctima: Carina Alejandra Fiallo Jurado
- Victimario: José Luis Valdez Nazareno

3.4.2. Narración de los hechos

Conforme la exposición de los alegatos iniciales por parte de la Representante de Fiscalía se menciona:

En fecha 22 de enero de 2015, a las 11h40 aproximadamente en las calles Gaspar Sangurima y Mariano Cueva de ésta ciudad de Cuenca, la víctima de nombre Carina Fiallo se encontraba con una amiga, en ese momento se acercó su conviviente (el procesado), con el que mantenía una relación desde el 27 de Diciembre de 2014, entonces éste procede a agredirla con un cuchillo que tenía en su mano, la ataca, sin embargo, personal policial impide que el procesado llegue a consumar el acto, el procesado entregó el cuchillo; sin embargo se realizaron actos conducentes e idóneos para privar de la vida a la víctima.



3.4.3 Pruebas evacuadas

Por parte de la Fiscalía se presentó:

- Parte Policial de detención de fecha 22 de enero de 2015
- Informe de reconocimiento de lugar de los hechos y evidencias
- El cuchillo con el que se pretendió agredir a la víctima
- Testimonio de los policías que participaron en la detención

El victimario representado por la Defensoría Pública no presentó prueba documental ni testimonial.

La crítica que se puede realizar es que a nuestro criterio existe una violación al debido proceso por cuanto no se garantiza uno de los principios fundamentales en el juzgamiento de la infracción, el principio de igualdad.

La igualdad de armas es un principio consagrado en la CRE y que en el presente caso no ha sido observado, por cuanto mientras que la representante de Fiscalía presenta pruebas que pretender demostrar la culpabilidad del procesado; la Defensoría Pública no evacúa prueba alguna, violentando su derecho a la defensa y colocándole en una evidente posición de desventaja, teniendo en cuenta que todos tienen derecho a una defensa formal y material.

3.4.4 Alegatos

En sus alegatos finales la Fiscalía manifestó:

El procesado atacó en forma alevosa a la ofendida, sucedió en fecha 22 de enero del 2015, se evidenció que el acusado es autor del delito de femicidio en grado tentado, lo hizo con un objeto que es idóneo para causar daño físico; se dio una pronta asistencia de los policías Guachamín y Pesantez que observaron la agresión, el procesado se abalanzaba a la ofendida, los policías verbalizaron (sic) con él y lo neutralizaron; se ha probado el nexo causal con los testimonios de los agentes; la infracción fue probada, *el procesado atacó a una mujer con quien compartía su vida diaria, una mujer en situación de doble vulnerabilidad, la persiguió con un cuchillo, el daño fue impedido por terceros, realizó un acto*



idóneo; se ha probado la materialidad del delito y la responsabilidad del acusado.
(El destacado me pertenece)

Por su parte la Representante de la Defensoría Pública, en sus alegatos finales menciona:

Manifiesta la abogada defensora que no se ha probado que su defendido haya cometido ilícito alguno; [...] el policía Guachamín dijo que no observó lesiones, no observó sangre, no observó agresión; no existió principio de ejecución; además *no se han probado las relaciones de poder entre el procesado con la víctima; no existe prueba psicológica que pruebe las relaciones de poder, no hay prueba que demuestre razones de género para intentar lesionar o matar a la ofendida, no existe móvil para dar muerte por la condición de mujer.* Dice la defensora que en la tentativa debe existir principio de ejecución y se pregunta cuál es el acto unívoco cometido con el fin de dar la muerte por la condición de mujer; dice que no existió un acto idóneo que demuestre el intento de dar muerte. (El destacado me pertenece)

En el tema anterior referíamos que una de las razones por las cuales muchos procesos que por su contexto se adecuan al tipo penal femicidio, terminan investigándose por el delito de asesinato en virtud de que su prueba es menos compleja. Esta complejidad de la prueba y su dificultad para obtenerla se evidencia en el presente caso pues podemos advertir que la situación de vulnerabilidad se pretende justificar con el hecho de vivir juntos; lo cual consideramos que es no es adecuado ni suficiente, por cuanto la situación de vulnerabilidad puede inclusive manifestarse en aquellas relaciones en las que no conviven juntos y por el contrario puede haber convivencia sin que necesariamente exista una situación de vulnerabilidad, ya que aquello depende de múltiples factores que deben ser analizados si se quiere evidenciar la situación de vulnerabilidad.

Siendo esto así, la demostración de que un delito es cometido por razones de género requiere de informes periciales que respalde aquello, los cuales deben



ser realizados por profesionales que evidentemente deberán tener conocimientos de género; circunstancia que no sucede en el presente caso.

3.4.5 Razonamiento del tribunal

El Tercer Tribunal de Garantías Penales del Azuay declara inocente al señor José Luis Valdez, posición que la fundamentan en varios puntos:

En primer lugar, se dice que el Testimonio de uno de los Policías que intervino en dicho suceso “de ninguna manera demuestra que entre sujeto activo y pasivo de la supuesta infracción hayan existido las circunstancias exigidas en el tipo penal acusado”, es decir que no se demostró “aquellas relaciones de poder manifestadas en violencia que ocasionen la muerte POR EL SOLO HECHO DE SER MUJER O POR SU CONDICION DE GÉNERO”.

Es claro que un parte policial no podrá por si solo demostrar relaciones de poder, se limitará a narrar aquellos hechos que acaecieron el día del incidente; que la mayoría de veces son referidos por terceras personas. En el presente caso, estos dos policías si presenciaron los hechos; sin embargo, la sola narración de lo sucedido jamás podrá justificar un hecho respecto del tipo penal de femicidio y sus características particulares por cuanto (conforme referimos anteriormente) su prueba es más compleja y que de hacerlo terminaría violentando el principio de suficiencia probatoria

El tribunal que conoce el presente caso realiza un razonamiento muy importante que vale la pena destacar:

[...] no se puede considerar como un acto de femicidio o tentativa del mismo cualquier acto aislado que produzca la muerte de la mujer, sino que para que se configure dicho tipo penal debió existir necesariamente una relación sistemática, periódica de abuso de poder por parte del sujeto activo o de expresión de superioridad o discriminación por razón de género [...]

Es importante dejar de pensar que todo caso de muerte violenta cuya víctima es una mujer, es femicidio. Para otorgarle dicha categoría debe reunir



ciertas características que la doctrina y la legislación de forma clara lo ha establecido. Pues muchas veces esta acelerada consideración, puede terminar afectando la investigación tendiente al esclarecimiento de los hechos y la búsqueda del culpable.

El tribunal considera que los hechos no reúnen las características necesarias para calificarle como femicidio en grado de tentativa, así como tampoco se puede atribuir un delito contra la vida. Posición que la fundamentan por el hecho de que es necesario demostrar que los actos se dirigían a la obtención de un resultado (matar a la víctima), circunstancia que no sucedió, por cuanto “si bien podía haber sido su intención de asestar un golpe mortal, también pudo haber sido su intención herir o lesionar o no hacer nada”; en virtud de ello el tribunal considera que no se ha demostrado la materialidad de la infracción, pues la ejecución de la acción de matar no se ha demostrado fehacientemente. Posición que discrepo y que por obvias razones no se va a analizar en el presente trabajo.

Finalmente es necesario destacar que se declara la inocencia del señor José Luis Valdez Nazareno, sin embargo, esta decisión no fue adoptada de forma unánime por parte de los miembros del tribunal, por cuanto existió voto salvado del Doctor Cayo Esteban Cabrera, quien considera que si bien no se configuró la tentativa de femicidio, la conducta del señor Valdez se adecuó al tipo penal de intimidación y que por lo tanto debe ser sancionado por aquello sin que exista violación al principio de congruencia pues se está condenando por los mismos hechos.

La presente sentencia analizada nos ha permitido llegar a las siguientes conclusiones: En primer lugar, la necesidad de asegurar un debido proceso con estricto respeto a los derechos y garantías tanto de las víctimas, así como de los procesados. En segundo lugar, es necesario tener en cuenta que no todo delito contra la vida de la mujer es femicidio; sin embargo, cuando de las investigaciones realizadas se llegue a determinar que, si se configura este tipo penal, es necesario



realizar cuanta diligencia sea necesaria todo en aras de justificar con suficiencia probatoria los elementos imprescindibles del tipo penal femicidio.

Por último, consideramos fundamental la preparación sobre temas de género que deben tener jueces, fiscales, defensores públicos y cualquier persona que vaya a intervenir en la discusión de los derechos de las víctimas y de los procesados. A nuestro criterio, en base a los hechos narrados por el procesado (no consta en la sentencia) y fundamentalmente en base a las pruebas evacuadas,¹⁹⁸ pese a que los hechos se adecuaban a este tipo penal, empero, no fue correctamente probado, esto en virtud de que no se justificó aquellas relaciones de poder imprescindibles en este tipo de delitos y que obviamente no pueden presumírselas por el hecho de que la víctima es mujer. Los señores jueces deben tener absoluto convencimiento sobre su culpabilidad para que lo declaren como tal, pues si existe dubitación, aunque sea mínima, por el principio de duda en favor del reo no puede ser condenado.

3.5. Opiniones de catedráticos sobre la tipificación del femicidio

3.5.1. Dr. Christian Masapanta Gallegos¹⁹⁹

Cualquier tipificación extensiva que se haga, es vulneratoria de garantías jurisdiccionales, considero que el exceso de tipos penales comete un grave error. ¿Cuál es el error? Precisamente irnos por una corriente extremadamente punitivista, en virtud de aquello existe una sobre tipificación de conductas. De cierta manera, si ya tenemos un delito tipificado como es la privación de la vida, el hecho de ser mujer, no puede ser una agravante para el cometimiento de una infracción; porque bajo esa misma circunstancia tendríamos que crear categorías sospechosas para determinados sujetos. Por ejemplo, grupos minoritarios, en el tema étnico racial, en el tema religioso, político; bajo esa lógica estamos generando elementos diferenciadores que dentro del contexto constitucional se denominan categorías sospechosas. Estamos diciendo que, por el hecho de

¹⁹⁸ Esto en virtud de que se tuvo la oportunidad de estar presente en la audiencia de juicio.

¹⁹⁹ Phd en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar, entrevista realizada en fecha 27 de noviembre de 2015.



haberse cometido un delito por el hecho de ser mujer, ya se está de cierta manera generando una conducta gravosa entre la comisión de ese hecho delictivo. Cuando tenemos además tipos penales abiertos como en este contexto el femicidio, lejos de garantizar un derecho, se está más bien vulnerando el principio de seguridad jurídica, ¿Por qué? Porque caemos en ámbitos de discrecionalidad, [...] no tenemos elementos claros que nos permitan diferenciar, se va a decir que existe una actitud dolosa con el ánimo precisamente de generar un daño a las mujeres; bajo ese escenario el mismo acto típico lo comete una persona cuando por ejemplo con agravante, [...] comete la privación de la vida a una persona de sexo masculino, bajo esa circunstancia generaríamos una categoría sospechosa que no es proporcional dentro de nuestra realidad jurídica.

Definitivamente no soy partidario de una sobre tipificación de conductas [...] ¿Cómo se puede determinar si es constitucional? Mediante un test de proporcionalidad, primero ¿Cuál es el fin constitucionalmente válido que trata de garantizar el femicidio? En este caso específico trata de garantizar la vida de las mujeres, en este caso no es un tipo penal idóneo a nuestra realidad jurídica. Se dice que el Estado es un estado patriarcal, que a través de la historia ha ido construyendo y deconstruyendo este modelo de Estado en donde el hombre juega un rol protagónico, pero el resultado termina siendo el mismo. ¿en el homicidio y el asesinato se está garantizando la vida de las mujeres? Si. Por lo tanto ¿a través del femicidio que se busca garantizar? La vida de las mujeres; por lo tanto, es una medida no idónea para la consecución de un mismo fin constitucional. [...] finalmente la sobre tipificación nunca va a ser proporcional [...]

3.5.2. Dr. Álvaro Román²⁰⁰

Estoy de acuerdo con la tipificación del femicidio, lo que habría que ver es si fracaso o no fracasó la política de control a la violencia intrafamiliar y contra la mujer, entonces; si ves a partir del año 1997 que se crean las comisarías, consejo de mujeres, habría que ver si las cifras disminuyeron o aumentaron. Yo pensaría

²⁰⁰ Docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, entrevista realizada en fecha 12 de diciembre de 2015



que no disminuyeron, por eso es que se pasó de la simple contravención al delito como tal; ahora yo creo que dejarlo como asesinato (el femicidio) podría haber sido una solución, pero considero que ahí hay un problema, que le sujeto pasivo se amplió; porque si se ve en la redacción del tipo penal, no solamente es la mujer [...] la víctima se amplía, ya no es la mujer física sino la mujer desde el punto de vista de la construcción. Es quien se identifica como mujer, entonces puede ser un gay, un transexual. Yo pienso que eso es un logro [...]

3.5.3 Dr. Jorge Vicente Paladines²⁰¹

Hay muchas críticas que se hace desde la doctrina jurídica penal, al menos a saber si se cumplen los presupuestos típicos, antijurídicos y culpables, en la definición del tipo penal de femicidio. En otras palabras, yo he leído algunas críticas de quienes hacen dogmática penal sobre la construcción de algunos elementos tanto objetivos como subjetivos de ese tipo penal, y que complejizan aún más las relaciones hombres con mujeres. Desde la criminología crítica hay varios bandos, el un bando es amigo de ese tipo de definiciones, Elena Lallauri es amiga de ese tipo de definiciones en España, pero hay otro bando que pone en cuestión al menos porque, lo que hacen ese tipo de delitos descritos en los códigos penales, no es generar un camino para superar la diferencia entre hombres y mujeres, sino para confirmar la debilidad. Y claro la discusión no es si la vida de una mujer o un hombre vale más, sino si detrás de ese tipo de normas hay una presencia aguda de corporativismos, de derecho penal de autor, de visiones que quieren ocultar la igualdad de armas en el debido proceso, y además, porque es la consecuencia de lo que se tipifica en muchos países. ¿Hasta qué punto es una agenda del Ecuador eso? porque, que mágico que es también es en Guatemala, en Costa Rica, ¿quiénes están detrás de todo eso?, ¿quienes impulsan esto? ¿qué tipo de organización internacional mete mano para coadyuvar este tipo de debates? En el caso del femicidio me parece que no solamente la construcción típica del delito tiene problemas jurídico dogmáticos, sino también su entendimiento crítico criminológico, ojo no lo podemos ver desde

²⁰¹ Asesor de la Defensoría Pública, entrevista realizada en fecha 19 de febrero de 2016.



una visión tan corporativa, defensionista, en el fondo la agudización de la cultura del castigo, no, tenemos también que ver esa relación de que posiblemente detrás de tipos penales, lo que buscamos no solamente en la práctica es un enjuiciamiento moral a los hombres, y me parece que ahí definitivamente perdimos el camino.

3.5.4. Dra. María Paula Romo²⁰²

Yo no creo que sea un triunfo, yo creo que es un premio consuelo frente a todas las demandas que tenían las mujeres por el código penal, que no es solamente el aborto, la criminalización de la protesta, los problemas procesales, es decir todos los otros problemas también tienen que ver con las mujeres, entonces yo creo que el femicidio fue el premio consuelo para las mujeres. Hay grandes temas que se perdieron en el debate, por ejemplo, el aborto, pero en general un código penal punitivo es contrario a la agenda emancipadora del movimiento feminista, es una herramienta punitivista que se va contra los derechos, contra el debido proceso, que criminaliza la protesta, es contraria a la agenda emancipadora feminista. En ese contexto, yo creo que el femicidio ha sido como el gancho para decir aquí están sus demandas, en realidad, comprendo el peso simbólico que tiene y creo que su mejor función, su más importante resultado ha sido ponernos a debatir el tema de la violencia contra las mujeres, creo que a mediano plazo talvez nos va ayudar a tener algunas estadísticas. Me parece que a raíz que se tipifica el femicidio ¿vamos a tener menos mujeres muertas? creo que no, para eso se necesita algo mucho más integral en términos de transformación cultural, de prevención de violencia, de atención a mujeres en situación de violencia, que no se resuelve tipificando el femicidio.

²⁰² Activista en defensa de los derechos de las mujeres, política y docente en la Universidad Andina Simón Bolívar. Entrevista realizada en fecha 03 de septiembre de 2016.



CONCLUSIONES

Dentro del presente trabajo monográfico se ha realizado un análisis sobre la violencia de género y en especial se ha analizado el tipo penal de femicidio incorporado en el COIP en el año 2014, los objetivos propuestos y alcanzados, así como las críticas que existen respecto de su tipificación; para ello se ha utilizado como herramienta principal la categoría de género, que nos ha permitido llegar a las siguientes conclusiones:

PRIMERA: La violencia de género no es un fenómeno social nuevo, sino por el contrario se ha manifestado durante toda la historia de la humanidad a consecuencia del sistema de relaciones de poder que ha permitido mantener a las mujeres subordinadas y sujetas a constantes vejaciones de diferente clase, siendo una de ellas el asesinato por razones de género. Pese a aquello, nuestro país solamente a partir de los años 90 ha venido asumiendo su responsabilidad a través de la adopción de medidas relacionadas sobre todo con el ámbito punitivo, tendientes a contrarrestar este tipo de violencia, siendo un ejemplo de aquello la tipificación del femicidio en el COIP.

Consideramos que el femicidio es una consecuencia final de un continuum de violencia, y que, para llegar a la muerte de la pareja, necesaria y previamente va a tener que suscitarse una serie de acontecimientos o comportamientos violentos, los cuales se caracterizarán por ser físicos, psicológicos, sexuales y/o patrimoniales, todos fundamentados en la estructura social patriarcal. Si esto es así, consideramos que la forma de enfrentar el fenómeno social de la muerte de las mujeres por razones de género de forma estructural, es identificando el origen de esta construcción social no igualitaria y una vez identificado, adoptar medidas tendientes a erradicarlo, pues más importante es prevenir que sancionar cuando ya se cometió el hecho punible.

SEGUNDA: En la construcción de una sociedad androcéntrica patriarcal intervienen agentes socializadores que posibilitan mantener, invisibilizar y/o



naturalizar el sistema de discriminación en contra de las mujeres; siendo el primero y más importante agente socializador la familia, pues es en ésta en donde se transmiten los primeros estereotipos que posteriormente terminarán desencadenando comportamientos violentos. Una vez configurado la personalidad o identidad de género del menor en la familia, inmediatamente intervienen los agentes secundarios de socialización que continúan el trabajo de construir socialmente a una persona, asignado a cada persona los roles que deben ser observados.

TERCERA: La tipificación del femicidio ha permitido alcanzar resultados positivos frente a la lucha contra la violencia de género, siendo quizá el más importante el hecho de que ha posibilitado visibilizar una problemática social que ha existido mucho tiempo atrás en nuestro país, y que solo a partir de su tipificación se ha comenzado a debatir sobre este fenómeno social tanto en el ámbito político como académico; circunstancia que es fundamental al momento de adoptar estrategias integrales que permitan deconstruir el sistema estructural en el que se fundamenta el femicidio.

CUARTA: En muchos casos de muertes violentas que por sus antecedentes pueden adecuarse al tipo penal de femicidio, los fiscales prefieren investigar y perseguir la sanción penal por el tipo penal de asesinato; por cuanto es más fácil demostrar los elementos del tipo, debido sobre todo a la complejidad que existe de probar que la muerte fue provocada por razones de género. En ciertos casos pese a que por parte de fiscalía se pretender imputar por este tipo de delitos, los jueces inobservan ciertas categorías fundamentales que debe ser analizadas a consecuencia de los estereotipos que rodean a los mismos, teniendo en cuenta que la mayoría son hombres.

QUINTA: Consideramos que el derecho penal no puede solucionar el problema de violencia de género por cuanto no tiene la capacidad para deconstruir una estructural patriarcal, pues lo único que permite es defender la corporativización del ius puniendi y no a la víctima del sistema. Creemos que al



derecho penal y la pena en particular no le interesa la víctima sino sus propios intereses. Sin embargo, optar por una teoría abolicionista consideramos que tampoco es acertado, esto en virtud de que nuestra sociedad no está preparada para convivir en un Estado en donde no sea necesario sancionar. Debemos destruir aquel pensamiento de que a través de la cárcel se está dando protección integral a la víctima, por el contrario, consideramos que termina revictimizándole, así como también destruye toda posibilidad de rehabilitación del agresor y lo más importante es que aquellos factores socioculturales que originan este tipo de violencia son afirmados en lugar de ser deconstruidos.

SEXTA: La muerte de una persona por razones de género, evidentemente debe ser sancionada por ser vulneratorio de bienes jurídicos fundamentales como es la vida e integridad física de las mujeres, pero para sancionar se debe tener en cuenta los múltiples factores que influyen; y en donde la víctima debe ser la primera beneficiada. El derecho penal debe estar limitado tanto como sea posible, siendo el garantismo penal el principal instrumento de control.

La pena que se imponga como respuesta al femicidio debe caracterizarse por ser proporcional, apegada al debido proceso y al respeto de los derechos humanos. No se debe dar una respuesta de la misma calidad provocando igual o mayor daño, tampoco se debe propender a imponer una sanción drástica en aras de utilizarla como pena simbólica para provocar temor en los demás. No estamos en contra de las penas privativas de la libertad, pero sí de la forma como es llevada en los actuales tiempos, es menester dejar de pensar en la cárcel como primera y muchas veces como única opción como respuesta a la violencia de género.

SEPTIMA: Los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la violencia de género, pues a través de la criminología mediática permiten estereotipar un determinado grupo, crear un sentimiento de riesgo. Este tipo de criminología no estudia el crimen, ni los delincuentes, menos aún cuales son las causas estructurales que terminarán influyendo en el cometimiento de un hecho delictivo. La gran influencia de los medios de comunicación en lugar de aportar



frente a la lucha por la erradicación de la violencia de género, puede prestarse para construir sociedades menos democráticas, estigmatizadas y estereotipadas, en donde el más afectado será la víctima. Su fin último será captar la mayoría de público posible, pues estos a través del rating permiten subsistir y más que ello obtener millonarias ganancias a costa del sufrimiento de las víctimas y de los inocentes

OCTAVA: Las estrategias utilizadas para la lucha contra la violencia de género no están funcionando, las mismas autoridades reconocen que la situación de las mujeres no ha variado sustancialmente; las estadísticas corroboran aquello pues evidencian los niveles elevados de muertes violentas que en nuestro país aún se mantiene; el sistema patriarcal no ha podido ser deconstruido, por el contrario, se ha mantenido y peor aún se está reforzando. Esto nos lleva a la necesidad de repensar en las estrategias que por parte del Estado han venido adoptando frente a la lucha por la erradicación de este tipo de violencia. Es menester eliminar los factores que influyen en la prevalencia de la violencia de género, pues son las que terminan induciendo al femicidio.



RECOMENDACIONES

El derecho penal ha sido la herramienta fundamental utilizada frente a la violencia de género en sus diversas manifestaciones, se han creado nuevos tipos penales y endurecido las penas, empero, la situación de desigualdad, discriminación y violencia ejercida en contra de las mujeres no ha variado sustancialmente; es por ello que es necesario debatir sobre las estrategias utilizadas para reforzarlas y superar aquellas críticas que giran en torno a la misma; para lo cual nos permitimos hacer las siguientes recomendaciones:

PRIMERA: Eliminar la idea de que solamente a través de la sanción penal y la amenaza que aquello implica, se puede combatir un sistema que ha sobrevivido por más de un milenio y ha permitido mantener a la mujer en una situación de dominación. Para lo cual es necesario la participación y cooperación de cada una de las instituciones del Estado vinculadas con la protección de derechos, para que a través de una intervención integral pueda atacar la problemática de forma estructural, siendo fundamental incorporar el enfoque de género en cada una de sus decisiones conforme lo establece el artículo 70 de la CRE.

SEGUNDA: El fenómeno de muertes violentas por razones de género se suscita con la complicidad del Estado, por su aquiescencia tacita o expresa; en virtud de ello, y por cuanto existe de por medio la responsabilidad estatal, se debería modificar el término de femicidio con el que se encuentra regulado en el COIP, por el de feminicidio por las razones teórico-funcionales que se han expuesto en la presente monografía.

TERCERA: El sistema educativo es uno de los agentes socializadores secundarios fundamentales en la construcción y mantenimiento del sistema patriarcal, es por ello que a través del Ministerio de Educación se debe adoptar políticas tendientes a modificar el “currículum oculto”, siendo una herramienta fundamental la preparación de los docentes en temas vinculados con el género, así como también la incorporación de una materia obligatoria desde el nivel básico en temas vinculados con el estudio de género. Esta intervención en la política



estatal educacional no debería ser cuestión de voluntad política sino de respeto a la Constitución, la ley y a los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país.

CUARTA: La utilización del derecho penal frente a la violencia de género debe ir de la mano de un estricto respeto al debido proceso, a los derechos humanos; cuyo fin último sea aplicar una justicia restaurativa en donde interese en primer lugar la reivindicación de los derechos de la víctima; cuya guía fundamental debería ser el garantismo penal.

Por ello proponemos aplicar una justicia restaurativa antes que sancionatoria, garantizar una verdadera reparación integral que incluirá el conocimiento de la verdad de los hechos, la restitución, indemnización, rehabilitación y garantía de no repetición, en observancia a lo establecido en nuestra constitución y en los instrumentos internacionales.

QUINTA: Es importante la preparación de los fiscales, jueces, abogados en temas de género, para de esta forma evitar que se deje en impunidad muchos casos de muertes por razones de género que terminan investigándose y sancionándose a través de otro tipo penal, esto en virtud de la complejidad que implica probar los elementos del tipo penal femicidio. La Fiscalía General del Estado conjuntamente con el Consejo de la Judicatura, deben desarrollar cursos que permitan la preparación de sus funcionarios en temas de género.

SEXTA: La Superintendencia de la Información y Comunicación debe regular el contenido que difunden de los medios de comunicación, para limitar al máximo la criminología mediática que es ejercida por estos, y que permiten mantener el sistema discriminatorio. Si bien el fin de los medios de comunicación su fin es obtener ganancias; las mismas no pueden ir en detrimento del derecho de las personas. Así también se debe buscar erradicar aquella prensa sensacionalista que lo único que busca en un suceso de muerte violenta, es fomentar el morbo y aumentar su rating; y que a la postre termina interfiriendo en la investigación y la búsqueda de los responsables, así como también es instrumento fundamental para la revictimización.



Los medios de comunicación constituyen en uno de los agentes socializadores que mantienen estereotipos sociales que fundamentan la violencia de género y que por lo tanto requieren de un nuevo enfoque, pues de esta forma pueden ayudar a deconstruir aquellas mentalidades estereotipadas.

SEPTIMA: La recopilación de información estadística es fundamental en el diseño de estrategias frente a la lucha contra la violencia de género, es por ello que el INEC debería crear un departamento exclusivo de monitoreo y recopilación de información vinculado con la violencia de género, para lo cual es fundamental tener en cuenta las categorías de sexo y de género y las condiciones sociales de las personas que se investiga. Pues conforme lo refiere el Director del INEC, Jorge García, las “mejores estadísticas generan mejores decisiones”.

ANEXOS

Anexo N° 1

Quito, 02 de Septiembre de 2016

Señora Asambleísta
Gabriela Rivadeneira
Presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador
De mi consideración.

Yo, José Luis Pizarro con CI. 0104757547, estudiante de la Carrera de Género y Desarrollo, Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca; por medio de la presente acudo a Usted para solicitarle de la forma más respetuosa se sirva disponer a quien corresponda para que se me conceda una copia de las actas de la Asamblea de discusión y aprobación del artículos 141 y 142 del Código Orgánico Integral Penal, correspondiente al tipo penal de Femicidio y sus agravantes.

La documentación la necesito para un trabajo de investigación que me encuentro realizando previo a la obtención de mi título universitario.

Indico que por cuanto residio en la ciudad de Cuenca, comedidamente solicito que la documentación antes requerida sea remitida a las siguientes direcciones:

Electrónica: jose.pizarro.uasb@gmail.com

Física: Av. Don Bosco 2-46 y Domingo Savio, Cuenca, Ecuador.

Por la favorable acogida que le dé a la presente le anticipo mi más sincero agradecimiento.

Atentamente

José Luis Pizarro

0104757547





Anexo N° 2

Cuenca, 14 de Julio de 2014

Señor Doctor
Adrián Rojas Calle
Fiscal Provincial del Azuay

Su despacho

De mi consideración,

Yo, José Luis Pizarro con CI. 0104757547, estudiante de la Carrera de Género y Desarrollo-Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca, solicito a Usted de la forma más respetuosa se autorice al Departamento de Estadísticas de la Fiscalía Provincial del Azuay o en su defecto a quien corresponda, a fin de que se conceda la siguiente información debidamente certificada:

- 1) Número de casos de femicidio denunciados por año en la provincia del Azuay, desde la vigencia del COIP hasta la presente fecha
- 2) Número de sentencias obtenidas por el tipo penal de femicidio.

La información la requiero para el trabajo final que me encuentro realizando a fin de poder obtener mi título universitario.

Por la favorable acogida que le dé a la presente le anticipo mi más sincero agradecimiento.

Atentamente



José Luis Pizarro

0104757547



FGE

Documento No. :FPA-GD-2016-000889-EXT
Fecha :2016-07-14 16:32:00
Anexo :S/A
Recibido por :GUERRON SERPA MICHELLE ESTEFANIA
www.fiscalia.gob.ec



FPA-GD-2016-000989-EXT

Oficio No. FPA-UGP-2016-001564-O

Cuenca, 25 de julio de 2016

Asunto: INFORMACIÓN FEMICIDIOS

Jose Luis Pizarro

En su Despacho

En base a su solicitud de fecha 14 de julio del 2016, me permito detallar a continuación, el reporte de las noticias de delitos, que por FEMICIDIOS, se han presentadas en la provincia del Azuay:

FEMICIDIOS AZUAY	TENTATIVA	CONSUMADOS
AZUAY del 2014-08-01 al 2014-12-31	1	0
AZUAY del 2015-01-01 al 2015-12-31	2	2
AZUAY del 2016-01-01 al 2016-07-22	1	1
TOTAL	4	3

Información obtenida del reporte del Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales.

Atentamente,

Dr. Carlos Fernando Tamariz Ochoa
ANALISTA PROVINCIAL DE GESTION PROCESAL 2
FISCALIA PROVINCIAL DE AZUAY

cc:

Anexos:

Fecha de elaboración	Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
----------------------	----------------	---------------	---------------

Anexo N° 3

EL MERCURIO

Cuenca, miércoles 9 de marzo de 2016
www.elmercurio.com.ec

N

Celebración del Día Internacional de la Mujer

Las estadísticas indican que sigue violencia contra mujer

Una de cuatro mujeres sufre violencia sexual, siete de cada 10 mujeres indígenas sufre violencia física o psicológica y en la ciudad seis de cada 10 mujeres.

Según Maldonado, una de cuatro mujeres sufre violencia sexual, siete de cada 10 mujeres indígenas sufre violencia física o psicológica, y en la ciudad seis de cada 10 mujeres. A eso se suma que el 71% de noticias de feminicidio reportadas entre el 10 de agosto de 2014 y el 15 de febrero de 2015 no ha recibido sentencia.

Desequilibrio

Aquellas estadísticas, según Margarita Carranco, de la Red de Mujeres, evidencian que la sociedad ecuatoriana aún no ha superado el patriarcado, que impide encontrar el equilibrio entre los derechos de los hombres y de las mujeres.

A su parecer, la lucha por los derechos de las féminas es de la sociedad en su conjunto. "Una mujer no violentada, no asesinada, no estigmatizada y con una buena inversión en educación genera igualdad de condiciones".

Si bien uno de los problemas es el cultural, el sistema no permite un cambio "porque hombres agresores vienen de padres y abuelos agresores, hombres feminicidas vienen de padres violentadores, y mujeres víctimas vienen de madres abuelas y tatarabuelas maltratadas", dijo.

Cuestionamiento

La activista cuestionó el hecho de que desde el poder se ejerce ese machismo, pues recordó que al inicio de la administración Correa se puso énfasis en impulsar la matriz social, pero hoy la matriz productiva le ha



Colectivos de Mujeres hicieron ayer un plantón frente al Palacio Legislativo para expresar sus puntos de vista en torno a la realidad que viven las mujeres en el país. AN

reemplazado, desapareciendo del gabinete a mujeres ministras.

"Si la sociedad está viendo un presidente con esas actitudes, se las legitima y piensa que las relaciones sociales son así", criticó.

Crítica

Para Virginia Gómez, de la Coalición de Mujeres, este es un día "trágico" porque aún

en el Ecuador no se han reivindicado los derechos de las mujeres en todas sus formas.

Aprovechó la ocasión para criticar la pretendida reforma del gobierno respecto al permiso de 9 meses para madres lactantes. "Detrás de esto se esconde el mensaje implícito de que las mujeres somos causantes de la desnutrición de los niños", asumió. A su juicio, en una sociedad patriarcal no se permite visi-

bilizar la necesidad de impulsar grandes políticas económicas, educativas, sociales y laborales, que sean de beneficio para las mujeres, "porque educar a una mujer es educar a una sociedad".

A criterio de Charo Utrera, exconcejal de Quito y periodista, no es una posición de queja, pero se ha retrocedido en consolidar los derechos de las mujeres. QUITO. (ANL) - (I)



BIBLOGRAFIA

- Acale Sánchez, María, y Agustín Jorge Barreiro. *La discriminación hacia la mujer por razón de género en el Código penal*. 1a. ed. Colección de derecho penal. Madrid: Editorial Reus, 2006.
- Agatón Santander, Isabel. *Justicia de género: un asunto necesario*. Bogotá: Ed. Temis, 2013.
- Albán Gómez, Ernesto. *Régimen penal ecuatoriano*. Quito, Ecuador: Ediciones Legales, 1989.
- Avila Santamaría, Ramiro. *La (in)justicia penal en la democracia constitucional de derechos: una mirada desde es garantismo penal*. 1. ed. Colección profesional Ecuatoriana. Quito: Ediciones Legales EDLE [u.a.], 2013.
- Avila Santamaría, Ramiro, María Judith Salgado Alvarez, Lola Valladares, María José Añón Roig, Ecuador, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Naciones Unidas, y Alto Comisionado para los Derechos Humanos. *El género en el derecho: ensayos críticos*. Quito: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ; Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2009.
- Bacigalupo, Enrique. *Derecho penal: parte general*. 1. ed. Lima: Ara Editores, 2004.
- Beauvoir, Simone de, Teresa López Pardina, y Alicia Martorell. *El segundo sexo*. Madrid: Cátedra, 2005.
- Ben-Yehuda, Nachman. *Deviance and moral boundaries: witchcraft, the occult, science fiction, deviant sciences and scientists*. Chicago: University of Chicago Press, 1985.
- Buompadre, Jorge Eduardo. *Violencia de género, femicidio y derecho penal: los nuevos delitos de género*, 2013.



- Castillejo Manzanares, Raquel, y Ma Ángeles Catalina Benavente, eds. *Violencia de género, justicia restaurativa y mediación*. 1a edición. Temas / La Ley. Las Rozas, Madrid: La Ley, 2011.
- Centro Internacional para el Desarrollo del Niño, “Niños y violencia”, en Inocent Digest,
- Código Orgánico Integral Penal, Suplemento Año I - N° 180
- Convenio OIT.
- Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar La Violencia Contra La Mujer “Convencion De Belem Do Para”.
- Declaración Universal de Derechos Humanos
- Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer.
- Donoso, Arturo J. “Los tipos en blanco y abiertos en el Código Orgánico Integral Penal”, en Ramiro Ávila Santamaría, comp., *Código Orgánico Integral penal: Hacia su mejor aplicación y comprensión*. Quito: Corporación Editora Nacional, 2015.
- Dorothy Petrlik, Ana. “Masculinidades en la tercera edad”, Tesis de Magister, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Sede Perú, 2008.
- Facio, Alda, Lorena Fries, y Washington College of Law, eds. *Género y derecho*. 1. ed. Colección Contraseña. Santiago: Lom Ediciones: La Morada, 1999.
- Feijóo Sánchez, Bernardo. *Retribución y prevención general: un estudio sobre la teoría de la pena y las funciones del derecho penal*. Montevideo: Editorial B. de F [u.a.], 2007.
- Ferrajoli, Luigi. *Derecho y razón: teoría del garantismo penal*. Madrid: Trotta, 2009.
- Ferrajoli, Luigi. *Derecho penal mínimo y otros ensayos*. México DF: Comision Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes, 2008.
- Fiscalía General del Estado, Análisis Penológico 2014-2015. Quito: Dirección de Política Criminal, 2016.



- García Meseguer, Alvaro. *Es sexista la lengua española?: una investigación sobre el género gramatical*. 1a. ed. Papeles de comunicación 4. Barcelona: Ediciones Paidós, 1994.
- Garbay Mancheno, Susy. "El femi(ni)cidio como expresión de dominio patriarcal". En Benavides Llerena, Gina Morela, editora y Chávez Núñez, María Gardenia, editora. *Horizonte de los derechos humanos Ecuador 2012*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Programa Andino de Derechos Humanos, PADH, 2013.
- Instituto Andaluz de la Mujer, Fundación Audiovisual de Andalucía, y Seminario Internacional de Medios de Comunicación y Violencia de Género, eds. *Medios de comunicación y violencia contra las mujeres: Sevilla, 2003*. [Sevilla]: Instituto Andaluz de la Mujer: Fundación Audiovisual de Andalucía, 2003.
- Lagarde, Marcela. *Género y feminismo: desarrollo humano y democracia*. Cuadernos inacabados 25. Madrid: horas y Horas, 1996.
- Larrauri, Elena. *Criminología crítica y violencia de género*. Colección Estructuras y procesos. Serie Derecho. Madrid: Editorial Trotta, 2007.
- Ley N° 779, en Diario Oficial La Gaceta. Guatemala: ,2012.
- Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral, España, 2004.
- Ley Contra La Violencia a la Mujer y a la Familia.
- Ley Orgánica de Educación Intercultural.
- Monárrez Fragoso, Julia Estela. *Trama de una injusticia: feminicidio sexual sistémico en Ciudad Juárez*. 1. ed. Estudios de género serie. México, D.F: Colegio de la Frontera Norte : M.A. Porrúa, 2009.
- Nicole Barrientos, Elizabeth .“Análisis descriptivo de los tipos de violencia de pareja y el periodo de latencia existente desde el comienzo real de violencia hasta el inicio de la ruta crítica”. Tesis de licenciada en enfermería, Universidad Austral de Chile, 2012.
- Olsen, Frances. “El sexo del derecho”, en Ramiro Avila Santamaría et al., *El género en el derecho: ensayos críticos* . Quito: Ministerio de Justicia y



Derechos Humanos ; Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2009.

- Paladines, Jorge Vicente. “Feminismo Punitivo cuando el género se redujo al castigo”, Revista Institucional de la Defensoría Pública del Ecuador, N° 5, 2013).
- Real Academia Española. *Diccionario de la lengua española*. Madrid: Editorial Espasa Calpe, 2001.
- Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual, ed. *Tipificación del femicidio en Chile: un debate abierto*. Santiago, Chile: Red, 2009.
- Rosales, Elsie. “Sistema penal y Estado constitucional en Venezuela”. En Elsie Rosales y Lola Aniyar de Castro, com., *Cuestion Criminal y Derechos Humanos: La perspectiva crítica*. Caracas: ICP-UCV, 2007.
- Russell, Diana E. H, Roberta A Harmes, Marcela Lagarde y de los Ríos, y Guillermo Vega Zaragoza. *Feminicidio: una perspectiva global*. México: UNAM, Centro de Investigaciones Interdisciplinaria en Ciencias y Humanidades, 2006.
- ———. *Feminicidio: una perspectiva global*. México: UNAM, Centro de Investigaciones Interdisciplinaria en Ciencias y Humanidades, 2006.
- Schüssler Fiorenza, Elisabeth. *Bread not stone: the challenge of feminist biblical interpretation: with a new afterword*. 10th anniversary ed. Boston: Beacon Press, 1995.
- Smart, Carol. *Feminism and the power of law*, (Londres: Routledge, 1989), citado por Isabel Agatón Santander, *Justicia de género: un asunto necesario*. Bogotá: Ed. Temis, 2013.
- Sotomayor Acosta, Juan Oberto, y Luigi Ferrajoli, eds. *Garantismo y derecho penal*. Bogotá, Colombia: Editorial Temis, 2006.
- Taylor, Ian R, Paul Walton, y Jock Young. *La nueva criminología: contribución a una teoría social de la conducta desviada*. Buenos Aires: Amorrortu, 2007.



- Toledo Vásquez, Patsilí. «¿Tipificar el Femicidio?» *Anuario de Derechos Humanos* 0, n.º 4 (1 de enero de 2008). doi:10.5354/0718-2279.2008.13660.
- Toledo Vásquez, Patsilí, y Patricia Laurenzo Copello. *Femicidio*. 1. ed. Buenos Aires: Didot, 2014.
- Toledo Vásquez, Patsilí, Naciones Unidas, Derechos Humanos, y Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. *Feminicidio*. México: Naciones Unidas : Derechos Humanos : OACNUDH, 2009.
- Toledo Vásquez, Patsilí. “Leyes sobre femicidio y violencia contra las mujeres. Análisis comparado y problemáticas pendientes”, en Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual, ed., *Tipificación del femicidio en Chile: un debate abierto*. Santiago, Chile: Red, 2009.
- Varela, Nuria, y Espido Freire. *Feminismo para principiantes*. Barcelona: Ediciones B, 2005.
- Zaffaroni, Eugenio Raúl. *La palabra de los muertos: conferencias de criminología cautelar*. 1. reimpr. Buenos Aires: Ediar, 2011.
- Zaffaroni, Eugenio Raúl. “El discurso feminista y el poder punitivo”. En Ramiro Ávila Santamaría et al., *El género en el derecho: ensayos críticos*. Quito: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2009.

Páginas electrónicas consultadas

- Ávila Santamaría, Ramiro. “Género, derecho y discriminación”. Quito:UASB-DIGITAL, 2012. «<http://hdl.handle.net/10644/2975>». Consulta: 25 de Mayo de 2016.
- Carrillo Siles, Beatriz . “Importancia del curriculum oculto en el proceso de enseñanza -aprendizaje”. «<http://www.csi->



csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_14/BEATRIZ_CA
RRILLO_2.pdf.» Consulta: 03 de abril de 2016.

- Femicide: Power of a Name.
«http://www.dianarussell.com/femicide_the_power_of_a_name.html».
Consulta: 05 de noviembre de 2015.
- Gil Rodríguez, Eva Patricia, Imma Lloret Ayter, y Margot Pujal i Llombart. *La violencia de género*. Barcelona: Editorial UOC, 2007.
«<http://public.ebib.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=3208783>. »
- Krug, Etienne G, Pan American Health Organization, y World Health Organization. *Informe mundial sobre la violencia y la salud*. Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud, 2003.
«<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=113735>». Consulta: 12 de febrero de 2016
- La tipificación del femicidio-feminicidio. Otra vía hacia el abandono de la neutralidad.pdf.
«<http://www.feminicidio.net/sites/default/files/La%20tipificaci%C3%B3n%20del%20femicidio-feminicidio.%20Otra%20v%C3%ADa%20hacia%20el%20abandono%20de%20la%20neutralidad.pdf>». Consulta: 04 de enero de 2016.
- Montero Gómez, Andrés. Síndrome de adaptación paradójica a la violencia doméstica: una propuesta teórica. Madrid: Colegio Oficial de psicólogos de Madrid, 2001. «<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=180618320001>> ISSN 1130-5274». Consulta: 23 de Junio de 2016.
- Tamayo, Juan José. "Discriminación de las mujeres y violencia de género en las religiones". España. «<http://fhu.unse.edu.ar/boletin52/dmvg.pdf>.»
Consulta: 05 de abril de 2016
- Toledo Vásquez, Patsilí. "La tipificación del femicidio-feminicidio. Otra vía hacia el abandono de la neutralidad". «<http://www.feminicidio.net/sites/default/files/La%20tipificaci%C3%B3n%20del%20femicidio-feminicidio-feminicidio.%20Otra%20v%C3%ADa%20hacia%20el%20abandono%20de%20la%20neutralidad.pdf>».



feminicidio.%20Otra%20v%C3%ADa%20hacia%20el%20abandono%20de
%20la%20neutralidad.pdf» Consulta: 4 de enero de 2016.

- Treacy, Guillermo. "Categorías sospechosas y control de constitucionalidad".
«<http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/89/treacy-guillermo-f-categorias-sospechosas-y-control-de-constitucionalidad.pdf>.» Consulta: 21 de junio de 2016